

Universidad Católica de Santa María

Escuela de Postgrado

Maestría en Derecho Constitucional



VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007, DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – PUNO, AÑO 2011 AL 2013

Tesis presentado por la Bachiller:

Huisa Mamani, Lourdes Jakelin

Para optar el Grado Académico de:

Maestro en Derecho Constitucional

Asesora:

Dra. Kuong Morales, Shiuli

Arequipa – Perú

2018

Arequipa, 12 de septiembre de 2017 Señor Doctor

HUGO TEJADA PRADELL

Director de la Escuela de Postgrado de la
Universidad Católica de Santa María de Arequipa

CIUDAD.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento el dictamen del borrador de tesis para optar el grado de Magíster en Derecho Constitucional denominado "VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 27007, DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA, AÑO 2012 AL 2013"; presentado por la bachiller LOURDES JAKELIN HUISA MAMANI.

Al efecto, consideramos que se han subsanado las observaciones anteriormente formuladas, por lo que reúne las condiciones para su posterior sustentación oral. Sin perjuicio de lo señalado, debe corregirse la ortografía y se sugiere que el Capítulo de resultados se estructure en base a los títulos de las tablas; así por ejemplo: 2.1 Casos recepcionados de los años 2011 al 2013.

Es cuanto informo a Ud.



DR. EDUARDO J. MEZA FLORES

Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María
Dictamen de Borrador de Tesis Para el Grado Académico de Magister en
Derecho Constitucional

A : DR. HUGO TEJADA PRADELL
Director de la Escuela de Postgrado de la UCSM

DE : Jurado Dictaminador

ASUNTO : Borrador de tesis

EXPEDIENTE : N° 15015270

BACHILLER : HUISA MAMANI, Lourdes Jakelin

FECHA : 17 de abril del 2015

Señor Director Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de hacer de su conocimiento que el Expediente N° 15015270 presentado por la Bachiller: **HUISA MAMANI, Lourdes Jakelin**, en el que solicita Dictamen para el Borrador de tesis titulada: **"VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY N° 27007, DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR PUNO, AÑOS 2011 AL 2013"**, con el que pretende optar el Grado Académico de Magister en Derecho Constitucional.

Luego de haber revisado su contenido, el Borrador presentado reúne las condiciones necesarias para su aprobación y posterior sustentación.



DRA. SHIULI KUONG MORALES
DICTAMINADOR



Arequipa, 23 de Julio del 2015

Señor Doctor
Hugo Tejada Predell.
Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María
Ciudad.-

Referencia Dictamen de Proyecto de Tesis

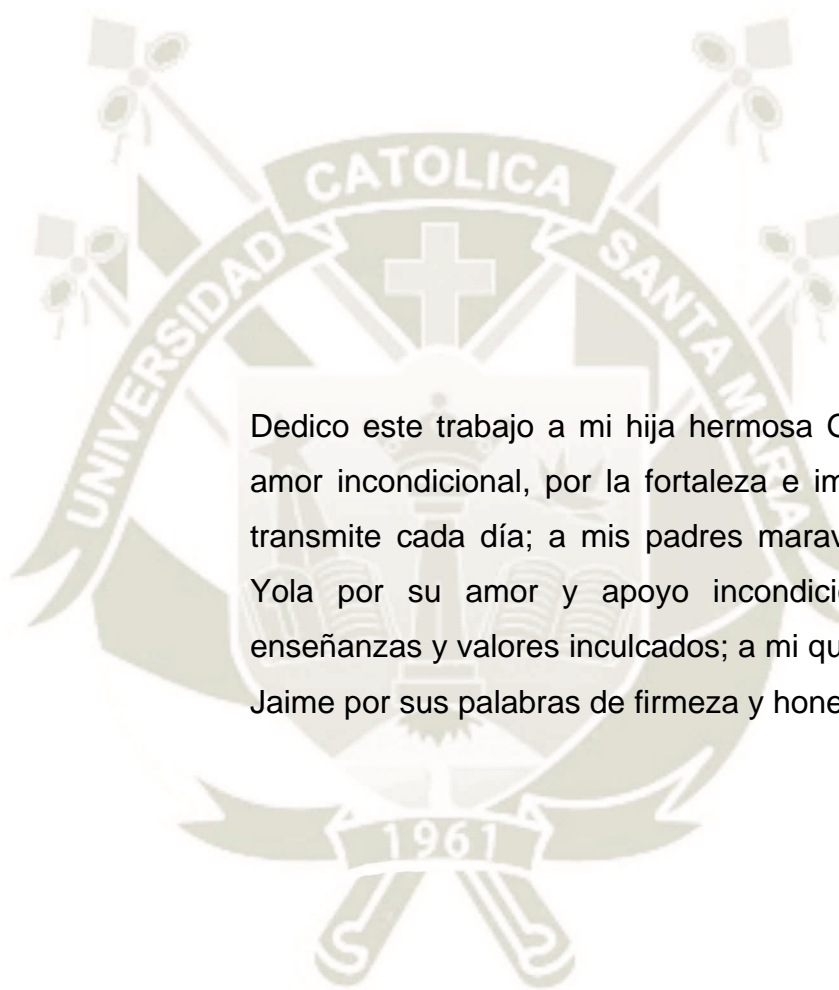
Previo un cordial, saludo, me dirijo a Ud., con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento el Dictamen de Proyecto de Tesis en los siguientes términos:

Que en el expediente signado con el numero 15015270, presentado por la Bachiller **HUISA MAMANI, Lourdes Jakelin**; he sido designado como jurado dictaminador, en el proyecto de tesis titulado **"VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 2DO. DE LA LEY NRO. 27007, DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR- PUNO, AÑO 2011 AL 2013"**

Al respecto, salvo mejor, habiéndose aclarado satisfactoriamente las observaciones verbales, mi dictamen es por que **SE APRUEBE**, el proyecto presentado.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial estima personal

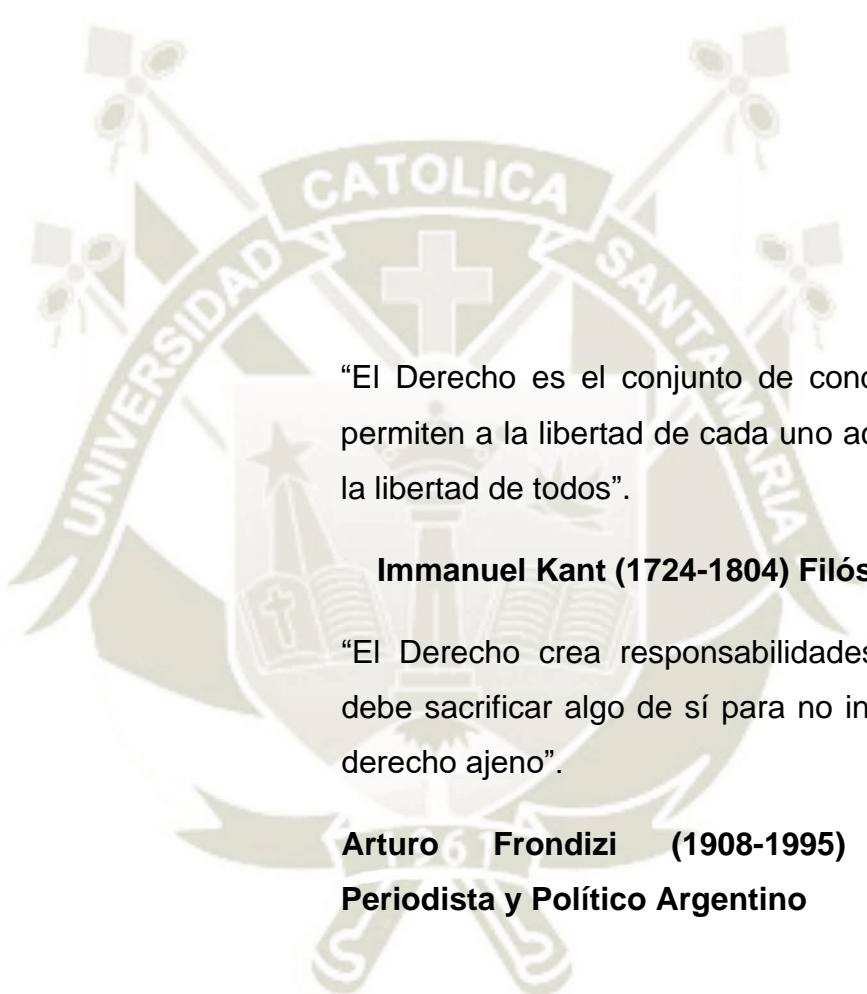
Magíster: **Javier Eduardo Fernández Dávila Mercado**
Dictaminador



Dedico este trabajo a mi hija hermosa Gianella por su amor incondicional, por la fortaleza e impulso que me transmite cada día; a mis padres maravillosos Juan y Yola por su amor y apoyo incondicional, por sus enseñanzas y valores inculcados; a mi querido hermano Jaime por sus palabras de firmeza y honestidad.



Agradezco infinitamente a Dios por permitirme llegar a este momento tan importante de mi formación profesional. Mi gratitud a los Docentes Catedráticos de la Universidad Católica de Santa María. A mi hija, mi familia, amigos y a todas aquellas personas por su apoyo constante e incondicional.



“El Derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”.

Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo Alemán

“El Derecho crea responsabilidades; cada uno debe sacrificar algo de sí para no interferir en el derecho ajeno”.

**Arturo Frondizi (1908-1995) Abogado,
Periodista y Político Argentino**

INTRODUCCIÓN

Los alimentos jurídicamente implica un derecho y un deber, que se encuentra previsto en nuestra Constitución Política del Estado; su vital importancia radica en que, los menores de edad gocen de este derecho, por ser personas vulnerables y se encuentran en plena etapa de crecimiento y desarrollo, en bienestar de su futuro y que puedan valerse por sí mismos. Por experiencia propia, pude observar en el lugar donde efectuaba mis prácticas pre profesionales, que recurrían a realizar consultas de diversas materias, por lo general, sobre el tema de alimentos; llevando sus Actas de Conciliación celebradas en una DEMUNA, a razón de que, no se cumplían los acuerdos adoptados y plasmados; varias de estas Actas no contenían los requisitos necesarios para poder iniciar un proceso de ejecución, y solo se podía optar como medio probatorio para el inicio del proceso judicial de alimentos, que demandaría tiempo, inversión de dinero y desgaste emocional. En tanto, esta situación acarrea la vulneración del derecho alimentario, en el sentido que las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA al no poder ser ejecutables y requieran necesariamente iniciar un proceso judicial de alimentos; siendo un perjuicio para las personas de buena Fe que recurren a la DEMUNA, para solucionar pacíficamente sus problemas, mediante acuerdos que son plasmados en el Acta. Es necesario prestar atención a esta problemática, ya que, la DEMUNA cumple funciones esenciales en resguardo de los derechos del niño y del adolescente; y la ineficacia de la ejecución del Acta de Conciliación, limita el ejercicio del derecho alimentario que tiene todo menor de edad; de igual forma, la DEMUNA brinda un servicio gratuito, lo que beneficia a una gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos, y más aún, si en dicha ciudad no cuentan con un Centro de Conciliación Autorizado. Es por ello, que se debe tomar medidas adecuadas, que permitan a las DEMUNA brindar un servicio eficiente y lograr la factibilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución.

RESUMEN

La presente tesis comprende un estudio de investigación sobre la vulneración del Derecho Alimentario, previsto en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política del Estado, que dispone: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. (...)”, dado que este derecho constitucional es imprescindible para la subsistencia de una persona, especialmente de un menor de edad que está en etapa de crecimiento y desarrollo; asimismo en el artículo 472° del Código Civil establece: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (...)”; es por ello, su vital importancia porque al ejercer este derecho, será en protección de la vida, la salud y la dignidad humana. La vulneración del Derecho Alimentario en esta investigación es debido a la inejecución del Acta de Conciliación, por el incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007; en razón, de que en la actualidad existe la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA distribuido por lo general en las diferentes Municipalidades a nivel nacional, quienes cumplen una función muy importante y de forma gratuita, beneficiando a una gran parte de la población con bajos recursos económicos; y a pesar de la facultad otorgada en la Ley N° 27007 respecto a la celebración de Actas de Conciliación con carácter de Título de Ejecución, varias de estas Actas no son materia de ejecución a razón de que no cumplen con los requisitos previstos en la mencionada Ley, considerándose solo como medio probatorio para el inicio del proceso judicial de alimentos, lo que conlleva a una pérdida de tiempo y la ineficacia del Acta, ya que por ser un acuerdo voluntario y pacífico entre dos partes, su cumplimiento debe ser obligatorio, contrario sensu se debe ejecutar los acuerdos adoptados ante la instancia correspondiente.

Palabras Clave: Derecho Alimentario, Acta de Conciliación, Defensoría del Niño y del Adolescente (DEMUNA).

ABSTRACT

This thesis consists of a research study on the violation of the Food Law under the second paragraph of Article 6° of the Constitution of the State, which provides: "It is the duty and right of parents to feed, educate and provide security for their children. (...)", since this constitutional right is essential to the livelihood of a person, especially a minor who is growing and developing; also in Article 472° of the Civil Code provides: "The term food is essential for sustenance, housing, clothing, education, instruction and training for work, medical and psychological assistance and recreation, according to the situation and possibilities of the family (...)" which is why it's life importance because, in exercising this right, it will be protection of life, health and human dignity.

The violation of the Food Law in this research is due to non-performance of the Act of Settlement for non-compliance with the formalities prescribed in Article 2° of Law N° 27007; on the grounds that there is now the Municipal Office of the Child and Adolescent advocacy - DEMUNA usually distributed in different municipalities nationwide, that plays a very important role and for free and benefit of a large part of the low income population; despite the authority granted in the Act N° 27007 holding Conciliation Proceedings with execution character, several of these Acts are not subject to execution at the rate of not meeting the requirements of the Act are considered only as evidence for the onset of food court process, which leads to a waste of time and inefficiency of the Act, as being a peaceful and voluntary agreement between two parties, compliance should be mandatory counterclockwise, it must be implemented to the resolutions adopted at the corresponding instance.

Key Words: Food Law, Conciliation Act, Defender of the Child and Adolescent (DEMUNA).

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
RESUMEN	
ABSTRACT	
CAPÍTULO I	1
VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	
1.1. PERJUICIO DEL DERECHO A LA VIDA	
1.1.1. El concebido en el Ordenamiento Jurídico	2
1.1.2. Derecho Alimentario	4
1.1.3. Clasificación del Derecho Alimentario	15
1.1.4. Naturaleza Jurídica	19
1.2. TRANSGRESIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO	
1.2.1. Obligados a la Prestación Alimentaria	23
1.2.2. Presupuestos de la Obligación Alimentaria	24
1.3. MARCO NORMATIVO	
1.3.1. Legislación Nacional	30
1.3.2. Legislación Internacional	33
1.4. INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007	
1.4.1. Ineficacia del Acta de Conciliación	39
1.4.2. Conciliación Extrajudicial	41
1.4.3. Principios	49
1.4.4. Formalidad	52
1.4.5. Validez del Acta de Conciliación	54
1.4.6. Conciliación en materia de familia	55

1.5. INOPERANCIA DE LA FACULTAD OTORGADA POR LA LEY N° 27007

1.5.1. Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente	58
1.5.2. Etapas del Procedimiento de Atención de Casos	64
1.5.3. Requisitos para que las Defensorías del Niño y Adolescente puedan realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución	67
1.5.4. Intervención de la Defensoría del Niño y del Adolescente	69
1.5.5. Materias competentes de la Defensoría del Niño y del Adolescente	70

1.6. MARCO NORMATIVO

1.6.1. Legislación	71
1.6.2. Derechos del Niño, Niña y Adolescente	74

CAPÍTULO II

VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007 (RESULTADOS)

2.1. CASOS RECEPCIONADOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 01	77
-------------	-----------

2.2. CASOS RECEPCIONADOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 SOBRE ALIMENTOS RESPECTO AL TOTAL DE CASOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 02	81
-------------	-----------

2.3. CASOS SOBRE ALIMENTOS Y LAS DEMÁS MATERIAS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 RECEPCIONADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 03	85
-------------	-----------

2.4. CONCLUSIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS SOBRE ALIMENTOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 04	89
-------------	-----------

2.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS (HIJOS MENORES Y MAYORES DE EDAD) DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA REGISTRADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MPM – AYAVIRI

TABLA N° 05	93
-------------	-----------

2.6. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLASMADOS EN LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CONFORME A LOS APORTES DE PENSIONES POR INTERMEDIO DE LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MPM- AYAVIRI

TABLA N° 06 98

2.7. MÁXIMOS Y MÍNIMOS APORTES DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE ACUERDO A LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CELEBRADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MPM- AYAVIRI

TABLA N° 07 102

2.8. NÚMERO DE BENEFICIARIOS SEGÚN EL MODO DE CONCLUSIÓN REGISTRADA EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI

TABLA N° 08 106

2.9. SÍNTESIS DE LA ENCUESTA FORMULADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MPM-AYAVIRI 110

CONCLUSIONES 112

SUGERENCIAS 114

BIBLIOGRAFÍA 116

ANEXOS 119

PROYECTO DE TESIS 121

MATRÍZ DE RESULTADOS 165

LEY N° 27007 167

CAPÍTULO I

VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

1.1. PERJUICIO DEL DERECHO A LA VIDA

El derecho a la vida, es un derecho que le corresponde a todo ser humano; por lo tanto, es universal y necesario, para poder ejercer todos los demás derechos fundamentales que posee la persona; de ahí radica su vital importancia, ya que, permite el desarrollo de la libertad de una vida digna y basada en principios de solidaridad y respeto, hacia el derecho de los demás seres humanos. Este derecho es inherente, y de naturaleza innata del ser humano, se encuentra relacionado con la dignidad humana.

Ante ello, Fernández et al. (2005), afirma:

El derecho-deber a la vida -o tal vez al vivir, como sería pertinente expresarse el derecho primario, básico y natural que posee la persona. Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. El ser humano goza de este derecho, que le es inherente simplemente por ser tal, por el hecho de haber sido concebido. (...). El derecho a la vida es el presupuesto indispensable de

todos los demás derechos. Sin vida no cabe el goce y el disfrute de todos los derechos que son inherentes a la persona humana. (p. 48)

Constitucionalmente, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es considerado como el fin supremo de la sociedad y el estado; por ello toda persona tiene derecho a la vida, y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Por tanto, el derecho a la vida es inherente al ser humano, y su protección debe ser suprema; ello implica la satisfacción de necesidades básicas, como el de alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, recreación y el bienestar general.

Ahora bien, para el ejercicio pleno del derecho a la vida, en especial para los menores de edad, que son más vulnerables y aún, no pueden valerse por sí mismos; requieren del derecho a la supervivencia, es decir, el derecho alimentario porque le permite el desarrollo adecuado e indispensable, para que el menor de edad pueda desenvolverse dentro de la sociedad, y a futuro pueda contribuir con el desarrollo del país.

1.1.1. EL CONCEBIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Respecto al inicio de la vida humana, siendo considerado desde el momento de la concepción, donde inicia su protección jurídica en el ordenamiento jurídico; es decir, desde el momento de la concepción, se adquieren derechos que deben ser protegidos, ya que estos derechos puedan ser ejercidos de forma plena por el ser humano. Constitucionalmente el (Tribunal Constitucional, 2015), hace mención: “El artículo 2° inciso 1, dispone: Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, (...). El concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece” (p. 13). Asimismo, el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), en el artículo 1°, establece: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece”. Si bien es cierto que, desde la concepción se da inicio a la vida humana, existen diversos criterios jurídicos que convierten este tema controversial y discutible.

Es así que, Fernández et al. (2005), señala:

En relación al momento en que se inicia la vida es preciso mencionar que, a nivel internacional, prevalece el criterio señalado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción. El Pacto de San José dispone que el derecho a la vida deba ser protegido a partir de la concepción. (p. 405)

Por otro lado, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) señala:

186. No obstante lo anterior, la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término “concepción”. Al respecto, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes en el presente caso, el Tribunal constata que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. 189. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el término “concepción” desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. Asimismo, la expresión “en general” permite inferir excepciones a una regla, pero la interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas excepciones. (p. 60)

A la existencia de diversidad de criterios, que amerita un análisis profundizado del tema, es necesario señalar que, particularmente opto por considerar que el inicio de la vida se da a partir de la concepción, consecuentemente, debe darse inicio a su protección legal, considerándose como sujeto de derecho. Es por esta razón, que el derecho a la vida es inherente e imprescindible para el ser humano, y su protección legal es indispensable, por ser considerado el fin supremo de la sociedad y el estado.

Por otro lado, el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), en el artículo 472°, establece: “(...) También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”. En ese sentido la madre gestante, tiene derecho a pedir y recibir una pensión de alimentos, en razón de que el derecho reconoce que la vida humana inicia desde la concepción; por ello comprende los gastos del embarazo desde la etapa de la concepción hasta la etapa del postparto. Ante ello, el derecho del concebido respecto a los alimentos, es vital e imprescindible, siendo el concebido sujeto de derecho que requiere de un desarrollo adecuado para su posterior nacimiento; por ser el derecho alimentario, primordial e indispensable para el desarrollo y bienestar.

1.1.2. DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario, es considerado un derecho Constitucional por su vital importancia, y por beneficiar a los menores de edad, quienes son vulnerables y requieren del ejercicio pleno de este derecho, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. En tal sentido, (Fernández et al., 2005), establece: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (...)” (p. 402). Siendo, el derecho alimentario, un derecho que le corresponde a todo ser humano, como un derecho natural, que tiene origen en las necesidades vitales de la propia naturaleza humana; por ello, es considerado como un derecho fundamental, de categoría especial, que forma parte de las instituciones jurídicas del derecho de familia. Por otro lado, (Rubio, 1999) señala: “La Constitución rescata dos que son la esencia de la institución: los padres tienen el deber y el derecho de alimentar, educar y dar

seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres” (p. 79).

A razón de ello, nace el respeto pleno y el ejercicio del derecho alimentario, a efectos de proteger la vida a través de la subsistencia y supervivencia, ya que sin ello, se estaría vulnerando el derecho primordial del ser humano, que es el derecho a la vida y limitando el ejercicio de sus demás derechos fundamentales, que se encuentran previstos en nuestra Carta Magna. El menor de edad, requiere satisfacer sus necesidades vitales, para que pueda desarrollarse de forma adecuada y tener una vida digna, para que posteriormente contribuya con el desarrollo del país. Las normas legales, deben garantizar la protección del derecho alimentario; a través de sus instrumentos garantistas, que regulen el ejercicio de los derechos inherentes al ser humano, considero que este derecho Constitucional que está referido a los alimentos, se debe priorizar por ser indispensable y sumamente necesario, su regulación debe estar reflejada a nuestra realidad en todo el ámbito nacional.

1.1.2.1. IMPORTANCIA DEL DERECHO ALIMENTARIO

La importancia del derecho alimentario, radica en cubrir las necesidades básicas de todo ser humano, para su subsistencia por ser un derecho vital; no solo comprende la alimentación en sí, sino que también vivienda, vestido, salud, educación, recreación, entre otros; siendo parte integral del niño y del adolescente. Es así que, (Méndez, 2001) señala: “Que su finalidad es obviamente asistencial y, en sí, extra patrimonial, por encontrarse en juego la conservación de la vida” (p. 451).

De igual forma, Díez-Picazo y Gullón (1983), afirma al respecto:

Que el primer bien que una persona posee en el orden jurídico es su vida. El primer interés que tiene es su conservación y la primera necesidad con que se enfrenta es procurarse los medios para ello. Ningún ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente ante

esta cuestión, por lo que las leyes establecen preceptos que tienden a asegurar los bienes vitales, satisfacer el interés de ellos y facilitar la obtención de los medios de conservación. Sin embargo, esporádicos preceptos y aisladas obligaciones son insuficientes para asegurar en todo momento aquellos bienes e intereses. (p. 49)

El ordenamiento jurídico debe estar acorde a la realidad, con referente al derecho alimentario, y su prioridad debe ser eficiente y urgente, al vulnerarse este derecho constitucional, se pone en peligro el derecho a la vida, que es un bien jurídico protegido, que amerita atención y una adecuada regulación.

Es por esta razón, que Varsi (2012), es de la opinión:

La importancia del derecho alimentario es cubrir un estado de necesidad de quien lo solicita por ser un derecho vital. Su significado es más lato de aquel otorgado por el lenguaje común. No solo se refiere al sustento (...), también comprende habitación, vestido, asistencia médica y, dependiendo de la edad del alimentista. Incluirá la educación y esparcimiento como parte importante de la atención integral del niño y adolescente. (p. 418)

Es necesario e indispensable el derecho a los alimentos, porque permite un desarrollo adecuado y pleno del ser humano –especialmente del menor de edad-, con el fin de que pueda valerse por sí mismo a futuro; los padres tienen el deber de cuidar y velar por sus hijos, este derecho debe ser protegido en bienestar de los niños y adolescentes, que forman parte de la población más vulnerable, y que ameritan mayor atención. El derecho alimentario es primordial, ya que no solo se trata de alimentación, sino también de vestido, salud, educación, recreación, vivienda, y todo lo que el alimentista necesita para su desarrollo integral y bienestar general.

Por otro lado, Peralta (2008) señala al respecto:

De acuerdo con nuestra sistemática jurídica civil el contenido de la obligación alimentaria son las prestaciones de dar y comprende todo lo que es indispensable para atender el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, pero si el alimentista fuera menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo. (p. 561)

Ahora bien, Campana (2003), afirma lo siguiente:

Así llegamos al mundo contemporáneo del Derecho, donde al ocuparse de la palabra alimentos, en esta se encuentran contenidas: Sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, gastos del parto y recreación. Es decir, en el vocablo alimentos, jurídicamente hablando, están comprendidas todas las asistencias necesarias e impostergables que se otorgan a las personas para asegurar su subsistencia. (p. 24)

De ahí nace la vital importancia del derecho a los alimentos, siendo una necesidad básica e indispensable, para que un ser humano pueda vivir y posteriormente contribuya en el desarrollo de la sociedad.

En ese sentido, Palacio (2004), señala:

Toda persona humana como sujeto de derecho, requiere de una subsistencia adecuada que comprende: alimentación, salud, educación, vivienda, vestido, entre otros; el ser humano en los primeros años de su vida se halla incapacitado para sobrevivir por su propio esfuerzo, por su actividad de trabajo (...). Luego este deber impuesto por la naturaleza biológica, por la moral, el instinto y la razón, se hace ya más consciente para al final convertirse en un deber jurídico, en un imperativo de la ley civil. (p. 429)

1.1.2.2. DEFINICIÓN DE ALIMENTOS

La definición de alimentos, es muy compleja y con una diversidad de criterios, los cuales desglosare para poder apreciar que es lo que abarca los alimentos, y a que se encuentra vinculado; es necesario recabar diversos criterios al respecto.

Empezaremos con la opinión de Peralta (2008) quien indica:

La palabra alimentos proviene del latín *alimentum* que a su vez deriva de *alo* que significa simplemente nutrir; empero, no faltan quienes afirman que procede del término *álere*, con la acepción de alimento o cualquier otra sustancia que sirve como nutriente, aun cuando es lo menos probable. En cualquier caso está referido al sustento diario que requiere una persona para vivir. (p. 561)

Los seres humanos necesitamos de alimentos para nuestra subsistencia; el concebido que es sujeto derecho, requiere alimentarse y lo hace a través del cordón umbilical que lo une con la madre, desde este momento se da inicio a la vida humana, que requiere de una subsistencia adecuada hasta el momento de su nacimiento, y posteriormente para su crecimiento y desarrollo vital; considerándose un ser vulnerable que requiere de los alimentos que deben darle sus padres, siendo un derecho primordial y necesario; es por ello su vital importancia, ya que sin los alimentos los seres humanos no podemos vivir.

En ese entender, Aguilar (1994) afirma que:

La obligación que tienen los padres de atender a la subsistencia de su prole; es el deber moral y jurídico más importante que tiene los padres frente a sus descendientes que no termina tan solo con la provisión de elementos materiales necesarios para su supervivencia, sino que, se hace extensivo a su formación integral; hasta que estén

debidamente capacitados para subvenir decorosamente a su propia subsistencia. (p. 53)

Ahora bien, Sánchez (1912), al respecto sostiene que:

De todos los términos relacionados con la deuda alimentaria, asistencia, existencia, alimentos, el fundamental es el de asistencia, expresión de la necesidad que tiene el ser humano, atendida su debilidad al nacer, su deficiencia hasta cierta edad y el desarrollo gradual ulterior para proveer por sí a las exigencias de su vida física, intelectual y moral e incluso su insuficiencia individual dentro del orden social para el cumplimiento por sí solo de todos los fines del destino humano. (p. 1224)

1.1.2.3. ELEMENTOS DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario está compuesto por los siguientes elementos:

A. ELEMENTO PERSONAL

- ALIMENTISTA.- Según Varsi (2012) señala:

Es la persona beneficiada con los alimentos. El titular del derecho alimentario. Llamado también derechohabiente, pretensor, beneficiado, acreedor alimentario, etc. Del artículo 474° del Código, que trata sobre las personas que se deben recíprocamente alimentos, se puede inferir quiénes son las personas beneficiadas. Así tenemos que son: El cónyuge, los ascendientes y descendientes, y los hermanos. (p. 439)

- ALIMENTANTE.- Conforme a lo que señala (Varsi, 2012): “Es la persona obligada al pago de los alimentos. El titular de la obligación alimentaria, del deber jurídico de la prestación familiar. Llamado alimentante, alimentador, obligado, deudor alimentario” (p. 439).

Es la persona que está obligada a prestar los alimentos al alimentista, así cubrir las necesidades básicas, por ser un derecho inherente al ser humano, y más aún, tratándose de menores de edad, que son considerados los más vulnerables por no encontrarse en la capacidad de sostenerse por sí mismos.

B. ELEMENTO MATERIAL

Respecto al elemento material, explica Varsi (2012):

Es la cuota, renta, pago, pensión alimenticia que el alimentante cumple con el alimentista. Se trata de una deuda de valor. Pueden clasificarse en: *Devengadas*; aquellas debidas, atrasadas. *Canceladas*; aquellas pagadas, saldadas. Y *Futuras*; aquellas a devengarse, de cumplimiento mediato. (p. 440)

Por otro lado, (Peralta, 2008) afirma: “La pensión alimenticia, es la asignación fijada voluntaria o judicialmente para la subsistencia de un pariente o persona que se halla en estado de necesidad la cual concierne generalmente a las pensiones alimenticias devengadas” (p. 565).

1.1.2.4. CARACTERÍSTICAS

Con referente a las características del derecho alimentario, que recae en el titular del derecho; y en la Obligación Alimentaria, que recae en el titular del deber jurídico; siendo las siguientes:

A. DERECHO ALIMENTARIO.- Conforme a lo que señala (Peralta, 2008), señala: “El titular de este derecho es el alimentista que puede exigirlo cuando se halle en estado de necesidad” (p. 564). Siendo los siguientes:

- **PERSONAL.-** Según (Peralta, 2008); “Pues se trata de un derecho personalísimo que tiene por objeto asegurar la subsistencia de su

titular, por consiguiente dicha titularidad no puede desprenderse de él” (p. 564).

Por otro lado, Varsi (2012) afirma:

El derecho alimentario tiene un carácter excepcional, es *instuito personae*; es decir, estrictamente personal, propísima. Está orientado a garantizar la subsistencia de una persona. Ambos, derecho alimentario y persona, se convierten en una dicotomía inseparable en tanto subsista el estado de necesidad del alimentista que tiene derecho a exigirlos, cobrarlos y gozarlos. El carácter personal del derecho alimentario, resumido en la garantía de la subsistencia del alimentista, hace que esta se encuentre fuera de todo comercio, impidiendo así que pueda ser objeto de transferencia, cesión, compensación, embargo o renuncia. (p. 432)

- **INTRANSMISIBLE.-** Según (Peralta, 2008) señala: “Por ser también un derecho personalísimo y en razón de que el derecho alimentario no puede ser objeto de transferencias inter vivos ni transmisión mortis causa” (p. 564). Asimismo, (Campana, 2003) afirma: “La intransmisibilidad del derecho alimentario, es –además– una consecuencia de la característica anterior; pues, siendo que la obligación alimentaria es personalísima, ésta se encuentra destinada a la subsistencia del acreedor, el cual se encuentra impedido de transmitir su derecho mismo” (p. 77).

- **IRRENUNCIABLE.-** Afirma (Peralta, 2008): “Ya que el alimentista puede dejar de pedir alimentos, pero no abdicar ese derecho; de lo contrario significaría renunciar a la vida misma” (p. 564).

Por otro lado, Varsi (2012) señala:

El derecho alimentario se encuentra fuera de todo comercio, razón por la cual se sostiene que los alimentos son irrenunciables. Hacerlo equivaldría a la renuncia del derecho mismo. Consecuentemente, el alimentista quedaría desamparado y estaría abdicando a la vida. Sin embargo, y entendida la diferencia entre el derecho alimentario y pensión alimenticia podemos decir que estas últimas sí pueden ser materia de renuncia o transacción y compensación, en ciertos casos siempre que se compruebe el mismo origen de las obligaciones. El derecho a cobrarlas puede ser transferido inter vivos o mortis causa. La acción de cobro es imprescriptible. (p. 433)

- INTRANSIGIBLE.- Como señala (Peralta, 2008): “Desde que el derecho alimentario no puede ser objeto de concesiones recíprocas, para poner fin a una relación jurídica familiar” (p. 564).

Asimismo, Varsi (2012) es de la opinión que:

El derecho alimentario se encuentra fuera de comercio, no puede ser transado. Pueden ser materia de transacción las pensiones devengadas y no percibidas, que forman parte de la obligación alimentaria; no los alimentos futuros en razón de su necesidad, en este contexto se impide que por un acto de imprevisión o de debilidad de la persona pueda quedar privada de lo que es indispensable para su subsistencia. Debe distinguirse entre el carácter de intransigibilidad del derecho alimentario y el convenio al que puedan arribar las partes en un litigio sobre pensiones alimenticias demandadas en el que puede transigirse sobre montos o modos de satisfacer la

obligación, lo que resulta manifiestamente útil para las partes.
(p. 433)

- **INCOMPENSABLE.-** Según (Peralta, 2008) afirma: “Porque la subsistencia humana no puede trocarse por ningún otro derecho, ni pueden extinguirse recíprocamente las obligaciones alimentarias” (p. 564).

De igual forma Campana (2003) da su opinión al respecto:

Sobre el carácter de incompensable que goza el derecho alimentario, Bonet ha sostenido que: “El sustento de la persona no es un simple derecho individual, sujeto a la libre disposición del particular, y sí un interés protegido en vista de un interés público y aun contra la voluntad de su titular. Pero podrán renunciarse y compensarse las pensiones alimenticias atrasadas”. (p. 84)

- **IMPREScriptible.-** Al respecto (Peralta, 2008) señala: “En razón de que el derecho para exigir alimentos no se extingue, en tanto subsista aquél y el estado de necesidad. El Código no consagra expresamente este carácter, pero se desprende de su irrenunciabilidad” (p. 564).

Ahora bien, según Varsi (2012) afirma:

La acción de demandar, cobrar y gozar es imprescindible mientras exista el derecho y la necesidad. No se concibe la prescriptibilidad del derecho a los alimentos, que nacen y se renuevan constantemente a medida de nuevas necesidades. La circunstancia que el reclamante no haya pedido alimentos, aunque se encontrara en igual situación a la del momento en que los reclama no prueba sino que hasta entonces ha podido resolver sus urgencias y que ahora no puede. (p. 434)

- **INEMBARGABLE.-** Es de la opinión (Peralta, 2008): “Porque de esta nota distintiva se infiere el carácter intrasmisible del derecho alimentario, lo cual significa que las prestaciones no pueden embargarse” (p. 564).

De igual forma, Varsi (2012) afirma:

Las cuotas de alimentos no son susceptibles de embargo. La pensión alimenticia está destinada a la subsistencia de la persona a favor de quien ha sido fijada. Realizar el embargo sería ir en contra de esta finalidad y privar de sustento al alimentista. El crédito alimenticio tampoco puede ser objeto de embargo ni retención. Si se permitiese su ejecución, el beneficiario quedaría en la indigencia. (p. 434)

Estas características del derecho alimentario, permiten que este derecho se ejerza de forma adecuada, siendo el titular el alimentista, que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de este derecho, conforme al estado de necesidad en que se encuentra; para tal fin, dichas características deben ser recabadas para poder determinar su cumplimiento.

B. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.- Según (Peralta, 2008), señala: “El titular del deber jurídico de la obligación alimentaria es el alimentante, vale decir, la persona que está obligada a dar la prestación” (p. 565).

Volveremos hacer mención a Peralta (2008), quien afirma que son las siguientes características:

- **PERSONAL.-** Es así, en relación a la vinculación que tiene el titular del deber jurídico de prestar alimentos con el alimentista, lo que solo concluirá con la muerte, lo cual no significa que el alimentista quede privado de amparo, ya que otros parientes serán los llamados a cumplir con la obligación. Esta obligación es

sucesiva porque ante la imposibilidad del pariente más próximo debe prestarla el que le sigue en grado.

- **RECÍPROCA.-** Porque en la misma relación jurídico-familiar el pariente que en principio fue titular del derecho, con posterioridad podría ser considerado titular del deber jurídico de la prestación. Se basa en la solidaridad familiar.

- **REVISABLE.-** Ya que la pensión alimenticia puede sufrir variaciones cuantitativas y cualitativas que requieren reajustarse de acuerdo con las posibilidades del obligado y las necesidades del alimentista, sobre todo, para encontrar sentido de justicia y equidad.

- **INTRANSMISIBLE, INTRANSIGIBLE E INCOMPENSABLE.-** Por las razones explicadas al tratar sobre las peculiaridades del derecho alimentario.

- **DIVISIBLE Y NO SOLIDARIA.-** Desde que en ocasiones puede solicitarse a uno de los obligados asuma el monto total, con cargo de repetición contra los demás. (p. 565)

Bajo nuestra opinión, estas características permiten identificar al titular de la obligación alimentaria, que recae en el alimentante, es decir la persona que está obligada a prestar los alimentos; es necesario reunir dichas características, para determinar en quien recae la obligación alimentaria, para efectos de la exigencia de su cumplimiento.

1.1.3. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario tiene la siguiente clasificación:

1.1.3.1. POR SU ORIGEN

Según Varsi (2012), señala que los alimentos, de acuerdo a su origen o causa jurídica, pueden ser:

A. VOLUNTARIOS.- Llamados convencionales; cuando se constituyen como resultado de una declaración de voluntad ínter vivo o mortis causa. (...). Los alimentos voluntarios son expresión de la autonomía privada como fuente de obligaciones. Son obligaciones que, a diferencia de la estrictamente alimenticia, no implican necesariamente la preexistencia de un vínculo de parentesco y, en consecuencia, pueden establecerse a favor de toda persona y en cualquier circunstancia objetiva, cuando no contraríen las leyes, la moral, ni el orden público.

B. LEGALES.- Los alimentos que derivan directamente de la ley, con independencia de la voluntad, tienen su origen en una disposición legal y no en la celebración de un negocio jurídico. La variedad de situaciones a las que la ley vincula un derecho-deber de alimentos y el hecho de que se trate de situación heterogéneas hace imposible, o cuando menos, complicado hallar elementos comunes para su ordenación. No obstante, podemos entender que entre todos estos supuestos es posible hacer una primera clasificación diferenciando aquellos en los que el deber alimenticio se asienta sobre una relación familiar del resto.

C. RESARCITORIOS.- Destinados indemnizar a la víctima de un acto ilícito, por ejemplo, al conviviente en caso se produzca la extinción por decisión unilateral. (p. 428-429)

1.1.3.2. POR SU AMPLITUD

Según (Campana, 2003) indica: “Esta clasificación, está hecha en virtud del alcance que tienen los alimentos” (p. 65). Por ello se clasifica de la siguiente manera:

A. NECESARIOS.- Según (Campana, 2003) afirma: “También conocidos como restringidos. Como su nombre lo indica, no es difícil suponer que este tipo de alimentos se refiera a lo estrictamente

necesario para vivir, de modo que, quien los deba solo asignará, al acreedor alimentista, lo indispensable para su subsistencia” (p. 66).

Por otro lado, Varsi (2012) es de la opinión que:

Son los indispensables para la satisfacción de las necesidades mínimas y primordiales del alimentista (victus). Es brindar los auxilios necesarios sin tener en cuenta los medios económicos del alimentante, tales como vitualla, salud, vestuario, habitación. Implican una noción objetiva, lo que basta para sustentar su vida, aquellos precisos, *necessarium vitae*. (p. 429)

B. CONGRUOS.- Conforme a lo que señala Campana (2003):

Es la porción que en dinero o en especie se entrega a quien se debe, arregladamente a las posibilidades del deudor o alimentante y por ende, a su nivel de vida. En materia de alimentos, es la porción pecuniaria que se debe a un familiar y que comprende todo lo necesario para subsistir de acuerdo a la posibilidad económica en que se encuentre el obligado. (p. 66)

Por otro lado, Varsi (2012) afirma:

Comprenden lo indispensable para subsistir modestamente, de acuerdo a su posición social. Se fijan conforme al rango, condición de las partes y *modus vivendi*, *necessarium personae*. Cabe precisar que los alimentos congruos son mayores que los necesarios. Se otorgan no solo para que el alimentista pueda subsistir, sino para que lo haga conforme a su posición social. Es la ley la que establecerá quiénes son los alimentistas que pueden demandar alimentos congruos y quiénes pueden demandar alimentos necesarios. Los niños y adolescentes son acreedores de una prestación de alimentos congruos y en ningún caso de alimentos estrictamente necesarios. De ser así se afectaría su

interés superior y su derecho al desarrollo integral como derechos humanos específicos. (p. 430)

1.1.3.3. POR SU FORMA

A. TEMPORALES.- Según (Varsi, 2012) afirma: “Solo duran un tiempo. En el caso de la madre, se otorgan a efectos de los gastos del embarazo, esto es, desde la concepción hasta la etapa de posparto, (...) aquellos necesarios para la gestación” (p. 431).

B. PROVISIONALES.- Para (Varsi, 2012): “Se conceden en forma provisoria por razones justificadas o de emergencia. Son decretados por sentencia en la que se fijará el pago de una asignación provisional por mensualidades adelantadas hasta el señalamiento de la pensión definitiva” (p. 431).

De igual forma, Campana (2003) afirma:

Como su nombre lo indica, este tipo de alimentos se otorgan en forma temporal; es decir, admitida la demanda de alimentos, y en tanto no exista una sentencia judicial definitiva en este proceso que ordene el pago de una cantidad adecuada, el juez asignará una pensión provisional, en razón de la necesidad del recurrente o recurrentes y de la prueba aportada que acredite indubitable relación familiar. (p. 69)

C. DEFINITIVOS.- Para (Varsi, 2012): “Son definitivos cuando dejan de ser provisionales y se conceden en forma fija, concluyente y periódica. Es una clasificación discutible. Pueden variar de acuerdo a la necesidad de quien los pide y las condiciones en que se encuentre el obligado, lo que lleva a establecer que la pensión estará sujeta a revisión permanente a petición del interesado” (p. 431).

Por otro lado, Campana (2003) afirma:

Prima facie, podríamos decir que no existen alimentos que se otorguen en forma definitiva, toda vez que sabemos que lo establecido en materia de alimentos no adquiere autoridad de cosa juzgada y por tanto las sentencias en esta materia son susceptibles de revisión cuando los móviles que produjeron el fallo judicial se alteren. Empero, este tipo de división en materia de alimentos se refiere estrictamente al fallo final emitido por el juez luego del proceso de alimentos; vale decir, se alude aquí la sentencia misma en la que se otorga la pensión definitiva al demandante. (p. 69-70)

1.1.4. NATURALEZA JURÍDICA

Con relación a la naturaleza jurídica, existen dos vertientes. Una que se refiere a la relación jurídica y otra que trata de vincularlo con el derecho patrimonial o personal. Las cuales detallamos a continuación:

1.1.4.1. RELACIÓN JURÍDICA.- Para Méndez (2001) señala:

Los alimentos determinan una compleja relación jurídica entendida como un deber y derecho de los padres de alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Pero no se limita solo a los padres, sino al parentesco. El sujeto de un derecho subjetivo familiar tiene ante sí al titular de un derecho subjetivo idéntico al suyo, de manera que al derecho de un titular se yuxtapone el deber jurídico correspondiente al derecho de otro titular, cada sujeto lo es simultáneamente de un derecho y un deber con respecto al otro sujeto. (p. 459)

Por otro lado, Varsi (2012) afirma:

Es un derecho recíproco que se mantiene activo o pasivo según el estado de necesidad del alimentista y posibilidad del alimentante. Quien hoy da, mañana más tarde está en el derecho de recibirlos

respecto de quien atendió. Es un derecho que se maximiza, muestra su mayor esplendor, cuando existe la necesidad y se minimiza cuando no la hay. Por otro lado, se dice que es un derecho personalísimo, nace con la persona y se extingue con ella, de allí su carácter intransmisible. (p. 427)

1.1.4.2. PATRIMONIALIDAD O EXTRAPATRIMONIALIDAD

Veremos las diferencias entre ambas, siendo las siguientes:

A. TESIS PATRIMONIAL.- Según Varsi (2012) señala:

Los alimentos tienen un carácter estrictamente patrimonial, se concretizan en algo material con significado económico, al estar representados por dinero para la adquisición de bienes que permitirán el desarrollo de la persona. (...) Son valorables económicamente y deben ser exigidos a sujetos determinados. Sobre este sustento el derecho a los alimentos se asemeja a los patrimoniales, entre estos, a los obligacionales, no a los derechos personales, no a los reales. (p. 427)

De igual forma, según Chunga (s.f.), señala:

Cuando los alimentos son susceptibles de valoración económica, y extra patrimoniales o personales cuando no son apreciables pecuniariamente. Para Messineo el derecho alimentario tiene su naturaleza genuinamente patrimonial, por ende, transmisible. En la actualidad esta concepción ha sido superada porque el derecho alimentario no solo es de naturaleza patrimonial, sino también de carácter extra patrimonial o personal. (p. 226)

B. TESIS EXTRAPATRIMONIAL

Según Varsi (2012) afirma:

Se consideran los alimentos como un derecho personal o extra patrimonial, en virtud del fundamento ético-social y del hecho de que el alimentista no tiene ningún interés económico, ya que la prestación recibida no aumenta su patrimonio, ni sirve de garantía a sus acreedores, presentándose como una de las manifestaciones del derecho a la vida, a la integridad, a la salud, al bienestar, todos de orden personal. De ello se comprende que siendo un derecho netamente personal se encuentra adherido a la persona y persiste a lo largo de su vida, extinguiéndose solo con la muerte del titular. (p. 428)

Asimismo, Chunga (s.f.), indica:

En ese sentido se señala que es una institución de carácter especial o sui generis de contenido patrimonial y finalidad personal conexas a un interés superior familiar, que se presenta con una relación patrimonial de crédito-débito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica en concepto de alimentos. (p. 226)

1.2. TRANSGRESIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho fundamental que tiene todo ser humano, es el derecho a la vida; y para que pueda ser respetado, protegido y ejercido dicho derecho, uno de los presupuestos es el derecho a los alimentos, que es un derecho inherente a la persona, ya que, a través de ello permite la subsistencia del ser humano y un desarrollo pleno; por tanto se debe evitar su transgresión, especialmente a los menores de edad, que por ser una parte de la población más vulnerable requieren ser protegidos y ameritan una atención mayor.

Ahora bien, por el principio del interés superior del niño, se busca proteger a los menores de edad, garantizando su desarrollo integral. Asimismo, el Tribunal Constitucional (2011), señala respecto al Principio del Interés Superior del Niño, lo siguiente:

10. De este modo, el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente se constituye en aquel valor especial y superior según el cual los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales.

El Principio del Interés Superior del Niño, se encuentra previsto en la (Ley N° 27337, 2000), establece: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio el Interés Superior del Niño y el respeto a sus derechos” (art. IX, T.P.).

Es así que, al transgredir el derecho a los alimentos, siendo éste inherente e indispensable para el menor de edad; conlleva al menoscabo de este derecho primordial y, afectaría directamente al derecho a la vida, siendo que los responsables para la subsistencia y atención del menor de edad son los progenitores, a través de la relación paterno filial, es que el menor de edad adquiere dicho derecho. Ante ello, es necesario contar con los instrumentos jurídicos necesarios, para poder evitar esta transgresión; por tanto, es realmente necesaria la atención y la prevalencia de la aplicación del principio del interés superior del niño, a efectos de salvaguardar sus derechos y hacer efectivo el respeto de los mismos. A razón de este principio, se debe normar adecuadamente el derecho alimentario acorde a nuestra realidad actual, y en donde más se

requiere ejercitar este derecho, más aun cuando se trata de personas de bajos recursos económicos.

1.2.1. OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA

La obligación alimentaria tiene su origen dentro de las relaciones familiares, por ello, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), que establece: “Se deben alimentos recíprocamente:

1. Los cónyuges.
2. Los ascendientes y descendientes.
3. Los hermanos” (art. 474).

Conforme a lo que señala Peralta (2008), se prestan en el orden siguiente:

A. EL CÓNYUGE.- El deber de prestar alimentos pasa la siguiente orden de obligados si éste no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación.

B. LOS DESCENDIENTES.- Entre los descendientes se regula la gradación del orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista. Esto es, primero los hijos; segundo, los nietos; tercero, los bisnietos; y así sucesivamente. El deber de prestar alimentos de los descendientes pasa a los ascendientes de comprobarse que ninguno de aquellos se halla en condiciones de prestarlos por no tener posibilidades o rentas.

C. LOS ASCENDIENTES.- Entre los ascendientes se regula la gradación de la misma forma que para los descendientes. Esto es, primero a los padres; segundo, a los abuelos; tercero, a los bisabuelos y, así sucesivamente.

D. LOS HERMANOS.- El deber de prestar alimentos debe confrontarse con el artículo 93° del Código de los Niños y Adolescentes. Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, pero por ausencia de padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: a) Los hermanos mayores de edad; b) Los abuelos; c) Los parientes colaterales hasta el tercer grado; d) Otros responsables del niño o del adolescente (tutor). (p. 566-567)

1.2.2. PRESUPUESTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

La obligación alimentaria se sustenta en los siguientes presupuestos esenciales:

1.2.2.1. VÍNCULO LEGAL.- Según (Varsi, 2012) afirma: “Se trata de una relación familiar reconocida por la ley, cónyuges, convivientes e hijos. Los alimentos derivan de la voluntad o del parentesco” (p. 421).

Por otro lado, Peralta (2008), señala:

Para ejercer el derecho de alimentos es evidente que tenga que existir una regla genérica positiva que ordene la prestación, generalmente, a consecuencia de los vínculos familiares existentes entre acreedor y deudor y, por excepción, entre personas extrañas. Empero, debe aclararse que no todos los familiares tienen derecho o están obligados a prestar alimentos, ya que entre ellos existen prelaciones y también limitaciones. Si no existiera una norma legal que establezca la obligación alimentaria es indudable que el alimentista (acreedor), no tendría fundamento o base legal para accionarla. (p. 580)

Asimismo, Campana (2003) es de la opinión:

Indudablemente, es la ley el elemento regulador por excelencia de todas las actividades del ser humano en sociedad. (...). Uno de los requisitos para establecer la obligación alimentaria es indiscutiblemente la ley. Sin embargo, ésta no opera de manera

unilateral, pues por el simple hecho que la ley ordene que se deban alimentos a tal o cual pariente, los juzgadores no podrían otorgarlos, ya que – además-, tendrán que evaluarse las otras dos condiciones infranqueables para dicho otorgamiento: el estado de necesidad del alimentista y las posibilidades del obligado. Estas dos otras condiciones son de suma relevancia para resolver el conflicto alimentario, sobre todo cuando se trate de otorgar una pensión alimenticia a un cónyuge, que por lo general se basa en la sola partida de matrimonio. (p. 101)

Este presupuesto es necesario, para poder determinar la existencia de la relación familiar que está reconocida por la ley, siendo que al no existir dicha relación no habría fundamento alguno de exigir el cumplimiento del derecho alimentario; asimismo, es importante determinar dos condiciones relevantes: el estado de necesidad del alimentista y las posibilidades del obligado, todo ello para poder otorgar los alimentos, que deben ser recabados para poder exigir su cumplimiento.

1.2.2.2. NECESIDAD DEL ALIMENTISTA.- Como bien afirma (Varsi, 2012): “Está basado en el requerimiento, en el menester del alimentista de no poder atender su manutención per se. Se traduce en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de edad, anciano, incapaz, persona con discapacidad o falta de trabajo” (p. 421).

Por otro lado, Peralta (2008) detalla:

Algunos autores aseveran que los alimentos se otorgan solo a menores de edad, quienes –en la generalidad de los casos- son los que pueden hallarse en estado de no atender a sus propias necesidades. Otros, que también se hace extensivo a personas mayores de edad que por circunstancias especiales pueden requerir de alimentos. Sobre este particular, el actual Código, asumiendo una posición intermedia determina que el mayor de dieciocho años de

edad tiene derecho a los alimentos cuando no se encuentra en aptitud de atender a su subsistencia, de tal modo, que si la causa que lo ha reducido a ese estado fuese su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir, salvo cuando se trate del ascendiente del obligado. (p. 580)

Por su parte Campana (2003) afirma:

La regla general que funda el derecho alimentario, es la necesidad del sustento y el derecho a la vida. Resulta bastante compleja la determinación del estado de necesidad en que se encuentre el pretendido alimentista en su intento de hacer valer su derecho y, obtener de su alimentante, una pensión por ese concepto. Siendo exacto que los ingresos deben ser tenidos básica y primariamente en consideración, no creemos en cambio, que pueda aceptarse llanamente el derecho alimentario que reclama quien, no teniendo ingresos bastantes, tiene, sin embargo, bienes raíces o capitales, a menos que se demuestre, en cada caso concreto, la imposibilidad o dificultad real que, trabajándolos, disponiendo de ellos o administrándolos debidamente, puedan proporcionar al demandante los ingresos que necesita y liberar así al demandado de la carga que se intenta imponerle y que de otro modo resultaría injusta. (p. 97)

Es indispensable determinar la necesidad del alimentante, con el fin de poder determinar una pensión alimenticia; sin embargo, es necesario agregar que el alimentista desde la concepción hasta que nace, requiere de necesidades básicas, que deben cubrir sus progenitores o de quienes estén en su tutela, con el transcurrir del tiempo, se hacen más onerosos y las necesidades aumentan en todo sentido; cada alimentista requiere del bienestar en general, como los alimentos, educación, asistencia médica, recreación, vivienda, vestido, entre otros; y cubrir satisfactoriamente todas esas necesidades básicas, cada vez se hace más difícil y complicado, por causa de muchas razones, como la competitividad laboral, la delincuencia,

falta de oportunidad laboral, abandono parental, entre otros. Es por ello que resulta irrisorio el monto de la pensión alimenticia que se otorga y ello implica la austera satisfacción de las necesidades básicas del alimentista.

1.2.2.3. POSIBILIDAD DEL ALIMENTANTE.- Respecto a este tema, mencionaremos la opinión de Peralta (2008), quien afirma:

Aquel obligado a satisfacer las necesidades debe estar en la aptitud de atender dichos requerimientos. No se permite que quien a sí mismo no puede atenderse ni sufragar sus gastos mal se haría en comprometerlo con terceros. En este caso predomina el derecho a conservar la propia existencia. Es preciso que la persona a quien se le reclama el cumplimiento de la obligación alimentaria esté en condiciones de suministrarlos. Se entiende que el obligado tiene el deber de ayudar a sus allegados o a la persona que tenga derecho dentro de sus posibilidades económicas y sin llegar al sacrificio de su propia existencia. Entonces es preciso que el juez aprecie su capacidad económica, porque si tiene apenas lo indispensable, sería injusto someterlo a privaciones para socorrer a la persona necesitada. Para fijarse el monto de la pensión alimenticia deberá tenerse en consideración las posibilidades económicas del obligado, así como las obligaciones del mismo para con la familia, la cantidad de dinero que constituye su renta mensual, así como las necesidades del alimentista. (p. 581)

Asimismo, según Morán (s.f.), menciona:

Nuestro cuerpo legal civil establece en el artículo 481 que los alimentos deben ser regulados por el juez en proporción de las necesidades del alimentista y a las posibilidades de la persona que debe darlos. Así, nuestro Código reconoce una de las características menos controvertidas y más aceptadas por la doctrina civil en materia de derecho de alimentos, según el cual los elementos objetivos de la

obligación han de ser proporcionales. (...) Si al momento de fijar la pensión de alimentos se deben tener en cuenta los ingresos del alimentante, y si la necesidad del alimentista no está restringida a lo estrictamente necesario para sobrevivir sino que se trata de un concepto subjetivo más amplio, entonces se puede concluir que el verdadero límite a la pensión de alimentos lo constituye la posibilidad del alimentante. (p. 265-266)

Cabe señalar también a Campana (2003), quien afirma:

Y es que en efecto, somos del parecer que el obligado a prestar alimentos no puede basarse en señalar que no tiene trabajo para tratar de auto exonerarse de la obligación legal de alimentos; pues esta nace de un deber natural inexcusable del fundamento de la vida del alimentista. (...) Ahora bien, tratándose de la posibilidad económica del obligado, como presupuesto de la obligación alimentaria a señalarse, los operadores de justicia tendrán en cuenta las circunstancias en que vive el deudor alimentante; es decir, no solamente sus cargas familiares o deudas; sino también su activo; es decir, donde vive, el tipo de automóvil que usa (si lo tiene), lugares que frecuenta, etc. (p. 99-100)

En nuestra realidad, los alimentantes que se encuentran con posibilidades económicas elevadas; no toman conciencia de dicha obligación y generan diversos artificios para poder exonerarse, otorgándose una irrisoria pensión alimenticia que no cubre las necesidades del alimentista, causándoles un perjuicio a su subsistencia; contrario sensu, existen alimentantes que brindan una pensión alimenticia, realizando los mayores esfuerzos para que pueda cubrir las necesidades del alimentista, de los cuales existen muy pocos; en tanto, los obligados a prestar los alimentos deben concientizarse y brindar una pensión alimenticia adecuada y justa, pensando en las necesidades básicas del alimentista y su bienestar.

1.2.2.4. PROPORCIONALIDAD EN SU FIJACIÓN.- Respecto sobre el presupuesto de proporcionalidad en su fijación Varsi (2012), afirma:

Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, de equilibrio y justicia. Debemos partir siempre de la premisa que los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del alimentante ni mucho menos de obtener su fortuna. Los alimentos son otorgados por una cuestión *ad necessitatem*. El alimentista es quien necesita, no quien exige participar –tal cual accionista- en las utilidades o nuevos ingresos del alimentante. “La cuota alimentaria no tiene por finalidad hacer participar al alimentado de la riqueza del alimentante, sino cubrir las necesidades del primero”, *máxime* si las necesidades del alimentista están satisfechas. Los alimentos no se conceden *ad utilitatem*, o *ad voluptatem* sino *ad necessitatem*. (p. 422)

Por otro lado, Peralta (2008), señala:

La obligación alimentaria también supone, por una parte, la existencia de una norma legal que la establezca y, de otra, dos personas: una, que se halle en estado de necesidad y, otra, que disponga de recursos suficientes como para hacer frente a aquélla. Pero, además, implica que su regulación se establezca en una suma determinada o fijada en un porcentaje de acuerdo con los ingresos o remuneraciones del obligado. En tal sentido debe indicarse en la demanda de manera precisa el monto del petitorio. El Código actual establece que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y de las posibilidades de quien debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. Empero, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Además los alimentos se incrementan o reducen según el aumento o disminución que experimenten las

necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarlos. (p. 581)

La proporcionalidad de los alimentos, se determina conforme a las necesidades del alimentista y de las posibilidades del alimentante; sin embargo, es muy determinante las posibilidades del alimentante ante las necesidades del alimentista, ya que, no se debe desamparar de su subsistencia al alimentante y depende bastante de sus posibilidades para determinar la proporción de la pensión alimenticia; y en muchas ocasiones, resulta irrisoria e insuficiente la pensión alimenticia otorgada, lamentablemente siendo los más perjudicados los alimentistas, que deben superar dichas trabas de alguna u otra forma. Hablando de los padres que estén obligados, deben tomar conciencia de la realidad actual y de las necesidades básicas de los hijos, cubriendo satisfactoriamente dichas necesidades, por ser muy indispensables para el menor de edad que se encuentra en plena etapa de crecimiento y desarrollo.

1.3. MARCO NORMATIVO

1.3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL

Según el (Tribunal Constitucional, 2015), señala que, en la Constitución Política del Perú: “Artículo 6°, segundo párrafo, (...) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres (...)” (p. 18).

Ante ello, Rubio (1999) afirma:

Su tratamiento legislativo corre entre los artículos 418° y 471° del Código Civil. De toda esta significativa cantidad de normas la Constitución rescata dos que son la esencia de la institución: Los padres tienen el deber y el derecho de alimentar educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. (...) También quiere decir que los padres no pueden no ejercitar la atención a sus hijos y que, si

descuidan este deber, caen en actuación ilícita (además de antiética, desde luego). (...) El deber de los hijos de respetar a sus padres proviene de absolutamente todas las culturas humanas conocidas, además de estar registrada en todos los principios de ética respetables. El Derecho no hace aquí sino inclinarse ante la evidencia y reconocer el principio natural. (p. 79-80)

Asimismo, se encuentra regulado en el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), dispone: "Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. (...)" (art. 472).

Por otro lado, Chunga (s.f.), señala que:

En la Enciclopedia Jurídica Omeba se define jurídicamente como alimentos a "Todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra -por ley, declaración judicial o convenio- para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción". Para Cabanellas lo refiere como "Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido e instrucción cuando el alimentista es menor de edad" (...). Por su parte, Barbero sostiene que "El deber en determinadas circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la vida". Podemos decir entonces que alimentos implica no solamente la palabra propiamente dicha, sino que abarca más allá del significado; en el sentido más extenso, es todo lo que nos ayuda a protegernos para poder vivir y desarrollamos en forma digna. (p. 225-226)

El derecho alimentario es fundamental e indispensable, y no solamente nos enmarquemos en la palabra "alimentos", que podríamos entender solo como el

de alimentarnos, sino que abarca un sentido e interpretación más amplia y extensa; es decir, cubrir varias necesidades como el de alimento, vestido, salud, vivienda, educación, recreación, entre otros; que ameritan el bienestar general del menor de edad; asimismo, se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico en sentido amplio. Este derecho constitucional es imprescindible para la subsistencia del alimentista, su omisión pone en peligro el derecho a la vida. En concordancia con la (Ley N° 27337, 2000), establece: “Artículo 92°, se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto”.

Ahora bien, según Varsi (2012) señala:

A continuación, examinaremos la forma en la que opera el orden de prelación normado por el artículo 93° del Código de los Niños y Adolescentes:

a. Padres.- En el primer lugar de prelación frente a las necesidades alimentarias de un niño o adolescente se encuentran sus padres. El traslado de la obligación se da en dos casos puntuales: ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero. Esta obligación subsiste aun en caso de la suspensión o pérdida de la patria potestad, tal como se encuentra regulado en el artículo 94° del CNA.

b. Hermanos mayores de edad.- Siendo parientes colaterales de segundo grado se encuentran antes de los ascendientes, a diferencia de lo señalado en el artículo 475° del Código Civil. La norma no hace diferencia entre hermanos unilaterales o bilaterales.

c. Los ascendientes.- Los abuelos se encuentran en el tercer lugar en el orden de prelación.

d. Los parientes colaterales hasta el tercer grado.- Es decir, hasta el tío o hermano del padre alimentante.

e. La norma incluye como obligados alimentarios a otros responsables del niño o el adolescente.- Esto permite que pueda extenderse a personas distintas que las señaladas en los puntos anteriores. Sin embargo, no existe una precisión respecto a dichos límites, por lo que debemos entender que se refiere a la tutela y a la colocación familiar, siendo la forma en la que el Código entiende como responsables del niño. (p. 448-449)

El orden de prelación, determina quienes tienen obligación de prestar alimentos, conforme al vínculo que lo une con el alimentista; de esta forma se estaría resguardando los derechos del menor de edad; sin embargo, la pensión de alimentos del alimentista seguiría siendo irrisoria e insuficiente, pero de alguna forma cubre sus necesidades básicas.

1.3.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

El (Tribunal Constitucional, 2015), señala que, en la Constitución Política del Perú: “Artículo 55°; los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” (p. 30). En tanto, las normas internacionales rigen en el Perú, si estas han sido aprobadas por el Congreso y ratificadas por el Presidente de la República; es por esta razón que ameritan mencionar las que tiene relación con el tema a investigar.

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 1948), hace mención respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 25°, inciso 1; toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; (...). Inciso 2; la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. De igual forma, Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1989), señala sobre la Convención sobre los Derechos del Niño: “Artículo 3° inciso 2; los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Artículo 6° inciso 1; los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y en el inciso 2; los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1978) referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 19°; derechos del Niño, Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Ahora bien, en la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1976), respecto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: “Artículo 24° inciso 1; todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

En tanto, la legislación internacional expresa claramente el resguardo de los derechos del menor de edad, en cuanto al bienestar general y el respeto de su subsistencia; siendo un derecho vital y fundamental que amerita una atención privilegiada, por ser parte de la población más vulnerable y que no pueden solventar sus necesidades básicas por su propio esfuerzo. Dichos instrumentos internacionales merecen ser acatados y cumplidos, por formar parte de nuestra legislación.

1.3.2.1. EN BOLIVIA

En el país de Bolivia, la asistencia familiar se regula conforme a la Ley N° 603 (2014), Código de las Familias y del Proceso Familiar; en el Título VII

Asistencia Familiar, Capítulo Único Contenido y Extensión, en el artículo 109 establece:

La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos (...).

Por otro lado, en la Ley N° 603 (2014), en el artículo 116, establece:

La asistencia familiar se determina en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quien o quienes deban prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. (...) En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor la salario mínimo nacional sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al veinte por ciento (20%) del salario mínimo nacional, y se incrementará si existiere más de una beneficiaria o beneficiario de acuerdo a sus necesidades.

En razón de ello, es necesario precisar que la asistencia familiar como es llamado en el país de Bolivia, es un derecho y un deber de las familias, quienes deben brindar lo necesario para la alimentación, salud, educación, recreación, vivienda y vestimenta; pudiendo judicializarse siempre y

cuando no se cumpla de forma voluntaria y teniendo como prioridad el interés del niño, niña y adolescente. Asimismo, dicha asistencia familiar es otorgada a los hijos desde que nacen hasta los 25 años de edad, con la finalidad de garantizar su formación técnica o profesional, debiendo demostrar tal situación. Es importante señalar que los beneficiarios de este derecho, son los hijos reconocidos y también los que se presumen la paternidad o maternidad. Por último, el monto fijado es respecto al 20% del salario mínimo nacional, dicho porcentaje puede variar conforme a las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado.

1.3.2.2. EN CHILE

En el (Código Civil de Chile, 1857), en el artículo 323, que establece: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio (...)”.

Asimismo, en el artículo 332, del Código Civil de Chile (1857), establece:

Los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años; que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia.

Por otro lado, en el artículo 333 del Código Civil de Chile (1857), establece:

El Juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en una caja de ahorros o en otro

establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o sus herederos luego que cese la obligación.

Ahora bien, respecto a la cuantía de la pensión alimenticia en la (Ley N° 14.908, 1962), en el artículo 7 establece: “El Tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante (...). Artículo 9; el Juez podrá decretar o aprobar que se imputen al pago de la pensión, parcial o totalmente, los gastos útiles o extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del alimentario (...)”.

1.3.2.3. EN COLOMBIA

En la Ley N° 1098 (2006), Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 24, respecto al Derecho a los Alimentos, establece:

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Ahora bien, respecto a la cuantía de la pensión alimenticia, Ley N° 1098 (2006), en el artículo 130, en el inciso 1, establece:

Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y

hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de este se extenderá la orden de pago.

En conclusión, tanto la legislación peruana así como la internacional protegen el derecho alimentario, considerándolo primordial y esencial para la subsistencia y desarrollo integral del menor de edad; por ello su inobservancia resulta injustificable, y trae con ello la vulneración del ejercicio del derecho alimentario y de una vida digna. Es necesario precisar que, dichos instrumentos jurídicos deben ser interpretados con el principio del interés superior del niño, y todo en cuanto le favorece; siendo que, merece una atención urgente y necesaria, caso contrario se estaría vulnerando el derecho a la vida, y transgrediendo los demás derechos. Asimismo, respecto a los países de Bolivia, Chile y Colombia, tienen en común la protección superior del niño, niña y adolescente, respecto al derecho alimentario; y varía con respecto a la cuantía de la pensión de alimentos y hasta que edad se les debe brindar.

1.4. INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007

En la Ley N° 27007 (1998), establece: “Ley faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente, a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, y señala como materias conciliables: Alimentos, tenencia y régimen de visitas”.

El Título de Ejecución, significa que las Actas de Conciliación tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Es decir, que los compromisos establecidos en el Acta, deben ser obligatoriamente cumplidos por las partes. En caso de incumplimiento de los acuerdos del Acta, éste dará lugar a su exigencia ante el Poder Judicial.

Ahora bien, ante el incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007, genera la ineficacia del Acta de Conciliación, lo que ocasiona la limitación de derecho alimentario que tiene el alimentista; ya que, el acta no podría ser ejecutada en la instancia correspondiente; ello conllevaría, al inicio de un proceso judicial de alimentos, optando por aplazar el goce y disfrute del derecho a los alimentos, que es indispensable para la subsistencia y el desarrollo integral del menor de edad.

1.4.1. INEFICACIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

El Acta de Conciliación, que cumplen con todos los requisitos previstos en la legislación correspondiente, produce efectos jurídicos de una sentencia judicial, debidamente ejecutoriada; es decir, tiene carácter de título de ejecución ante su incumplimiento, por ser un acto voluntario entre las partes y contribuyen a la solución de conflictos de intereses, de manera rápida y económica. El incumplimiento de los requisitos establecidos, conlleva a la ineficacia de la ejecución de los acuerdos plasmados en el Acta de Conciliación; asimismo, sería una pérdida de tiempo y desgaste emocional, el tener que iniciar un proceso judicial de alimentos, adjuntando el Acta de Conciliación como medio probatorio.

Las formalidades, que señala la Ley N° 27007 son restrictivas, en el sentido que al efectuar las actas de conciliación lo debe realizar el conciliador capacitado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y uno de los requisitos para dicha capacitación, es que se encuentren laborando en una Defensoría del Niño y Adolescente; tomando en cuenta que la DEMUNA a nivel nacional y en la mayoría de los casos, se encuentran funcionando en las Municipalidades, y por ende, no laboran permanentemente, tienden a cambiar de personal en cada gestión o dentro de ella; y al no existir permanencia se debería de ampliar este requisito, capacitando a las personas interesadas que tengan aptitudes y que deseen laborar dentro de una Defensoría del Niño y el Adolescente, así como, integrando a los Conciliadores Extrajudiciales con especialización en familia, quienes cumplen la misma función de realizar

conciliaciones y se encuentran capacitados; ya que el Ministerio de Justicia a través de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados, realizan cursos de conciliación sin ningún tipo de restricción, siendo que, cualquier persona que se encuentra interesada y apta, en realizar la función conciliadora puede efectuar el curso; todo ello, en razón de que las Actas de Conciliación que se efectúan en las Defensorías del Niño y el Adolescente, deben de cumplir los mismos requisitos que un Acta que lo efectúa un Conciliador Extrajudicial. Esta restricción, ocasiona la vulneración y transgresión del Derecho Alimentario del alimentista, en el sentido de que, dichas Actas de Conciliación efectuadas carecerían de todas las formalidades que requiere la (Ley N° 27007, 1998), y su reglamento (Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH, 1999) modificado por el (Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, 2004); por tanto, dichas Actas no pueden ser ejecutables en la instancia que corresponde ante su incumplimiento, debiéndose iniciar un proceso judicial de alimentos, insertando el Acta de Conciliación como medio probatorio; lo que demanda tiempo, inversión y desgaste emocional.

Al respecto, el (Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH, 1999) modificado por el (Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, 2004) en el artículo 28° establece: “Los requisitos para ser acreditado como Conciliador de la Defensoría del Niño y el Adolescente son los siguientes: (...), 2.- Ser miembro de la DNA, (...)”. Se debe acreditar para dicha capacitación, que se encuentren laborando en una Defensoría del Niño y el Adolescente; sin embargo, ante las variaciones de personal, se tendría que volver a capacitar a los defensores para ejercer como conciliadores. Ahora bien, en concordancia con el (Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, 2004), en el artículo 28A establece: “El Ministerio es la Entidad Responsable de otorgar la acreditación oficial para que un Defensor pueda realizar conciliaciones extrajudiciales cuyas actas tengan título de ejecución en las Defensorías del Niño y el Adolescente autorizadas para tal efecto, en el marco de la Ley N° 27007 (...)”. Lo que implica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) son los encargados de capacitar a los Defensores, para poder ser conciliadores en las Defensorías del

Niño y el Adolescente; contrario sensu, cumplen la misma función de un Conciliador Extrajudicial especializado en Familia, que está debidamente capacitado.

Ante ello, se debería de dar mayor facultad a dichos conciliadores, solo en el sentido de que, los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia puedan ejercer la función conciliadora en las Defensorías del Niño y Adolescente, al encontrarse capacitados para dicha función conciliadora en temas de familia; y no restringir dicha facultad que se otorga a las Defensorías del Niño y el Adolescente mediante la Ley N° 27007, para que dichas Defensorías puedan realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, beneficiando a gran parte de la población, que no cuenta con recursos económicos; más aún, tratándose de acuerdos voluntarios y mutuos; asimismo, sin desmerecer a las capacitaciones dadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siendo indispensables para que los defensores y conciliadores puedan ejercer las funciones encomendadas adecuadamente y de forma eficiente; todo ello, en favor del resguardo y defensa de los derechos del niño, niña y adolescente.

1.4.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

“La Conciliación Extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante el Centro de Conciliación extrajudicial a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2012, págs. 8-9). En concordancia, con lo que señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2015), respecto a la Conciliación Extrajudicial: “La Conciliación Extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través del diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que permite superar las diferencias y arribar a acuerdos que satisfacen a todos. Luego, se suscribe un Acta de Conciliación”.

Asimismo, Medina (s.f.), señala al respecto:

Con la conciliación no solo solucionas tú mismo tus conflictos, con ganancias para ti y para la otra parte, sino ahorras tiempo y dinero que te demandaría un largo y tedioso proceso judicial (la parte vencida paga las costas y costos del proceso judicial), restableces tus relaciones con la otra parte, resguardas tu imagen personal, comercial o familiar, en razón que se desarrolla en un clima de absoluta confidencialidad y la solución es más propensa a cumplirse en relación a una sentencia, porque es creada por ti y por la otra parte. (p. 1)

Para (Ledesma, 1998) es de la opinión que: "La conciliación es un medio autocompositivo, parcial de solución de conflictos, basado en la voluntad de las partes, que va a generar cosa juzgada y que es pasible de control jurisdiccional a través de la procesalización y la homologación" (p. 8).

De igual forma Caivano (1998) afirma:

La Conciliación es una negociación asistida, pues en el proceso de conciliación es necesario emplear las técnicas de la negociación teniendo como facilitador a un tercero neutral. "Para ser un buen conciliador será requisito sine qua non comprender la dinámica propia y características de la negociación". (p. 113)

Por tanto, la Conciliación Extrajudicial, es muy beneficioso para quienes asisten a solucionar sus conflictos mediante el diálogo y la comunicación, donde interviene un mediador llamado conciliador, que permite la facilitación de la comunicación, llegándose a un acuerdo, ya sea, total o parcial, donde ambas partes pactan voluntariamente; todo ello, implica el ahorro de tiempo, dinero, y evitándose un desgaste emocional; lo que no sucede en un proceso judicial que demanda tiempo y solvencia económica. Es mucho más beneficioso, tratándose de derechos urgentes como es el de alimentos, que es un derecho fundamental e imprescindible. Ahora bien, el Estudio Gálvez Consultores Asociados (s.f.), indica: "Define al proceso de conciliación como el "acto de componer los ánimos

de personas cuyas posiciones o criterios o intereses resultan opuestos entre sí...” Sostiene además que “...la doctrina reconoce que la conciliación no es una figura creada por el derecho social; su origen debe buscarse en el derecho internacional público, donde junto con el arbitraje constituyen los procedimientos más típicos para buscar la solución a los problemas entre dos o más Estados” (p. 4).

Definitivamente la Conciliación extrajudicial, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante acuerdos voluntarios que son plasmados en un Acta de Conciliación; y ante su incumplimiento, ameritan la exigencia de dichos acuerdos en la instancia correspondiente; asimismo, disminuye la carga procesal en el Poder Judicial. Siendo muy beneficioso porque se ahorra tiempo, dinero y se evita un desgaste emocional; ante los problemas y/o conflictos que cada persona atraviesa, tienen la opción de poder solucionarlo mediante un acuerdo entre ambas partes, y así, poner fin a dichos conflictos, antes de recurrir a una instancia jurisdiccional.

1.4.2.1. ACTA DE CONCILIACIÓN

El Acta de Conciliación, es el documento que contiene el acuerdo al que se ha llegado. Está firmada por las partes y el conciliador, que representa la conclusión de un procedimiento conciliatorio. Además, constituye título de ejecución; es decir, en caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Conforme a lo que señala (Díaz, 2013a) hace mención a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, artículo 16°, establece: “El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial (...)” (p. 224).

Asimismo, (Díaz, 2013a) afirma: “El Acta de Conciliación es el documento privado que expresa la manifestación de voluntad de las partes conciliantes. Debe contener una de las formas de conclusión señaladas en el artículo 15° de la Ley de conciliación. Solo se puede entregar copias certificadas de las

actas a los conciliantes” (p. 146). Ante ello, podemos concluir que el Acta de Conciliación, es el documento donde se encuentran plasmados los acuerdos voluntarios de las partes, siendo su cumplimiento, por naturaleza exigible; sin embargo, para su validez deben contar con formalidades, que permiten que se constituya como Título de Ejecución; es decir, que tienen el valor de una sentencia judicial. Permitiendo así el descongestionamiento de la carga procesal que afronta el Poder Judicial.

1.4.2.2. VENTAJAS.- Así como señala Díaz (2013a, pág. 68) son los siguientes:

- Brevedad del proceso
- Informalidad
- Flexibilidad
- Confidencialidad
- Conservación de Derechos
- Prevalecen los Intereses
- Legalidad de los Acuerdos
- Economía
- Mínimo desgaste emocional
- Brevedad del proceso
- Preservación de relaciones útiles
- Solución dada por las partes.

Por otro lado, mencionaremos las siguientes ventajas de la conciliación extrajudicial que señala Vilela (s.f.), siendo las siguientes:

a. Comunicación entre las partes.- El conflicto puede ser sano, pero no resuelto es un peligro. En la medida en que la conciliación constituye una alternativa para solucionar conflictos crea un clima de paz, aun cuando producto del proceso de conciliación no se hubiera llegado a un acuerdo, sí se ha logrado un entendimiento entre las partes, restaurándose la comunicación entre ambas. Esta ventaja también la tiene la conciliación judicial, ya que son las mismas partes quienes llegan al acuerdo, ayudadas por el juez.

b. Economía.- Al adoptarse un acuerdo con rapidez los costos del proceso son bajos, debiéndose pagar tanto al conciliador como los honorarios del centro de conciliación. Se alega que los costos del proceso judicial y del arbitral son más caros. Pero esto no es así, en el

caso de un proceso judicial que termine por conciliación, porque obviamente se trataría de un proceso judicial más breve y por lo tanto menos oneroso para las partes intervinientes.

c. Rapidez.- La conciliación es un proceso rápido que puede concluir en una o varias sesiones, frente a otros procesos como el arbitral que suele demorar no menos de seis meses; y el proceso judicial es, normalmente, mayor a seis meses. Obviamente, la conciliación judicial permite que los procesos judiciales terminen más rápido que con la emisión de la sentencia. Y ello es una expresión de los principios de economía y celeridad procesal.

d. Protagonismo de las partes.- Las partes son protagonistas de sus decisiones. Las partes controlan el proceso, así como el resultado que es producto exclusivo de sus decisiones. A diferencia de lo que ocurre con el proceso judicial y el arbitraje, la solución no es delegada a un tercero sino que es retenida por los propios interesados. Las posibilidades de solución dependen de las partes.

e. Flexibilidad.- En la conciliación se utiliza un lenguaje sencillo y directo, a diferencia de lo que ocurre en los procesos judiciales. En muchos casos es preferible recuperar las relaciones que mantener las formas, lográndose una solución de mayor permanencia, dado que se sustenta en los intereses y no en las posiciones.

f. Informalidad.- En la conciliación no existe ningún tipo de requisito formal dado que cada parte participa voluntariamente y el conciliador hace uso de técnicas y herramientas que refuerzan la comunicación entre las partes. Tanto la flexibilidad como la informalidad achacables a la conciliación extrajudicial, también pueden ser irrogadas a la conciliación judicial puesto que por el principio de vinculación y formalidad de las normas procesales (art. IX TP CPC) y por aplicación

del art. 172 CPC, se sabe que en el proceso judicial por encima de la forma se encuentra el cumplimiento de la finalidad del acto.

g. Solución realizable.- Por tratarse de una solución adoptada por las partes, en la conciliación las decisiones adoptadas logran un 95% de eficacia. Es decir, son pocos los casos en los que las partes no cumplen con los acuerdos que ellos mismos han adoptado. Se trata de soluciones propias, producto de la creatividad de las partes, más que de soluciones formales que se adoptan por imposición de un tercero y que se sustentan en la ley y en la jurisprudencia. No se trata de encontrar quién tiene la razón sino más bien buscar entre las partes, utilizando su disponibilidad e inteligencia, las fórmulas más apropiadas al caso materia del conflicto. Y además en cuanto a los efectos del acta de conciliación podemos señalar que ésta tendrá valor de título de ejecución, (sentencia de última instancia), con lo cual, si una de las partes incumple el acuerdo al que han llegado vía el Acta de conciliación, la otra parte podrá pedir al juez, ya no que conozca del proceso, sino que exija el cumplimiento del mismo.

h. Mantenimiento de los derechos.- Ya que al someter un conflicto a conciliación no se está renunciando a la posibilidad de llevarlo después a la justicia estatal; esto no sucede cuando se pacta un arbitraje.

i. Es de fácil acceso para las partes.- Ya que no requiere del patrocinio de un abogado, ni el pago de las costas del proceso a cargo de la parte que pierde el litigio.

j. Promueve una cultura de paz en la comunidad.- Permite cambiar la mentalidad, modo de pensar y actuar de las partes. (p. 122-124)

En concordancia con Medina (s.f.); en la Guía para Conciliar Conflictos señala:

- Decides tú.
- Ahorras tiempo y dinero.

- Es confidencial.
- Mayor posibilidad de cumplimiento de la solución.
- Se restablecen las relaciones con la otra parte.
- Miras el futuro, no el pasado.
- Buscas soluciones, no culpables.
- Las partes son socios, no enemigos.
- Hay diálogo, no confrontación. (p. 2)

En conclusión, las ventajas de la Conciliación Extrajudicial, son beneficiosas para quienes optan recurrir a este mecanismo alternativo de solución de conflictos; ya que, permite que el acuerdo voluntario, logre el valor de una sentencia judicial sin iniciar un proceso; más aún, que los protagonistas de la conciliación son las partes, mas no interviene un juez que determinara el fallo final; es por ello, que la Conciliación resulta muy beneficiosa, tanto para las partes como para la sociedad, asimismo disminuye la carga procesal del Poder Judicial, se ahorra tiempo, dinero y se evita el desgaste emocional.

1.4.2.3. DIFERENCIAS ENTRE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

Respecto a las diferencias entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial, la diferencia es la flexibilidad y la solución a sus conflictos, que se logran mediante acuerdos mutuos, todo ello en la Conciliación Extrajudicial.

Por tanto, Ormachea (2000), detalla estas diferencias:

- **Nivel de solución:** El proceso se basa en dar solución a las pretensiones o exigencias planteadas en la demanda, contestación de la demanda y la reconvención. La conciliación apunta a resolver los problemas presentes o no en estos documentos para satisfacer los intereses y necesidades de las partes.

- **Criterio de Solución:** Mientras que el proceso judicial interpreta y aplica primordialmente el derecho para solucionar conflictos, la conciliación es flexible como para aplicar cualquier otro criterio elegido imaginativamente por las partes y el tercero.
- **Atmósfera:** En tanto que el proceso maneja una racionalidad y discurso confrontacional, la conciliación fomenta un clima lo suficientemente cooperativo para solucionar los problemas.
- **Orientación del conflicto:** El proceso enfatiza su labor en la discusión de los hechos pasados. Éstos se encuadran dentro de un supuesto de hecho para obtener una consecuencia jurídica. La conciliación reconoce la importancia de la discusión del pasado pero encamina la discusión hacia situaciones ideales a futuro (soluciones).
- **Control del proceso:** A diferencia del gran control que posee el juez en el proceso, la conciliación plantea una relación horizontal entre el conciliador y las partes. (p. 34)

1.4.2.4. MATERIAS CONCILIABLES

De acuerdo a (Díaz, 2013a), hace mención de la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070: “Artículo 7°; son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. En materia de familia, son conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el Principio del Interés Superior del Niño. (...)” (p. 221).

1.4.2.4.1. CLASIFICACIÓN LEGAL: Según Díaz (2013a) clasifica a las materias conciliables de la siguiente forma:

- **Obligatorias.-** Aquellas sobre las cuales se requiere agotar de forma previa a la demanda judicial, la Conciliación Extrajudicial y así cumplir con el requisito de procedibilidad.
- **Facultativas, inexigibles o no obligatorias.-** Son materias conciliables sobre las cuales no existe la obligación legal de agotar la conciliación antes de interponer la demanda judicial, sin embargo, se puede optar entre la Conciliación Extrajudicial o el Poder Judicial.
- **No conciliables.-** Son aquellos supuestos o materias que no son de libre disposición para las partes, ya sea por sus fines o transcendencia o porque han sido excluidas por ley. Los centros y conciliadores están impedidos de aceptar estas materias, bajo sanción administrativa. (p. 131)

1.4.3. PRINCIPIOS

Según Díaz (2013a), hace mención del Decreto Supremo N° 014-2008-JUS Reglamento de la Ley de Conciliación en el artículo 2°; detalla:

a) Principio de Equidad.- Es el sentido de la justicia aplicada al caso particular eso quiere decir, que cada caso en conciliación es diferente a otro y, por tanto, su solución también, debiendo el conciliador promover condiciones de equidad para que las partes adopten los acuerdos que consideren justos y equitativos. El sentido de justicia, no es aquella que impone el conciliador sino aquella que los conciliantes imponen cuando arriban a sus acuerdos (Art. 2° de la L.C.)

b) Principio de Veracidad.- El conciliador en el ejercicio de su función conciliadora deberá brindar información objetiva y veraz a las partes sobre el procedimiento, los efectos y alcances de sus soluciones, exhortando a las partes que también brinden información veraz en el procedimiento de

conciliación. Además, debe exhortar a los asesores de las partes a que brinden información veraz a sus clientes a efectos que puedan tomar una decisión acertada en la audiencia. (Art. 2° de la L.C.)

c) Principio de Buena Fe.- El conciliador debe presumir que las partes actúan de buena fe en la audiencia y motivar a través de sus técnicas a que actúen con honestidad y lealtad en el procedimiento. (Art. 2° de la L.C.)

d) Principio de Confidencialidad.- Es tal vez uno de los más importantes principios después de la imparcialidad. Por este principio el conciliador está obligado a guardar reserva sobre la información que proporcionen las partes o sus asesores en la audiencia de conciliación.

- **Alcance de la Confidencialidad.-** La confidencialidad recae sobre lo sostenido del conflicto o lo propuesto y sobre otros hechos distintos a los que dieron origen la controversia pero que se haya narrado en la audiencia. Es de igual confidencial la información proporcionada en sesión conjunta como en sesión privada, en este último caso, el conciliador solo podrá revelar a la otra parte aquello que se le autorice (Art. 8° R.L.C.)

- **Valor de la información.-** La información proporcionada en las audiencias de conciliación carecen de valor probatoria ante sede judicial, arbitral o administrativa.

- **Excepciones a la confidencialidad.-** Constituyen excepciones a la confidencialidad los siguientes: Conocimiento de la existencia o comisión de un delito contra el cuerpo, la vida y la salud. Conocimiento de la existencia o comisión de un delito contra la libertad sexual. Cuando la trascendencia social del hecho no deba ser privilegiada con la reserva. Cuando la información atenta contra los principios o fines de la conciliación.

e) Principio de Imparcialidad.- Consiste en que el conciliador durante el procedimiento y audiencia de conciliación no debe intentar favorecer de gesto, postura, palabra o actos a ninguna de las partes, jamás el conciliador deberá de valorar la información proporcionada por las partes calificándolas de justas o injustas, o verdaderas o falsas, puesto que para el conciliador lo importante es mantener una postura objetiva sobre el conflicto identificando intereses y temas a resolver y no identificándose con el conflicto o las partes.

f) Principio de Neutralidad.- Consiste en que no exista vínculos de parentesco, afinidad, hereditarios, legatarios o crediticios, de amistad o enemistad, u de otro tipo, entre el conciliador o los miembros del Centro y alguna de las partes. Salvo que las partes autoricen de forma expresa la participación del conciliador. (Art. 2° del R.L.C.)

g) Principio de Legalidad.- El conciliador al conducir un procedimiento conciliatorio tiene que regirse por la legislación de la materia y cuando promueva acuerdos debe instar a las partes a que estos, se otorguen en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

h) Principio de Celeridad.- El conciliador tiene que procurar que el procedimiento no exceda de los plazos legales, ayudando arribar a soluciones rápidas y prontas.

i) Principio de Economía.- Este principio tiene como objetivo que el conciliador al ejercer su función ayude a las partes a llegar a una solución ahorrando tiempo, dinero y desgaste emocional.

j) Principio de Autonomía de la Voluntad.- Al ser la conciliación una institución consensual, los acuerdos a los cuales arriben las partes deben obedecer única y exclusivamente a su voluntad. Sin embargo, la autonomía de la voluntad no se ejercen de forma irrestricta, pues los conciliantes pueden disponer de sus derechos siempre que sus decisiones no vayan en

contra del orden público, las normas imperativas, las buenas costumbres o afecten a terceros (Art. 3° de la L.C. y Art. 5° del R.L.C.). (p. 158-160)

1.4.4. FORMALIDAD

Conforme a lo que señala Díaz (2013a) respecto a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, en el artículo 15° dispone:

Se da por concluido el procedimiento conciliatorio por:

- a) Acuerdo total de las partes.
- b) Acuerdo parcial de las partes.
- c) Falta de acuerdo entre las partes.
- d) Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.
- e) Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión.
- f) Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, por advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse antes de la conclusión de la Audiencia o por negarse a firmar el Acta de Conciliación (...). (p. 223)

1.4.4.1. FORMAS DE CONCLUSIÓN

Así lo detalla Díaz (2013a), siendo los siguientes:

- **Acuerdo total.-** Requiere de la asistencia de todos los convocados a la audiencia y que todos ellos acuerden dar solución a todas las controversias.

- **Acuerdo parcial.-** Requiere de la asistencia de todos los convocados a la audiencia, puede ser de dos clases:

* *De pretensiones.-* Cuando se resuelve una o algunas de las pretensiones sometidas a conciliación, quedando pendiente otras por resolver.

* *Sujetos.*- Cuando existe más de dos solicitantes y/o invitados a conciliar y solo se resuelve el conflicto entre alguno de ellos, manteniéndose el conflicto con los demás.

- **Falta de acuerdo.**- Cuando asisten a la audiencia todos los convocados y deciden no resolver el conflicto.

- **Inasistencia de una parte a dos sesiones consecutivas o alternadas.**- Cada parte tendrá la oportunidad de ser invitada dos veces, pero cuando se verifique que una de ellas inasistió dos veces se dará por concluida la audiencia por su inasistencia.

- **Inasistencia de ambas partes a una sesión.**- Cuando ambas partes inasistan a una sesión no deberá convocarse a mas sesiones, debiendo concluirse el procedimiento.

- **Por decisión debidamente fundamentada del conciliador.**- Procede cuando: Una parte se niega a firmar el acta o se retira de la conciliación; y Cuando se vulnera los principios éticos de la conciliación en audiencia efectiva. (p. 105-106)

Asimismo, la Ley N° 26872 (1997), en el Artículo 16°, dispone:

El Acta deberá contener lo siguiente:

- a. Número correlativo.
- b. Número de expediente.
- c. Lugar y fecha en la que se suscribe.
- d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las partes o de sus representantes (...).
- e. Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador.
- f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador.
- g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación, (...).

- h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, (...).
- i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso.
- j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso.
- k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial.

1.4.5. VALIDEZ DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

En lo señalado por Díaz (2013a), respecto a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, en el artículo 16° dispone:

La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales a), b), f), j) y k) del presente artículo no enerva la validez del Acta, en cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15. La omisión en el Acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), g), h), e i) del presente artículo, dará lugar a la nulidad documental del Acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16-A. El Acta no deberá contener en ningún caso, enmendaduras, borrones, raspaduras ni superposiciones entre líneas, bajo sanción de nulidad (...). (p. 224)

En concordancia con el (Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, 2008) Reglamento de la Ley de Conciliación, en el artículo 22° establece:

El acta que contiene el acuerdo conciliatorio es un documento privado y puede ser ofrecido como medio de prueba en un proceso judicial. El acuerdo conciliatorio subsiste aunque el documento que lo contiene se declare nulo. El acta que contiene el acuerdo conciliatorio debe precisar los

acuerdos ciertos, expresos y exigibles establecidos por las partes. En todos los casos de actas que contengan acuerdos conciliatorios, necesariamente deberá consignarse la declaración expresa del Abogado del centro de conciliación verificando la legalidad del acuerdo. El Acta de Conciliación a que se refiere el artículo 16 de la Ley será redactada en un formato especial que deberá ser aprobado por el MINJUS. El Acta de Conciliación se ejecutará a través del proceso único de ejecución. (p. 241)

Ahora bien, Díaz (2013a, pág. 147) señala con respecto al mérito del Acta de Conciliación lo siguiente:

A. Las actas con acuerdo total tienen el siguiente mérito:

- Según la Ley Conciliación: Valor de Título de Ejecución.
- Según el Reglamento de Conciliación: Valor de Título Ejecutivo.
- Según el C.P.C.: Valor de Título Ejecutivo Extrajudicial.

B. Las actas con acuerdo parcial tienen el doble valor legal:

- Título de Ejecución sobre lo acordado.
- Requisito de procedibilidad sobre lo no resuelto.

1.4.6. CONCILIACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA

Al respecto Díaz (2013b), en el manual de conciliación familiar señala:

La conciliación familiar es un procedimiento de cooperación en el cual un tercero imparcial con el propósito de ayudar a lograr la reorganización de la familia facilita el diálogo entre sus miembros a efectos de definir y resolver sus conflictos, a través de la toma de decisiones de sus propios protagonistas. En nuestro país la conciliación familiar fue considerada en sus inicios como una materia conciliable obligatoria, es decir, que era necesario agotar la conciliación antes de demandar una pretensión familiar que verse sobre derechos disponibles. Sin embargo, fue modificada dicha disposición y en la actualidad la conciliación en asuntos de familia es considerada una materia facultativa, pues las partes o agentes del conflicto familiar tienen la libertad y facultad de elegir si desean agotar la conciliación

antes de demandar judicialmente o de recurrir directamente al proceso judicial. (p. 47)

1.4.6.1. VENTAJAS DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA

Dichas ventajas nos detalla Díaz (2013b) en el manual de conciliación familiar de la siguiente manera:

- Minimiza los efectos emocionales y psicológicos del mecanismo confrontacional.
- Preserva las relaciones entre los miembros de la familia.
- Las partes regulan su vida futura.
- La cooperación de los padres favorece a los menores para su normal desarrollo.
- Disminuye los gastos económicos de las partes. (p. 51-52)

1.4.6.2. ROL DEL CONCILIADOR

El rol del conciliador es facilitar la comunicación entre las partes conciliantes, que acuden a un centro de conciliación, para poner fin a sus conflictos y lleguen a optar por acuerdos mutuos. Según Díaz (2013a) menciona que son los siguientes:

- Facilitar el diálogo.
- Mantener un clima desapasionado.
- Que las partes regulen sus relaciones futuras.
- Que trabajen para el futuro.
- Ventilar los sentimientos y emociones.
- Equilibrar los poderes entre las partes.
- Ayudar a que las partes evolucionen a la etapa de reorganización. (p. 176-177)

1.5. INOPERANCIA DE LA FACULTAD OTORGADA POR LA LEY N° 27007

Las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente – DEMUNA, que a nivel nacional funcionan dentro de las Municipalidades, desempeñan una labor muy

importante en protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, la atención que brindan es gratuita, por ello beneficia a una gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos. Ahora bien, a través de la Ley N° 27007, que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente, a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, lo que permite que las Actas de Conciliación que se celebran en la DEMUNA, tengan valor de sentencia o de cosa juzgada; es decir, los acuerdos voluntarios pactados y plasmados en dicha Acta, deben ser cumplidos a cabalidad por las partes; ya que, en caso de incumplimiento de los acuerdos, se podrá exigir su cumplimiento ante el Poder Judicial.

En muchas Municipalidades a nivel nacional donde funcionan la DEMUNA, no cuenta con la autorización para poder efectuar actas de conciliación con título de ejecución, dicha facultad otorgada por la Ley N° 27007; ello les inhabilita para que las actas emitidas sean consideradas con mérito de título de ejecución, y solamente tienen valor de medio probatorio para impulsar e iniciar un proceso judicial; lo que dificulta el ejercicio pleno del derecho alimentario de los menores de edad, siendo un derecho constitucional que se ve limitado. Situación que se debe tomar en cuenta y prestar mayor atención, más aun en ciudades y lugares donde no cuentan con centros de conciliación autorizados que brinden este servicio; y con dicha facultad otorgada por la Ley N° 27007 y su reglamento, estaría beneficiando a una gran parte de la población y más aún a quienes no cuentan con recursos económicos, y tratándose de los derechos de los niños y adolescentes quienes requieren un desarrollo adecuado y bienestar general.

De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo (2013):

Precisó que dicho estudio, elaborado con el apoyo de Save the Children, fue realizado entre los meses de setiembre y octubre del año 2012, tras una supervisión a 48 Demuna, ubicadas en 9 regiones del país. Entre los resultados, Ramos comentó que el 85% de las Demunas supervisadas prestan servicios de conciliación y el 68% entrega actas de conciliación sin título de ejecución; lo que no posibilita que dicho documento pueda ser utilizado en un

proceso judicial. Ello podría obedecer a que no cuentan con la habilitación establecida en la ley N° 27007. (...) debido a dicha problemática, recomendó a las autoridades municipales de todo el país asignar y ejecutar el presupuesto necesario para que la Demuna cuente con la infraestructura adecuada así como los servicios públicos y materiales básicos para la atención del servicio. Asimismo, solicito a las referidas autoridades ediles, que en su calidad de entidades promotores de la Demuna, realicen los trámites conducentes a lograr que estas puedan expedir actas de conciliación con título de ejecución (...).

Las restricciones de la Ley N° 27007 y su Reglamento, causan la inoperancia de la facultad otorgada en dicha Ley, siendo que se debería ampliar el sentido de los conciliadores que son capacitados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y que deben de estar laborando dentro de una Defensoría del Niño y del Adolescente; siendo que debería abarcar este aspecto incluyendo a los conciliadores extrajudiciales que también son capacitados por los centros de formación y capacitación de conciliadores extrajudiciales autorizados por el Ministerio de Justicia, a razón de que los conciliadores extrajudiciales con especialidad en Familia se encuentran aptos para efectuar conciliaciones referentes a las materias conciliables que faculta la Ley N° 27007 a las Defensorías del Niño y del Adolescente; es por ello, que esta restricción debe ser ampliada, para que las actas de conciliación que se efectúen en la DEMUNA pueden ser ejecutadas ante su incumplimiento en las instancias correspondientes. Resguardando los derechos de los menores de edad que son el de alimentos, ya que es un derecho constitucional reconocido por nuestra Carta Magna.

1.5.1. DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Respecto a la Defensoría del Niño y del Adolescente, en el Material Básico para Defensorías Comunitarias, Anónimo (2002), afirma:

La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio para promover y proteger los derechos que las leyes reconocen a los niños, niñas y

adolescentes. Este servicio está reconocido en el artículo 45° del Código de los Niños y Adolescentes donde además, dice que debe estar inscrito en la Oficina Nacional de Defensorías del MIMDES y que es gratuito. (p. 19)

Por otro lado, en el Manual de Gestión DEMUNA, Anónimo (2004), señala:

La DEMUNA es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo Ente Rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) –*ahora MIMP*-. En general, la DEMUNA es un espacio Municipal para la Protección y Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. (p. 8)

Por lo general la DEMUNA, tiene su funcionamiento en la Municipalidad de cada ciudad a nivel nacional, siendo de esencial importancia porque promueven la defensa de los derechos del niño y adolescente, considerando que son un sector importante de la sociedad que merece una atención coordinada y adecuada. Ahora bien, los documentos efectuados en dicha Oficina realizados de mutuo acuerdo, como por ejemplo en materia de alimentos, ante su incumplimiento no tienen carácter de ejecución en la instancia correspondiente, solo es un medio probatorio para el inicio de un proceso judicial; sumándole a ello está la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente, a que puedan realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, sin embargo en dicha Ley existen restricciones que impiden que sea posible dicha facultad.

Es necesario mencionar, que muchas de las DEMUNA a nivel nacional no están autorizadas para realizar dichas conciliaciones con título de ejecución y dentro de ellas se encuentra la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar y sumado a ello, es preciso señalar que no existe un Centro de Conciliación Autorizado en dicha Provincia; ello implica, de cierto modo un perjuicio a una parte de la población que no cuentan con recursos económicos para poder iniciar un proceso judicial, y hacer valer sus derechos. Y tratándose

del derecho de alimentos que es un derecho constitucional reconocido en nuestra Carta Magna, y amerita una necesidad urgente de ser respetado y resguardado.

1.5.1.1. PRINCIPIOS

Según en la Guía para la Formación de Defensorías del Niño, Niña y Adolescente, Anónimo (2008), detalla que las Defensorías deben brindar su servicio basados en los siguientes principios:

- **El Interés Superior del Niño y del Adolescente.-** Principio que obliga a las autoridades públicas y privadas a considerar, en todo momento de su intervención, en primer lugar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y optar por éstos, cuando exista conflicto entre otros de igual jerarquía, haciéndolos prevalecer.
- **El Niño como sujeto de Derecho.-** Principio bajo el cual subyace la idea que el niño, niña y adolescente tienen capacidad de ser titulares de derechos.
- **La Imparcialidad.-** Los defensores actuarán sin ninguna clase de discriminación o favoritismo hacia las partes que intervienen en el procedimiento, otorgándoles una atención basada en el respeto de sus derechos, resolviendo conforme al principio del interés superior del niño y del ordenamiento jurídico.
- **La Confidencialidad.-** La información derivada del procedimiento de atención de casos es reservada, no debiendo revelarse ninguna etapa del procedimiento a las personas que intervienen en el mismo, ni a terceros. Solo el caso podrá ser revelado a los titulares del acto, siempre que sea orientada a la restitución de un derecho o tratamiento especial.

- **Impulso de Oficio.-** Los actos que realicen los integrantes de una defensoría, dentro del procedimiento de atención de casos y en el marco de sus funciones, se impulsarán y dirigirán por estos, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad. (p. 3)

Por otro lado, en el Manual de Gestión DEMUNA, Anónimo (2004), señala respecto a los principios en los que se basa las DEMUNA, para que puedan brindar su servicio, estos son:

- **El Interés Superior del Niño y del Adolescente.-** La consideración del niño como lo más importante en cualquier situación que lo involucre.
- **Gratuidad.-** La prestación de los servicios es totalmente gratuita para todos los usuarios.
- **Confidencialidad.-** Absoluta reserva de la información transmitida por los usuarios.
- **Carácter orientador y no impositivo.-** Promueve el diálogo y búsqueda de alternativas, y evita la manipulación e imposición de criterios.
- **No discriminatorio.-** Garantizar un trato humano, justo y equitativo, y abierto a cualquier adulto o niño.
- **Legalidad.-** Su actuación se desarrolla de acuerdo a la legislación y normatividad correspondiente. (p. 9)

1.5.1.2. FUNCIONES

Con respecto a las funciones, mencionaremos lo que señala el Material Básico para Defensorías Comunitarias, Anónimo (2002), quien detalla que todas las Defensorías del Niño y del Adolescente tienen iguales funciones (...), siendo las siguientes:

- Intervenir cuando un niño, niña o adolescente sufra algún tipo de violación a sus derechos
- Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.
- Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no existan procesos judiciales.
- Velar por el cumplimiento de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Denunciar ante las autoridades las faltas y delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes. (p. 21)

De acuerdo a la Ley N° 27337 (2000), artículo 45° dispone:

Son funciones de la Defensoría:

- a) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas o privadas;
- b) Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior;
- c) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias;
- d) Conocer de la colocación familiar;
- e) Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación;
- f) Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan;
- g) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos; y,
- h) Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y adolescentes.

1.5.1.3. ACTIVIDADES DE LA DEMUNA

Las actividades de la DEMUNA según el Manual de Gestión DEMUNA, (Anónimo, 2004), señala: “Se desarrollan en función de los Planes de Trabajo, los cuales a su vez deben ser parte de los Planes de Desarrollo local de los Municipios” (p. 13).

En ese sentido, para la elaboración del Plan de Trabajo, Anónimo (2004), hace la siguiente recomendación:

- Elaborar un diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en la localidad, identificando los principales problemas y acciones que se desarrollan.
- Hacer un análisis de los principales problemas, recursos y acciones de la niñez y la adolescencia en la localidad.
- Definir las fortalezas y debilidades de la DEMUNA.
- Precisar objetivos para el año de trabajo.
- Establecer líneas de actividades, de protección (atención de casos) y de promoción.
- Definir las metas que se esperan alcanzar.
- Definir las actividades por cada línea.
- Definir el presupuesto por actividad, los responsables y recursos para su ejecución. (p. 14)

Por otro lado, Anónimo (2004), indica que a nivel general, las actividades pueden ser de:

- **Protección.-** Dirigidas a la atención de casos que atenten o vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En general, la DEMUNA puede atender “cualquier tipo” de casos que comprendan los derechos de la niña, niño y adolescente. De acuerdo a las normas existentes y su jurisdicción podrá:

- * Brindar orientación general para el tratamiento del caso.
- * Interceder ante organismos según corresponda.
- * Apoyar la denuncia de delitos ante las autoridades competentes.
- * Resolver conflictos en base a la conciliación.
- * Hacer seguimiento de casos en la aplicación de medidas socioeducativas por encargo del Poder Judicial.
- * Desarrollar actividades preventivas.

- **Promoción.-** Orientadas a la prevención o intervención sobre problemas vinculados a la niñez y adolescencia, a través de diversas modalidades (capacitación, campañas de movilización o intervención, actividades de información o sensibilización, etc.)

Las DEMUNAS deberían coordinar y trabajar con otras organizaciones vinculadas a la temática de la niñez y adolescencia. Incluso, deberían promover la organización de Comités Municipales por los Derechos del Niño y del Adolescente (COMUDENA) integrados por organizaciones del Estado y Sociedad Civil (centros de salud, escuelas, parroquias, comisarías, organizaciones de base, etc.). Ello permitirá un mejor tratamiento integral de los casos, así como potenciar los esfuerzos de promoción que se desarrollan en la localidad, de manera permanente y organizada. (p. 14)

Las actividades que realiza la DEMUNA, son en beneficio de los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de resguardar sus derechos, y ante alguna vulneración o menoscabo, tomar las acciones correspondientes para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, por ser una parte de la población más vulnerable y merecen una atención inmediata y adecuada.

1.5.2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CASOS

Las acciones que realiza la Defensoría del Niño y Adolescente, para la atención de un caso involucran varias etapas, siendo éstas detalladas en el

Manual de Gestión DEMUNA, es por ello que Anónimo (2004), señala las siguientes:

1°. RECEPCIÓN.- Es la etapa donde el defensor toma conocimiento del caso, sea de manera verbal o escrita. Para ello se abrirá un expediente donde se anexará la ficha de recepción de casos.

- *Uso del expediente.-* El expediente es de uso exclusivo de la DEMUNA y su contenido es confidencial, pudiendo solo las partes tener acceso a los documentos que contengan los acuerdos y los compromisos. Asimismo, se deberá brindar información del caso atendido a las autoridades y debidamente fundamentado.

- *Instrumentos que deberá contener el expediente.-* Ficha de Recepción de Casos, Ficha de Entrevista, Ficha de Derivación o Solicitud de Atención Especializada, Actas de Verificación, Citaciones o Invitaciones, Acta de Conciliación, Acta de Compromiso, Ficha de Seguimiento, otras que el Defensor considere pertinente para la atención del caso.

2°. CALIFICACIÓN.- Es el momento en el cual el Defensor evalúa el caso recibido y determina la acción a seguir. Para tal efecto se podrían realizar:

- Entrevistas a las niñas, niños y adolescentes, así como a las partes por separado para poder evaluar de manera imparcial la situación presentada.
- Verificación de los hechos expuestos, a través de gestiones, coordinaciones y visitas sociales.
- Evaluaciones, que podrán ser realizadas por profesionales especializados.
- Otras acciones que considere necesarias el Defensor, siempre que no atenten con la integridad de las partes.

3°. EJECUCIÓN.- Como resultado de la calificación el Defensor puede disponer la ejecución de lo siguiente:

a) Derivación.- El defensor dispone el traslado del caso para su atención a otro servicio o institución. Para ello, se deberá coordinar previamente con la institución pertinente. La derivación procede:

- Cuando el caso no le compete a la DEMUNA, por tratarse de una Falta o Delito. Entonces, se debe denunciar inmediatamente a la autoridad competente.
- Cuando la DEMUNA no cuenta con los recursos humanos profesionales o no puede ofrecer la atención especializada requerida por el usuario. Frente a ello, canalizará el caso a otro organismo competente y hará el seguimiento del caso.

b) Intervención.- Cuando la DEMUNA trata directamente el caso. Esto se hará en base al personal, y puede contar con el apoyo de otros recursos disponibles de su propia Municipalidad o en la localidad.

4°. SEGUIMIENTO.- Es el conjunto de acciones que realiza la DEMUNA a fin de:

- Verificar los avances de los casos atendidos.
- Lograr el cumplimiento de las medidas tomadas en favor de las niñas, niños y adolescentes.
- Evaluar el cumplimiento de las Actas de Conciliación.

El seguimiento se podrá realizar a través de:

- Visitas periódicas de la DEMUNA a las partes.
- Informes periódicos de los profesionales o representantes de instituciones a los cuales se les derivo el caso.
- Reuniones con las partes para evaluar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
- Visitas domiciliarias.
- Otros que el Defensor considere pertinentes. (p. 16-18)

1.5.3. REQUISITOS PARA QUE LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, PUEDAN REALIZAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES CON TÍTULO DE EJECUCIÓN

Así lo describe (Anónimo, 2004): “La DEMUNA tiene que estar autorizada por el MIMDES –*ahora MIMP*- para que sus actas de conciliación en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, tengan Título de Ejecución; es decir, el mismo valor que una sentencia judicial” (p. 25).

En ese sentido, Anónimo (2004), hace mención de la siguiente documentación:

- Solicitud dirigida a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMDES (*ahora MIMP*) firmada por la máxima autoridad que promueve la Defensoría del Niño y Adolescente, precisando el nombre de ésta; así como el número que le identifica en el Registro de Defensorías del Niño y del Adolescente del MIMDES (*ahora MIMP*).
- Ficha de Datos proporcionada por la Dirección General de la Niña, Niño y Adolescente del MIMDES (*ahora MIMP*) en la cual se consignará claramente los nombres del Conciliador de la Defensoría del Niño y Adolescente y del abogado encargado de verificar la legalidad de las actas. Dicha ficha tendrá carácter de declaración jurada.
- Copia autenticada de carnet de colegiatura del abogado encargado de verificar la legalidad de las actas y constancia de estar habilitado expedida por el Colegio de Abogados al cual pertenece.
- Declaración Jurada o Carta de Compromiso de la máxima autoridad de la institución promotora, manifestando la intención de apoyar la labor de conciliación en la Defensoría del Niño y del Adolescente; así como la continuidad del servicio.
- Infraestructura e inmobiliario adecuados así como un ambiente privado para las conciliaciones.
- Adecuado sistema de archivo y registro de las actas de conciliación.

- Relación del personal de apoyo que garantice la entrega de las invitaciones a las audiencias de conciliación.
- Horario de atención de mínimo diez horas semanales. (p. 39)

Asimismo, Anónimo (2004), señala estos también son los requisitos, además de la autorización, la DEMUNA deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Registro en la Oficina de Defensorías de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMDES (*ahora MIMP*).
- Contar con un abogado debidamente capacitado, que verifique la legalidad de las Actas.
- Contar por lo menos con una persona acreditada por el MIMDES (*ahora MIMP*) como conciliador.
- Disponer de la infraestructura y mobiliarios adecuados, y ambiente privado para las conciliaciones.
- Contar con un sistema de archivo y registro de Actas de Conciliación.
- Contar con el personal de apoyo que garantice la entrega de invitaciones a las audiencias de conciliación.
- Entregar copia de las Actas de Conciliación a las partes una vez concluida la audiencia. (p. 24)

Es necesario indicar, que la DEMUNA que no cuente con la autorización para realizar conciliaciones con Título de Ejecución, deberá efectuar un seguimiento que pueda identificar que los acuerdos que se plasmaron en el Acta de Conciliación se están cumpliendo; si en caso no fuera así, deberán orientar de forma adecuada a la parte interesada para que pueda acudir al Poder Judicial; en razón de que dichas actas no tienen el valor de una sentencia judicial, por no contar con la autorización correspondiente para tal fin; sin embargo, solo serán consideradas como medio probatorio para el inicio de un proceso judicial en la instancia que corresponda.

1.5.4. INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Conforme a lo que señala (Anónimo, 2008): “El defensor puede implementar mecanismos de solución como resultado de la calificación” (p. 18).

Dichos mecanismos tienen la finalidad de que el defensor pueda intervenir en cada caso que se presente, ante la Defensoría del Niño y Adolescente.

Por ello, Anónimo (2008), menciona los siguientes mecanismos:

- **ORIENTACIÓN.-** Es el mecanismo de atención, mediante el cual el defensor proporciona información variada sobre temas generales o específicos relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- **DERIVACIÓN.-** Es el mecanismo, mediante el cual se traslada formalmente un caso a una institución pública o privada u a otra Defensoría del Niño y del Adolescente, para su atención. Si del mismo caso se desprenden asuntos que no son materia de derivación se dispondrán las acciones que corresponden, a fin de velar por el interés y derecho de las niñas, niños o adolescentes involucrados.
- **COMPETENCIA.-** Las Defensorías del Niño y del Adolescente, están facultadas para intervenir solo en los asuntos concernientes a los derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre que no existan procesos judiciales en trámite o resueltos sobre estas materias y que corresponden a las funciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes. Podrán solicitar la intervención de cualquier autoridad a fin de garantizar la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero en ningún caso asumir la defensa legal en un proceso judicial.
- **CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.-** Es un mecanismo alternativo orientado a la solución de conflictos familiares, en la que el defensor;

busca promover un acuerdo voluntario entre las partes, atendiendo al principio del interés superior del niño, acciones dispuestas, seguimiento y conclusión del procedimiento. (p. 18)

1.5.5. MATERIAS COMPETENTES DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Respecto a las materias conciliables, que son competentes para la Defensoría del Niño y del Adolescente, podemos señalar las siguientes:

1.5.5.1. MATERIAS CONCILIABLES

Según Anónimo (2008), afirma que se puede resolver vía conciliación las siguientes materias:

- **ALIMENTOS.-** Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación de la niña, niño y adolescente, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de post - parto.
- **TENENCIA.-** Es un derecho de la patria potestad, por el cual uno de los progenitores asume, el padre o la madre asume el cuidado de la niña, niño o adolescente, y vive con el mismo.
- **RÉGIMEN DE VISITAS.-** Es el derecho que tiene el padre o la madre que no vive con su hijo o hija de mantener contacto con el mismo. (p. 19)

1.5.5.2. MATERIAS QUE SE RESUELVEN VÍA COMPROMISO

- **COMPROMISO.-** Según (Anónimo, 2008) indica: “Es el acto mediante el cual una o más personas se obligan a restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes o garantizar su cumplimiento. Siempre y cuando los hechos no constituyan falta o delito” (p. 19).

Asimismo Anónimo (2008), detalla que se resuelven vía acta de compromiso las siguientes materias:

* **Reconocimiento voluntario de Filiación Extrajudicial.-** Es el reconocimiento voluntario de un niño o niña como hijo, que realiza su progenitor o progenitora ante los registros civiles.

* **Normas de comportamiento.-** Son reglas o pautas que están orientadas a resguardar los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes. Estas normas pueden aplicarse tanto a los padres como a las niñas, niños y adolescentes, siempre que no implique violencia.

* **Gestiones administrativas específicas.-** Se consideran a las acciones de coordinación que se despliegan para la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en los programas sociales que se diseñan para su atención, en su localidad. En caso de los adolescentes trabajadores se deberá llevar un registro de los mismos. Así como; las gestiones dirigidas a salvaguardar la vulneración de los siguientes derechos: a la identidad, a la educación, a la libertad personal y los otros derechos no citados. (p. 19-20)

Las materias conciliables en la Defensoría del Niño y del Adolescente, son de alimentos, tenencia y régimen de visitas; siendo estos casos muy frecuentes que se suscitan en nuestra realidad, muchas familias presentan divergencias y problemas, quienes recurren a la DEMUNA con el fin de orientación y promoción de los lazos familiares; por tanto ameritan una adecuada atención.

1.6. MARCO NORMATIVO

1.6.1. LEGISLACIÓN

Conforme a la Ley N° 27972 (2003), en el artículo 84° establece:

Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (...) 1.3. Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad local. (...) 2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (...) 2.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes DEMUNA de acuerdo a la legislación sobre la materia.

Por otro lado, en la (Ley N° 27337, 2000), en el artículo 42° dispone:

La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito. En concordancia con el artículo 44° señala: La Defensoría estará integrada por profesionales de diversas disciplinas de reconocida solvencia moral, con el apoyo de personas capacitadas para desempeñar las funciones propias del servicio, quienes actuarán como Promotores-Defensores. Las Defensorías que no cuenten con profesionales podrán estar integradas por personas de la comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para el ejercicio de su función.

Ahora bien, respecto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1989) sobre la Convención sobre los Derechos del Niño: “Artículo 3°, 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo (2009), señala las funciones normativas del interés superior del niño, siendo éstas:

- a)** Es un principio garantista que establece el deber del Estado de privilegiar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos humanos, instituciones o valores constitucionalmente reconocidos, como por ejemplo la identidad o diversidad cultural o intereses públicos o colectivos.
- b)** Sobre la base del interés superior del niño, los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño deben ser interpretados de manera integral y sistemática, debiendo resolverse los conflictos entre ellos mediante el método de la ponderación.
- c)** Implica el deber de privilegio de los derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes en el diseño e implementación de las políticas públicas estatales.
- d)** Garantiza la reducción del margen de discrecionalidad del Estado para restringir los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando así su efectiva protección.
- e)** El interés superior del niño debe ser respetado en el accionar de la sociedad en su conjunto, lo que comprende la actuación de todas las instituciones privadas, así como de sus propios padres o responsables.
- f)** El interés superior del niño puede servir de criterio interpretativo de las normas vigentes, así como de aquellas prácticas que no se encuentran expresamente regidas por la ley, permitiendo en este último caso llenar los vacíos o lagunas legales tanto para la formulación de nuevas normas jurídicas como para la toma de decisiones en los casos en que no existe norma expresa. (p. 18)

1.6.2. DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Los derechos del niño, niña y adolescente, según (Anónimo, 2008), quien detalla los siguientes:

- 1.- El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
- 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgarse leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.
- 3.- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
- 4.- El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
- 5.- El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.
- 6.- El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño a corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia.

7.- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

8.- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

10.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. (p. 26-27)

CAPÍTULO II

VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007

(RESULTADOS)

En este capítulo se muestran los resultados de la presente investigación, el cual comprende el análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y sugerencias; con la finalidad de lograr los objetivos planteados en esta tesis, se presentan los cuadros estadísticos (tablas y gráficas) respecto a las unidades de estudio que está conformado por un total de 270 Actas de Conciliación sobre pensión alimenticia celebradas en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, de los años 2011 al 2013. Asimismo, la encuesta aplicada al personal que labora en la Oficina de la DEMUNA.

Para ello se plasmarán los siguientes datos obtenidos, los casos recepcionados en global, casos atendidos sobre alimentos, formas de conclusión de los casos recepcionados, la cantidad de beneficiarios (hijos menores y mayores de edad), cumplimiento de las Actas de Conciliación sobre alimentos (aportes de la pensión de alimentos). Asimismo la síntesis encuesta aplicada al personal que laboran en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, que indicará el conocimiento sobre la Ley N° 27007, la importancia de la validez del Acta de Conciliación, así como las dificultades y limitaciones que afronta actualmente la Oficina de la DEMUNA.

2.1. CASOS RECEPCIONADOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI.

TABLA N° 01

CASOS	AÑO	CANTIDAD	%
<ul style="list-style-type: none"> ●Alimentos ●Violencia Familiar ●Filiación ●Tenencia ●Régimen de Visitas ●Normas de Conducta ●Derecho a la Salud ●Derecho a la Identidad ●Colocación Familiar ●Trabajo Infantil ●Violación Sexual ●Bulling ●Entre otros 	2011	234	20,24%
	2012	494	42,73%
	2013	428	37,02%
TOTAL		1156	100,00%

FUENTE: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 01, se logró obtener la totalidad de los casos que anualmente se reciben en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar - Ayaviri, para efectuar las Actas de Compromiso y Actas de Conciliación conforme a la materia y a la facultad que posee la DEMUNA, o caso contrario se derive el caso recepcionado a la instancia que corresponda para iniciar las acciones legales que amerite según el caso y/o materia; es por ello, la importancia de las funciones que desempeña la DEMUNA ya que se vienen atendiendo una variedad de casos respecto a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, ya sean celebrándose Actas de Compromiso y/o de Conciliación, así como derivar el caso a la instancia correspondiente. Su función es primordial, en lugares donde no se cuenta con el funcionamiento de Centros de Conciliación autorizados para efectos de una solución pacífica de sus problemas.

Ahora bien, que conforme a la Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, en el artículo 45° dispone las funciones primordiales de la DEMUNA, siendo que promueve y protege los derechos del niño, niña y adolescente; y más aún que este servicio que brinda es gratuito y beneficia a gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos. Asimismo, el (Tribunal Constitucional, 2015), hace mención a la Constitución Política del Estado, Artículo 1° establece: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (p. 13).

Al respecto Fernández et al. (2005), señala:

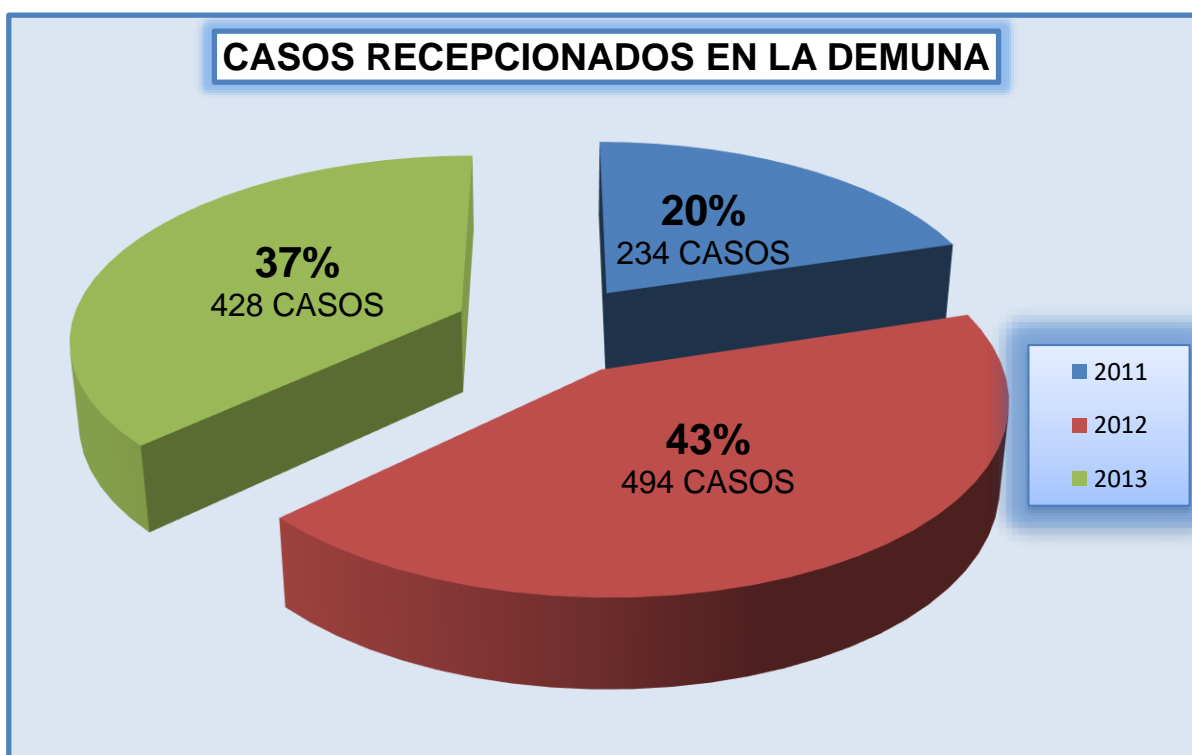
El enunciado contenido en el artículo 1 de la Constitución Peruana de 1993 es el eje sobre el cual gira la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como de todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico del país. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, con más precisión, cabe expresar que la persona humana, considerada en sí misma, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de donde se deriva la obligación de la sociedad y del Estado de defenderla y respetarla. (p. 42)

De igual forma, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1989), señala sobre la Convención sobre los Derechos del Niño: “Artículo 3° inciso 2; los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Asimismo, en la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1978) referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 19°; derechos del Niño, Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

En conclusión, la DEMUNA cumple funciones y actividades primordiales mediante la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que

son considerados una parte de la población vulnerable y merecen una atención inmediata y urgente, ante la vulneración de dichos derechos que atenten contra la vida y dignidad de la persona humana. Es por ello, que la DEMUNA específicamente de la Municipalidad Provincial de Melgar recepciona diversos casos referentes a los derechos del niño y del adolescente con el fin de salvaguardarlos, ya sea dentro de la Oficina de la DEMUNA o mediante la derivación del caso a la instancia correspondiente para efectos de su resguardo ante la vulneración de los derechos; es por ello que las funciones que cumple es de vital importancia y beneficia a los niños y adolescentes.

GRÁFICA N° 01



FUENTE: *Elaboración Propia.*

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 01 se aprecia que entre los años 2011 al 2013 se puede observar una variabilidad de concurrencia a la oficina de la DEMUNA con la finalidad de asistencia y orientación, ya que una de sus funciones es la protección y promoción de los derechos del niño y del adolescente, siendo una parte de la sociedad considerada como la más vulnerable. Como podemos

observar en el año 2011 se recepcionó 234 casos que equivale al 20%, en el año 2012 se recepcionó 494 casos que equivale al 43% y en el año 2013 se recepcionó 428 casos que equivale al 37%, existiendo variabilidad de concurrencia a la Oficina de la DEMUNA respecto a cada año; conforme a las indagaciones realizadas a los que laboran en la oficina de la DEMUNA nos indicaron que las personas de bajos recursos económicos son los que más recurren a dicha Oficina, con el fin de buscar soluciones a los problemas familiares que vienen afrontando; es por ello, que cumple una función primordial de orientación y fortalecimiento de los lazos familiares, siendo que la atención que brinda es gratuita y por ello beneficia a gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos. Es por ello, que en el Material Básico para Defensorías Comunitarias, Anónimo (2002), afirma: “La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio para promover y proteger los derechos que las leyes reconocen a los niños, niñas y adolescentes (...), y que es gratuito” (p. 19).

Por otro lado, podemos apreciar una variabilidad entre uno y otro año, que es a causa de que a pesar de la existencia de la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución, la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar no cuenta con dicha autorización, por tanto las Actas de Conciliación que realizan no pueden ser ejecutados en la instancia correspondiente, a razón de que solo son medios probatorios para el inicio de un proceso judicial; asimismo no cuenta con personal idóneo, es decir no cuentan con un abogado y menos aún con una persona acreditada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como Conciliador, siendo uno de los requisitos para la autorización correspondiente, y así las actas de conciliación tengan el valor de título de ejecución. Siendo estas las causas de la variabilidad de la concurrencia de los años 2011 al 2013.

2.2. CASOS RECEPCIONADOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 SOBRE ALIMENTOS RESPECTO AL TOTAL DE CASOS, EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 02

CASOS	AÑO	CANTIDAD	%	TOTAL DE CASOS	% DEL TOTAL DE CASOS
●PENSIÓN DE ALIMENTOS	2011	80	6,92%	270	23,36%
	2012	110	9,52%		
	2013	80	6,92%		
<ul style="list-style-type: none"> ●Violencia Familiar ●Filiación ●Tenencia ●Régimen de Visitas ●Normas de Conducta ●Derecho a la Salud ●Derecho a la Identidad ●Colocación Familiar ●Trabajo Infantil ●Violación Sexual ●Bulling, otros 	2011	154	13,32%	886	76,64%
	2012	384	33,22%		
	2013	348	30,10%		
TOTAL		1156	100,00%	1156	100,00%

FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 02, se detalla la cantidad de los casos recepcionados por pensión de alimentos respecto al total de los casos que se recepcionan en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar entre los años 2011 al 2013, con la finalidad de hacer notar la incidencia de dichos casos al total de los casos recepcionados. Asimismo, podemos apreciar la concurrencia de la población a la Oficina de la DEMUNA, con el objeto de asistencia y orientación referente a los problemas que enfrenta cada persona, donde se le asistirá celebrando un Acta de Conciliación donde se plasmen acuerdos voluntarios entre las partes, o bien se derive a la instancia judicial que corresponda para el inicio de las acciones legales.

Dicha información recabada en la Oficina de la DEMUNA demuestra la cantidad de casos sobre pensión de alimentos, con ello podemos demostrar que existen personas que recurren a la Oficina de la DEMUNA con el fin de solucionar sus conflictos familiares, en bien de llegar acuerdos que son voluntarios referente a la pensión de alimentos en favor de los menores de edad; siendo el Derecho Alimentario un Derecho Constitucional, por ello el (Tribunal Constitucional, 2015), hace mención: “El artículo 6° segundo párrafo de la Constitución Política del Estado; (...) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. (...)” (p. 18).

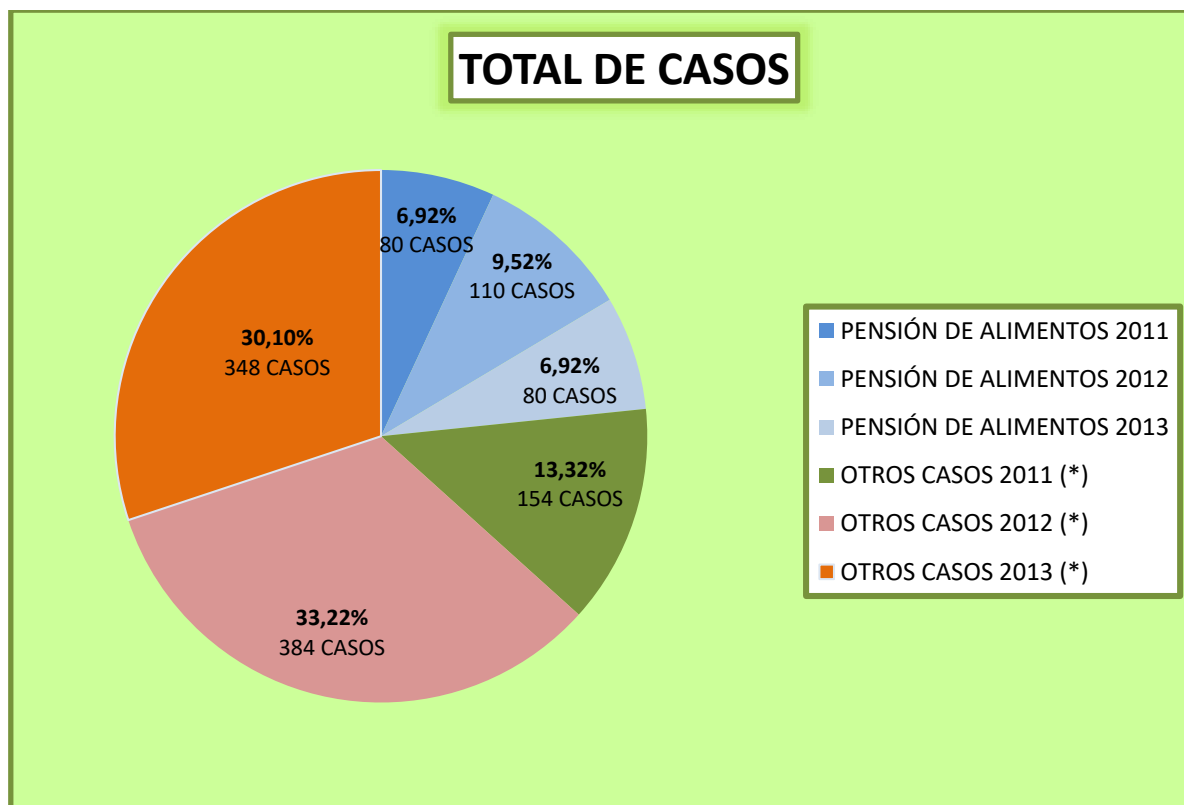
Por ello, Aguilar (1994) afirma que:

La obligación que tienen los padres de atender a la subsistencia de su proge; es el deber moral y jurídico más importante que tiene los padres frente a sus descendientes que no termina tan solo con la provisión de elementos materiales necesarios para su supervivencia, sino que, se hace extensivo a su formación integral; hasta que estén debidamente capacitados para subvenir decorosamente a su propia subsistencia. (p. 53)

Por tanto, es un derecho que le corresponde a todo ser humano; asimismo, es considerado como un derecho natural y fundamental, teniendo su origen en las necesidades vitales de todo ser humano; es por ello que al limitar el derecho alimentario que es un derecho inherente e indispensable para el menor de edad, conlleva al menoscabo de un derecho primordial y afectaría el derecho a la vida consecuentemente al ejercicio de los demás derechos fundamentales que posee el ser humano; siendo que el menor de edad para su subsistencia requiere cubrir sus necesidades básicas dentro de ellas esta los alimentos, que ameritan ser resguardados y protegidos; el derecho alimentario es un derecho constitucional que debe ser respetado, resguardado y más aun tratándose de menores de edad que aún no pueden valerse por sí mismos y requieren cubrir sus necesidades primordiales y su bienestar general.

En la presente tabla también se muestra un resumen del total de casos, donde se aprecia que entre el año 2011 al 2013 se tuvo 1156 casos recepcionados que vendría a ser el 100%, de los cuales 270 son netamente casos de pensión de alimentos que vendría a ser el 23,36% y el resto que son los otros casos que suman la cantidad de 886 que vendría a ser el 76,64%. De lo que se puede concluir la importancia que tiene el derecho alimentario y su vital necesidad para los alimentistas, y sería muy beneficioso si las actas de conciliación celebradas en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar se puedan ejecutar ante su incumplimiento, así se evitaría un desgaste emocional, inversión de dinero y tiempo; siendo que concurren a dicha oficina con el fin de que se puedan solucionar las divergencias de criterios que tienen las partes a través de un mediador que vendría a ser el conciliador; por ello en mérito de poder llegar a acuerdos voluntarios y poner fin a los conflictos familiares que vienen atravesando.

GRÁFICA N° 02



FUENTE: *Elaboración Propia.*

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 02, podemos apreciar el porcentaje de incidencia que tienen los casos por pensión de alimentos los cuales casi llegan a la cuarta parte del total de casos recepcionados en la oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, donde se ve que en el año 2011 se recepcionaron 234 casos que vendría a ser el 20,24% del total de casos, de los cuales 80 casos están referidos a la pensión de alimentos lo que equivale al 6,92% y lo que resta vendría a ser 154 casos están referidos a las demás materias lo que equivale al 13,32%. En el año 2012 se recepcionaron 494 casos que vendría a ser el 42,74% del total de casos, de los cuales 110 casos están referidos a la pensión de alimentos que representa el 9,52% y lo que resta vendría a ser 384 casos lo que representa el 33,22%. En el año 2013 se recepcionaron 428 casos que vendría a ser el 37,02% del total de casos, de los cuales 80 casos están referidos a la pensión de alimentos lo que equivale al 6,92% y lo que resta vendría a ser 348 casos lo que equivale al 30,10%. Como podemos observar existe una variabilidad de concurrencia a la Oficina de la DEMUNA que es de forma anual. Así como se detalla en la gráfica, podemos observar la distribución dada conforme a los porcentajes tomados desde la cantidad global de casos recepcionados restándole la cantidad de casos recepcionados exclusivamente sobre pensión de alimentos, obteniendo el porcentaje de los casos sobre alimentos de forma anual desde el año 2011 al 2013 respectivamente.

Así podemos concluir que los casos recepcionados sobre pensión de alimentos, al celebrarse el acta de conciliación con el fin de llegar a un acuerdo voluntario, y no recurrir al inicio de un proceso judicial de alimentos que demandaría inversión de dinero, tiempo y un desgaste emocional, beneficiaría a los alimentistas.

Por ello, Campana (2003) afirma:

El concepto de alimentos, es objetivo y apunta a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Necesidades que se dan, tanto en el aspecto material: comida, vestido, alimentos propiamente dichos, etc.; como en el aspecto espiritual: educación e instrucción, que resultan imprescindibles para el desarrollo ético, moral e intelectual de la persona. (p. 23)

Es por ello, su vital importancia todo ello en beneficio de los menores de edad, así como el de mayores de edad, que estén cursando estudios superiores; que requieren cubrir sus necesidades básicas y bienestar general. Asimismo, el Acta de Conciliación conlleva a poner fin a los conflictos familiares de las partes, y ello beneficiaría a los alimentistas.

2.3. CASOS SOBRE ALIMENTOS Y LAS DEMÁS MATERIAS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 RECEPCIONADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 03

CASOS	CANTIDAD (2011 AL 2013)	%
●PENSIÓN DE ALIMENTOS	270	23.36%
• OTROS CASOS	886	76.64%
TOTAL	1156	100.00%

FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 03, podemos apreciar los casos sobre pensión de alimentos respecto a los demás casos que vienen recepcionando en la oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, de los cuales podemos ver la incidencia que existe entre los casos sobre pensión de alimentos con los demás casos, siendo que hay 270 casos exclusivamente sobre pensión de alimentos y el restante es 886 casos que son de las demás materias, con lo cual podemos apreciar que los casos de pensión de alimentos son casi la cuarta parte del total de casos recepcionados en la Oficina de la DEMUNA; siendo que es un derecho constitucional y primordial que se encuentra previsto en la Constitución Política del Estado.

Ante ello, Díez-Picazo y Gullón (1983), afirma al respecto:

Que el primer bien que una persona posee en el orden jurídico es su vida. El primer interés que tiene es su conservación y la primera necesidad con que se enfrenta es procurarse los medios para ello. Ningún ordenamiento jurídico puede permanecer indiferente ante esta cuestión, por lo que las leyes establecen preceptos que tienden a asegurar los bienes vitales, satisfacer el interés de ellos y facilitar la obtención de los medios de conservación. Sin embargo, esporádicos preceptos y aisladas obligaciones son insuficientes para asegurar en todo momento aquellos bienes e intereses. (p. 49)

Por otro lado, es así que al limitar el derecho a los alimentos que es un derecho inherente e indispensable para el menor de edad, su transgresión conlleva al menoscabo de este derecho primordial y afectaría directamente al derecho a la vida; siendo que los responsables para la subsistencia y atención del menor de edad son los progenitores, a través de la relación paterno filial, es que el menor de edad adquiere dicho derecho. Ante ello, es necesario contar con los instrumentos jurídicos necesarios para poder evitar esta transgresión; por ello, es realmente necesaria la atención y la prevalencia de la aplicación del principio del interés superior del niño, a efectos de salvaguardar sus derechos y hacer efectivo el respeto de los mismos. A razón de este principio se debe normar adecuadamente el derecho alimentario acorde a nuestra realidad actual, y más aún cuando se trata de personas de bajos recursos económicos, para que puedan ejercitar plenamente este derecho indispensable.

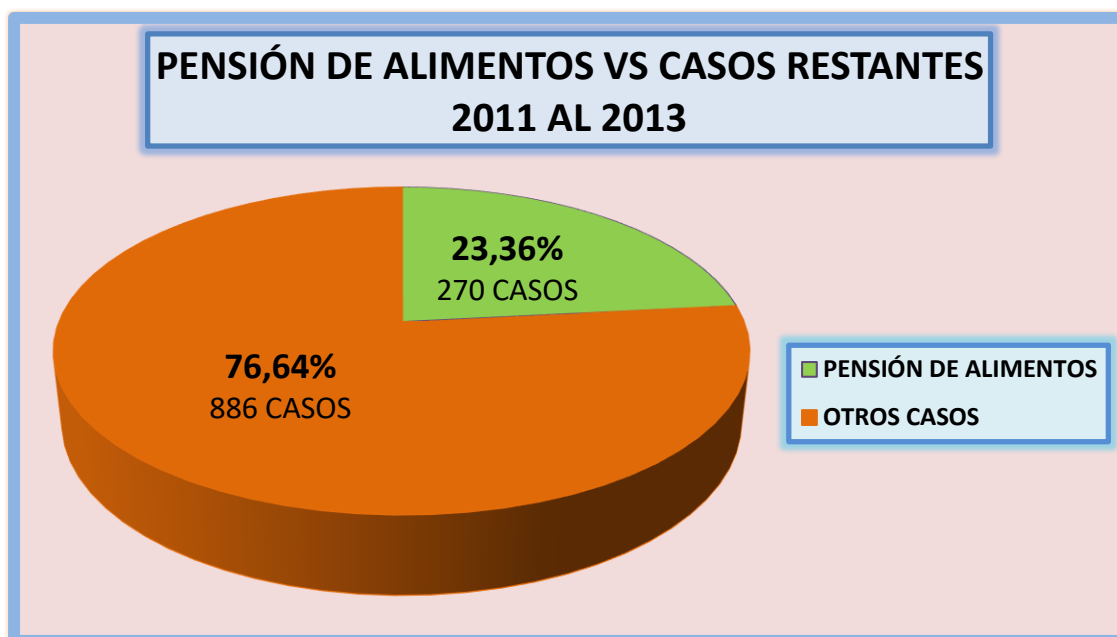
En ese sentido, Peralta (2008) hace mención lo siguiente:

El Código actual establece que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y de las posibilidades de quien debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor. Empero, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos. Además, los alimentos se incrementan o reducen según

el aumento o disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarlos. (p. 581)

El derecho a los alimentos es primordial, para el sustento de los alimentistas, considerando que abarca también educación, vivienda, salud, recreación y el bienestar general; por tanto merece una atención adecuada y coordinada con el fin de salvaguardar dichos derechos, ante ello la DEMUNA cumple funciones importantes de protección y promoción de los derechos del niño y del adolescente. Actualmente los casos sobre pensión de alimentos se presentan con mayor frecuencia, las razones son muchas; siendo la más común la separación de los padres, abandono o desentendimiento del padre y/o madre, entre otros; razón por la cual se solicita una pensión alimenticia en bienestar de los menores de edad, y una opción de solucionar dichos conflictos por falta de comunicación es la conciliación, donde mediante acuerdos mutuos y recíprocos que lleguen adoptar las partes, se pone fin al conflicto.

GRÁFICA Nº 03



FUENTE: *Elaboración Propia.*

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 03, podemos apreciar el porcentaje de los casos en general y los de pensión de alimentos recepcionados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, siendo los casos sobre pensión de alimentos 270 que equivale al 23,36% y los demás casos son 886 que equivale al 76,64%, lo que implica que los casos sobre pensión de alimentos representan un aproximado de la cuarta parte del total de casos recepcionados entre los años 2011 al 2013; siendo que los casos sobre pensión de alimentos amerita un gran número de beneficiarios que son entre menores y mayores de edad. Por tanto, el derecho alimentario es una necesidad urgente e indispensable para la subsistencia de los alimentistas. De igual forma, podemos señalar respecto a lo que abarca los alimentos, que se encuentra regulado en el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), en su artículo 472° dispone: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (...)”.

Por otro lado, según Chunga (s.f.), señala:

El tratadista Apancio Sánchez señala que alimentos son "Los recursos o asistencia que uno está obligado a proporcionar a otra, para que coma, se vista, tenga habitación y se cure sus enfermedades". Por su parte, Barbero sostiene que "El deber en determinadas circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la vida". Podemos decir entonces que los alimentos implican no solamente la palabra propiamente dicha, sino que abarca más allá del significado; en el sentido más extenso, es todo lo que nos ayuda a protegernos para poder vivir y desarrollarnos en forma digna. (p. 226)

En concordancia con la (Ley N° 27337, 2000), en el artículo 92° establece: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica, y recreación del niño o del adolescente. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto”.

2.4. CONCLUSIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS SOBRE ALIMENTOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 04

AÑO	MODO DE CONCLUSIÓN	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
2011	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	60	22.22%	80	29.63%
	Acta de Conciliación	20	7.41%		
2012	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	70	25.93%	110	40.74%
	Acta de Conciliación	40	14.81%		
2013	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	35	12.96%	80	29.63%
	Acta de Conciliación	45	16.67%		
TOTAL		270	100.00%	270	100.00%

Fuente: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: Según la Tabla N° 04, se logró obtener los datos respecto a los casos recepcionados y atendidos sobre pensión de alimentos en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, de los cuales podemos observar que en el año 2011 se recepcionaron 60 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia ya sea por la parte invitada o por ambas partes (solicitante e invitado), así como también en la celebración de un Acta de Compromiso donde se compromete la parte invitada a cambiar su comportamiento con la finalidad de llevar una armoniosa vida en común con la parte solicitante, o ya sea donde ambas partes se comprometen a vivir armoniosamente en bienestar de los menores de edad (hijos). Por otro lado, existe la cantidad de 20 casos que han

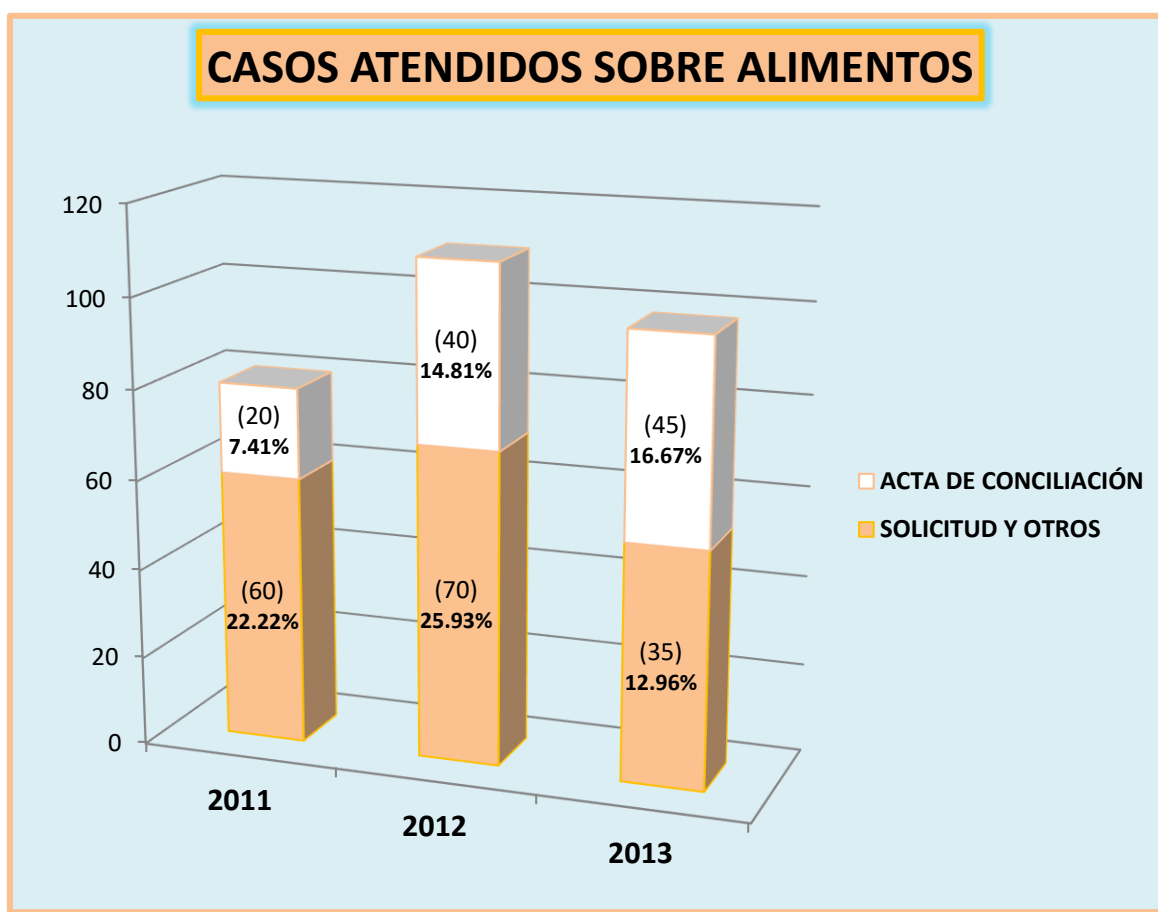
sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos adoptados entre ambas partes quienes concurrieron en forma voluntaria, para la solución pacífica del conflicto de intereses respecto a la pensión de alimentos, en la mayoría de los casos se determinó un monto fijo que será depositado en la Oficina de la DEMUNA como intermediario para la entrega de la pensión de alimentos a la parte solicitante; en algunos casos se incluyeron mudas de ropa, víveres y apoyo en los útiles escolares; así como también se incluye respecto al régimen de visitas y tenencia. En el año 2012 se recepcionaron 70 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia ya sea por la parte invitada o por ambas partes (solicitante e invitado), o bien en la celebración de un Acta de Compromiso, asimismo existe la cantidad de 40 casos que han sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos sobre la pensión de alimentos. En el año 2013 se recepcionaron 35 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia, o en la celebración de un Acta de Compromiso; asimismo existe la cantidad de 45 casos que han sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos sobre la pensión de alimentos.

Por otro lado, se tiene como materias conciliables en vía conciliación, alimentos, tenencia y régimen de visitas; asimismo las materias que se resuelven vía compromiso son reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial, normas de comportamiento, gestión administrativa específicas, las gestiones dirigidas a salvaguardar la vulneración de los siguientes derechos: a la identidad, a la educación, a la libertad personal y los otros derechos no citados.

Así, podemos señalar a (Díaz, 2013a) que afirma sobre el acta de conciliación: “Es el documento privado que expresa la manifestación de voluntad de las partes conciliantes. Debe contener una de las formas de conclusión señaladas en el artículo 15° de la Ley de conciliación. Solo se puede entregar copias certificadas de las actas a los conciliantes”. (p. 146)

Los beneficiados de los casos atendidos sobre pensión de alimentos son los alimentistas, mientras se cumplan los acuerdos plasmados en el Acta de Conciliación; en caso de incumplimiento conlleva al inicio de un proceso judicial de alimentos, insertando como medio probatorio el Acta de Conciliación celebrada en la DEMUNA, hecho que ocasiona una pérdida de tiempo, dinero y un desgaste emocional; en cambio si dicha Acta seria ejecutable, se recurre a la instancia correspondiente para exigir el cumplimiento de dichos acuerdos.

GRÁFICA N° 04



FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 04, podemos apreciar que en el año 2011 se recepcionaron 60 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia ya sea por la parte invitada o por ambas partes (solicitante e invitado), o bien en la celebración de un Acta de Compromiso lo que equivale al 22,22%; por otro lado, existe la cantidad

de 20 casos que han sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos sobre la pensión de alimentos, en la mayoría de los casos se determinó un monto fijo que será depositado en la Oficina de la DEMUNA como intermediario para la entrega de la pensión de alimentos a la parte solicitante, lo que equivale al 7,41%. En el año 2012 se recepcionaron 70 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia ya sea por la parte invitada o por ambas partes (solicitante e invitado), o bien en la celebración de un Acta de Compromiso lo que equivale al 25,93%; asimismo existe la cantidad de 40 casos que han sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos sobre la pensión de alimentos lo que equivale al 14,81%. En el año 2013 se recepcionaron 35 casos que tuvieron la conclusión de quedarse solo en la solicitud de audiencia de conciliación, en constancia de inasistencia, o en la celebración de un Acta de Compromiso lo que equivale al 12,96%; asimismo existe la cantidad de 45 casos que han sido atendidos y se efectuaron las respectivas Actas de Conciliación donde se plasmaron los acuerdos sobre la pensión de alimentos lo que equivale al 16,67%.

Ahora bien, en forma global se tiene un total de 270 casos exclusivamente sobre pensión de alimentos que han sido recepcionados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, de los cuales se desglosa que en el año 2011 se recepcionó 80 casos sobre pensión de alimentos que equivale al 29,63%. En el 2012 se recepcionó 110 casos que equivale al 40,74%; y en el 2013 se recepcionó 80 casos sobre pensión de alimentos que equivale el 29,63%. Siendo que hubo incidencia de mayor concurrencia en el año 2012; lo que conlleva a concluir que existe concurrencia de personas que afrontan problemas familiares y divergencias de criterios, recurren a la oficina de la DEMUNA con el fin de poder lograr acuerdos mutuos y el fortalecimiento de los lazos familiares, todo ello en beneficio de los alimentistas (hijos). Por otro lado, las ventajas de la Conciliación Extrajudicial, permite que mediante acuerdos voluntarios y mutuos entre las partes, que son plasmados en un Acta de Conciliación que tenga el valor de una sentencia judicial sin iniciar un proceso, más aun que los protagonistas de la

conciliación son las partes, sin la intervención de un Juez quien determinaría el fallo final; asimismo contribuye al descongestionamiento de la carga procesal del Poder Judicial, se ahorra tiempo, dinero y se evita el desgaste emocional.

Por ello, Díaz (2013b) hace referencia a:

La conciliación familiar es un procedimiento de cooperación en el cual un tercero imparcial con el propósito de ayudar a lograr la reorganización de la familia facilita el diálogo entre sus miembros a efectos de definir y resolver sus conflictos, a través de la toma de decisiones de sus propios protagonistas. (...) y en la actualidad la conciliación en asuntos de familia es considerada una materia facultativa (...). (p. 47)

2.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS (HIJOS MENORES Y MAYORES DE EDAD) DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA REGISTRADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI.

TABLA N° 05

AÑO	MODO DE CONCLUSIÓN	N° MENORES DE EDAD	N° MAYORES DE EDAD	%	CANTIDAD	%
2011	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	101	8	25.89%	144	34.20%
	Acta de Conciliación	32	3	8.31%		
2012	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	107	10	27.79%	170	40.38%
	Acta de Conciliación	52	1	12.59%		
2013	Solicitud, Constancia de Inasistencia, Acta de Compromiso, otros.	49	1	11.88%	107	25.42%
	Acta de Conciliación	57		13.54%		
TOTAL		398	23	100.00%	421	100.00%

FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: Conforme a la Tabla N° 05, podemos observar la cantidad por año de los beneficiarios de la pensión de alimentos, que han sido separados entre menores de edad y mayores de edad, con la finalidad de verificar la cantidad de menores de edad que requieren de los alimentos para su subsistencia y bienestar general, al igual que los mayores de edad que requieren de una pensión de alimentos para subsistir y más que todo para poder cursar estudios superiores. Asimismo, se han separado el modo de conclusión que son solicitud, constancia de inasistencia, acta de compromiso, otros; y las que se llegaron a efectuar Actas de Conciliación, con el fin de determinar cuantos han sido los beneficiarios y los que pudieron haber sido beneficiados si se hubieran celebrado las actas de conciliación.

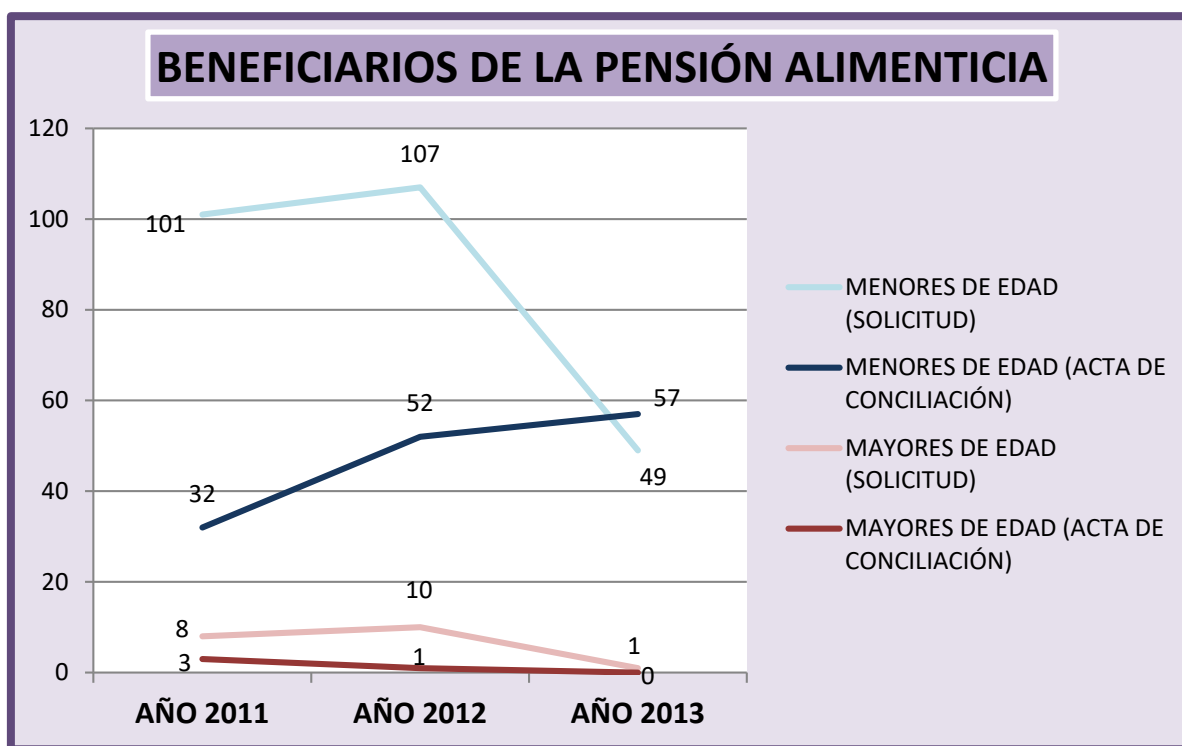
Ahora bien, al verificar la documentación de los casos sobre pensión de alimentos recepcionados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, se pudo observar que en el año 2011 se contabilizo un total de 144 entre menores y mayores de edad que equivale al 34,20%; en el año 2012 se contabilizo un total de 170 entre menores y mayores de edad que equivale el 40,38% y en el año 2013 se contabilizo un total de 107 entre menores y mayores de edad que equivale al 25,42%, lo que hacen una suma de 421 menores y mayores de edad. Por otro lado, podemos desglosar que en el año 2011 existe una cantidad de 101 menores de edad y 8 mayores de edad lo que equivale al 25,89% que no pudieron ser beneficiados, siendo que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación y menos aún se plasmaron acuerdos recíprocos en un Acta de Conciliación; asimismo en ese mismo año existe la cantidad de 32 menores de edad y 3 mayores de edad lo que equivale al 8,31% que han sido beneficiados, ya que se llevó a cabo la audiencia y se logró acuerdos mutuos que han sido plasmados en las actas de conciliación respectivamente. En el año 2012 existe una cantidad de 107 menores de edad y 10 mayores de edad lo que equivale al 27,79% que no pudieron ser beneficiados, siendo que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación y menos aún se efectuó un Acta de Conciliación; asimismo en ese mismo año existe la cantidad de 52 menores de edad y 1 mayor de edad lo que equivale al 12,59% que han sido beneficiados ya que se llevó a

cabo la audiencia y se logró acuerdos mutuos que han sido plasmados en las actas de conciliación respectivamente. En el año 2013 existe una cantidad de 49 menores de edad y 1 mayor de edad lo que equivale al 11,88% que no pudieron ser beneficiados, siendo que no se llevó a cabo la audiencia de conciliación y menos aún se efectuó un Acta de Conciliación; asimismo en ese mismo año existe la cantidad de 57 menores de edad solamente, lo que equivale el 13,54% que han sido beneficiados ya que se llevó a cabo la audiencia y se logró acuerdos mutuos que han sido plasmados en las actas de conciliación respectivamente.

Por otro lado, conforme a la (Ley N° 26872, 1997) modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, en el artículo 16° dispone: “(...) La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales a), b), f), j) y k) del presente artículo no enervan la validez del Acta, en cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15. La omisión en el Acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), g), h), e i) del presente artículo, dará lugar a la nulidad documental del Acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16-A. (...)”.

En conclusión, los menores y mayores de edad serían los más beneficiados si dichas actas de conciliación pudieran ser ejecutables, en la instancia correspondiente ante su incumplimiento y así evitar un desgaste emocional, inversión de tiempo y dinero; ya que los conflictos de intereses estarían solucionados mediante acuerdos mutuos entre las partes conciliantes.

GRÁFICA N° 05



FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: Conforme a la Gráfica N° 05, podemos observar la cantidad por año de los beneficiarios de la pensión de alimentos, que han sido separados entre menores de edad y mayores de edad; asimismo, han sido separados de acuerdo al modo de conclusión, con el fin de determinar cuántos alimentistas han sido beneficiados y cuantos han podido ser beneficiados. Al verificar la documentación de los casos sobre pensión de alimentos recepcionados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, se logró observar que el número global de los menores de edad son 398 y mayores de edad son 23, entre los años 2011 al 2013. Por otro lado, también podemos observar que en el año 2011 existen 144 menores y mayores de edad como beneficiarios y podrían haber sido beneficiarios según el modo de conclusión. En el año 2012 existen 170 menores y mayores de edad beneficiarios y que podrían haber sido considerados beneficiados. En el año 2013 existen 107 menores y mayores de edad que son beneficiados y podrían haber sido beneficiarios. Y en forma global suman la cantidad de 421 que son menores y mayores de edad.

De igual forma, podemos observar que entre uno y otro año, existe una variabilidad de beneficiarios entre menores y mayores de edad, siendo que existen más menores de edad que son y pudieron ser beneficiarios de la pensión de alimentos, si se hubieran llegado a plasmar los acuerdos voluntarios en las actas de conciliación; por tanto es indispensable y necesario salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes con respecto al derecho alimentario, si dichas actas serian ejecutables beneficiaria más a los alimentistas, a razón de que ya no sería necesario el inicio de un proceso judicial de alimentos, evitándose el desgaste emocional, la pérdida de tiempo y dinero; y el Acta de Conciliación sería una gran solución al conflicto de intereses de las partes conciliantes.

Es por ello, que la DEMUNA cumple una función importante y más aún en lugares donde no se encuentran instalados y funcionen Centros de Conciliación, donde la población podría recurrir a efectos de solucionar sus conflictos de forma pacífica, y como pudimos observar en la ciudad de Ayaviri que es capital de la Provincia de Melgar, del Departamento de Puno, no cuentan con Centros de Conciliación Autorizados que funcionen en dicha ciudad; es por ello, que beneficiaría a toda la población y a los distritos cercanos de dicha Provincia, si la DEMUNA obtuviera la autorización respectiva para tener la facultad otorgada por la Ley N° 27007, y las Actas de Conciliación que efectuó dicha Oficina respecto a la pensión de alimentos sean ejecutables. El Título de Ejecución significa que las Actas de Conciliación tienen el mismo valor que una sentencia judicial; es decir, que los compromisos establecidos en el Acta deben ser obligatoriamente cumplidos por las partes, en caso de incumplimiento éste dará lugar a su exigencia ante el Poder Judicial.

Ahora bien, ante el incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007, genera la ineficacia del Acta de Conciliación, lo que ocasiona la limitación de derecho alimentario que tiene el alimentista, ya que el acta no podría ser ejecutada en la instancia correspondiente, ello conllevaría al inicio de un proceso judicial de alimentos, optando por aplazar el goce y disfrute del

derecho a los alimentos que es indispensable para la subsistencia y el desarrollo integral del menor de edad.

2.6. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PLASMADOS EN LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN CONFORME A LOS APORTES DE PENSIONES POR INTERMEDIO DE LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI.

TABLA N° 06

MESES \ AÑO	2011 (20-AC)	2012 (40-AC)	2013 (45-AC)
Enero	19	<u>22</u>	35
Febrero	18	23	25
Marzo	17	26	35
Abril	18	26	<u>39</u>
Mayo	14	<u>31</u>	33
Junio	14	29	36
Julio	14	24	35
Agosto	<u>10</u>	23	38
Setiembre	19	28	36
Octubre	19	27	36
Noviembre	18	27	31
Diciembre	<u>20</u>	28	<u>21</u>

FUENTE: *Elaboración Propia.*

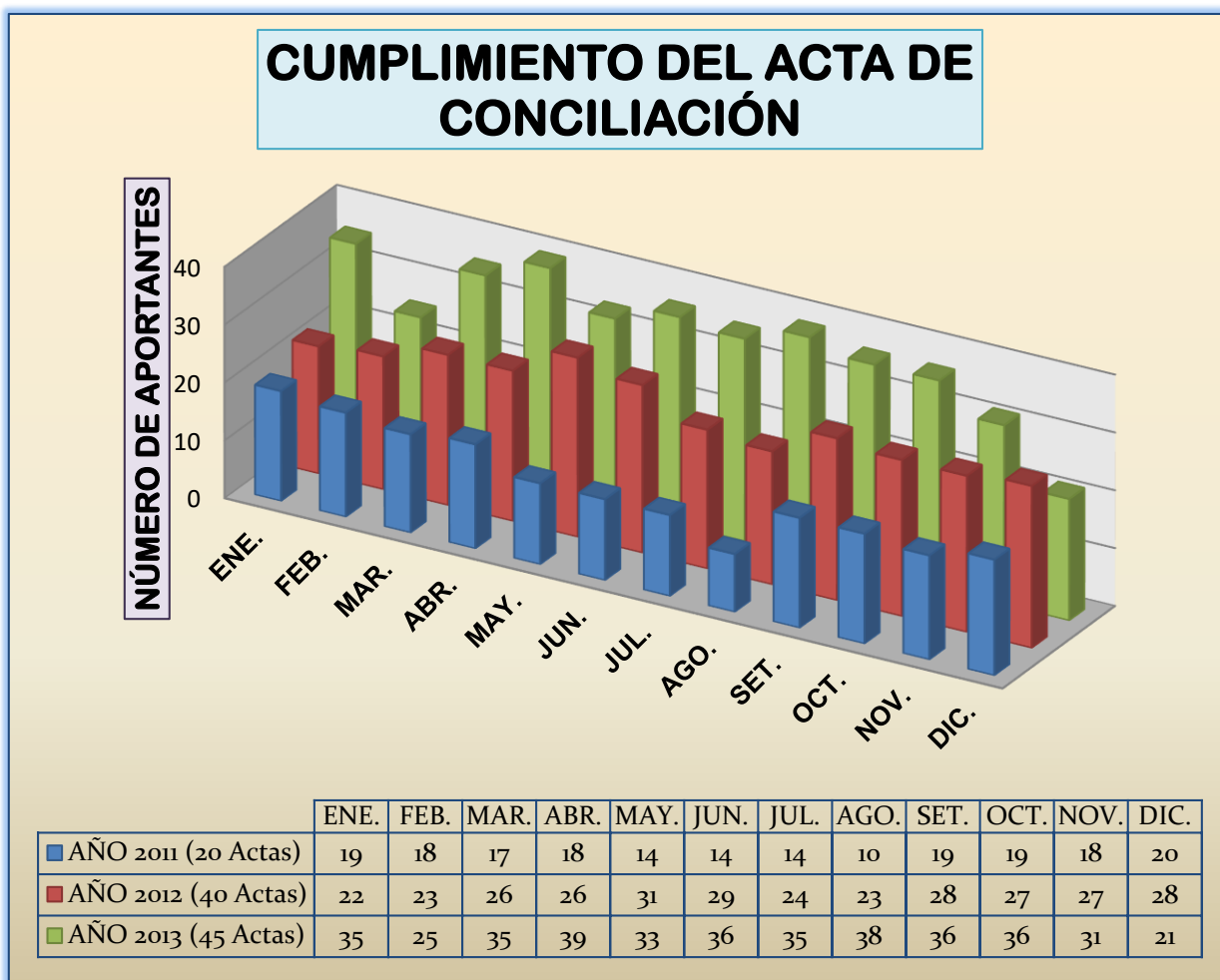
INTERPRETACIÓN: Según la Tabla N° 06, se obtuvo los datos conforme a un libro de depósitos de pensiones alimenticias registrados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, y conforme a las Actas de Conciliación celebradas; es así que se contabilizó por cada mes el número de aportantes, es decir quienes vienen cumpliendo o no con lo acordado en el Acta de Conciliación sobre pensión de alimentos. Como podemos observar en el año

2011 en el mes de diciembre han sido 20 las personas que han efectuado el depósito correspondiente, y en el mes de agosto ha disminuido siendo 10 las personas que aportaron y en los demás meses han ido variando su cumplimiento. En el año 2012 en el mes de mayo han sido 31 personas que han cumplido con el depósito correspondiente, en el mes de enero se observa una disminución de aportantes siendo 22 personas y en los demás meses han ido variando su cumplimiento. En el año 2013 en el mes de abril llegaron aportar 39 personas, en el mes de diciembre los aportes disminuyeron siendo 21 personas y en los demás meses han ido variando su cumplimiento respectivamente.

Por otro lado, las formalidades que señala la Ley N° 27007, son restrictivas en el sentido que al efectuar las actas de conciliación lo debe realizar el conciliador capacitado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y uno de los requisitos para dicha capacitación es que se encuentren laborando en una Defensoría del Niño y Adolescente (DNA), restringiendo a las demás personas interesadas para efectuar dicha capacitación; tomando en cuenta que las DEMUNA a nivel nacional en la mayoría de los casos se encuentran funcionando en las Municipalidades, y por ende no laboran permanentemente, tienden a cambiar de personal las razones son diversas, y al no existir permanencia se debería de ampliar este requisito y capacitar a las personas interesadas que tengan aptitudes y que deseen laborar dentro de una Defensoría del Niño y del Adolescente, contrario sensu se debería ampliar las facultades de quienes están aptos para conciliar, integrando a los Conciliadores Extrajudiciales con especialización en familia quienes cumplen la misma función de realizar conciliaciones y se encuentran debidamente capacitados, ya que el Ministerio de Justicia a través de los Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores debidamente autorizados, realizan cursos de conciliación sin ningún tipo de restricción, siendo que cualquier persona que se encuentra interesada en realizar la función conciliadora realiza el curso; todo ello en razón de que las Actas de Conciliación que se efectúan en las Defensorías del Niño y del Adolescente, deben de cumplir los mismos requisitos que un Acta que lo efectúa un Conciliador Extrajudicial.

Esta restricción, ocasiona la vulneración y transgresión del Derecho Alimentario, al tener que aplazar el goce y disfrute de dicho derecho, y ante el incumplimiento de las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA que no tiene la autorización correspondiente, se tenga que iniciar un proceso judicial de alimentos insertando como medio probatorio el Acta de Conciliación, ya que dichas Actas carecen de todas las formalidades previstas en la Ley N° 27007 y su reglamento Decreto Supremo N° 06-99-PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES.

GRÁFICA N° 06



FUENTE: *Elaboración Propia*

INTERPRETACIÓN: Según la Gráfica N° 06, se obtuvo los datos conforme a un libro de depósitos de pensiones alimenticias registrados en la Oficina de la

DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, y de acuerdo a las Actas de Conciliación celebradas, se contabilizo por cada mes el número de aportantes, es decir quienes vienen cumpliendo o no con los acuerdos plasmados en las Actas de Conciliación sobre pensión de alimentos. Por ello, podemos apreciar la variabilidad de aportaciones de los obligados respecto a las actas de conciliación celebradas en la Oficina de la DEMUNA, siendo que existen meses donde los obligados vienen cumpliendo su obligación y también existen meses que no lo hacen; y los perjudicados vendrían a ser los alimentistas ya que a la falta de cumplimiento de la pensión alimenticia no podrían cubrir sus necesidades y se estaría poniendo en peligro el derecho a la vida, por ello sería muy necesario que la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar solicite la autorización para poder tener la facultad de realizar actas de conciliación con título de ejecución y evitar un desgaste emocional, la pérdida de tiempo y dinero, siendo que solo tendría valor de medio probatorio el acta de conciliación celebrada, para el inicio del proceso judicial de alimentos en la vía correspondiente. Dicha variabilidad de aportaciones, se debe a que los obligados tienen conocimiento que las actas de conciliación celebradas en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, no tienen el valor de título de ejecución; o ya sea por razones de que no cuentan con las posibilidades económicas; o porque simplemente no quieren cumplir con su obligación. Dicho incumplimiento vulnera y transgrede el derecho alimentario de los beneficiarios que vendrían a ser los menores y mayores de edad, de los cuales se logró concretar acuerdos mutuos que han sido plasmados en un acta de conciliación.

Ahora bien, los depósitos son de forma mensual, como podemos observar en el año 2011 en el mes de diciembre han sido 20 las personas que han efectuado el depósito correspondiente, en el mes de agosto ha disminuido siendo 10 las personas que aportaron y en los demás meses han ido variando su cumplimiento; cabe señalar que son 20 las actas de conciliación celebradas sobre pensión de alimentos, por ello se cumplió solo en el mes de diciembre con el depósito del total de actas celebradas. En el año 2012 en el mes de mayo han sido 31 las personas que han cumplido con el depósito correspondiente, en el mes de enero se observa

una disminución de aportantes siendo 22 personas y en los demás meses han ido variando su cumplimiento; cabe indicar que se celebraron un total de 40 actas de conciliación sobre pensión de alimentos, de los cuales en el mes de mayo fue el mayor aporte, mas no se cumplió con el aporte total. En el año 2013 en el mes de abril llegaron aportar 39 personas, en el mes de diciembre los aportes disminuyeron a 21 personas y en los demás meses han ido variando su cumplimiento, siendo que son 45 las actas de conciliación celebradas, de los cuales en el mes de abril se logra un mayor aporte, aun así existe incumplimiento de los aportantes.

2.7. MÁXIMOS Y MÍNIMOS APORTES DE LOS AÑOS 2011 AL 2013 DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE ACUERDO A LAS ACTAS DE CONCILIACION CELEBRADAS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI.

TABLA N° 07

AÑO	MÁXIMO APORTE		MÍNIMO APORTE	
	MES	N° APORTANTES	MES	N° APORTANTES
2011 (20 Actas)	Diciembre	20	Agosto	10
2012 (40 Actas)	Mayo	31	Enero	22
2013 (45 Actas)	Abril	39	Diciembre	21

FUENTE: *Elaboración Propia.*

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 07, podemos apreciar el máximo y mínimo aporte que efectuaron los obligados conforme al año y al mes; siendo que en el año 2011 se tiene el máximo aporte en el mes de diciembre, siendo 20 el número

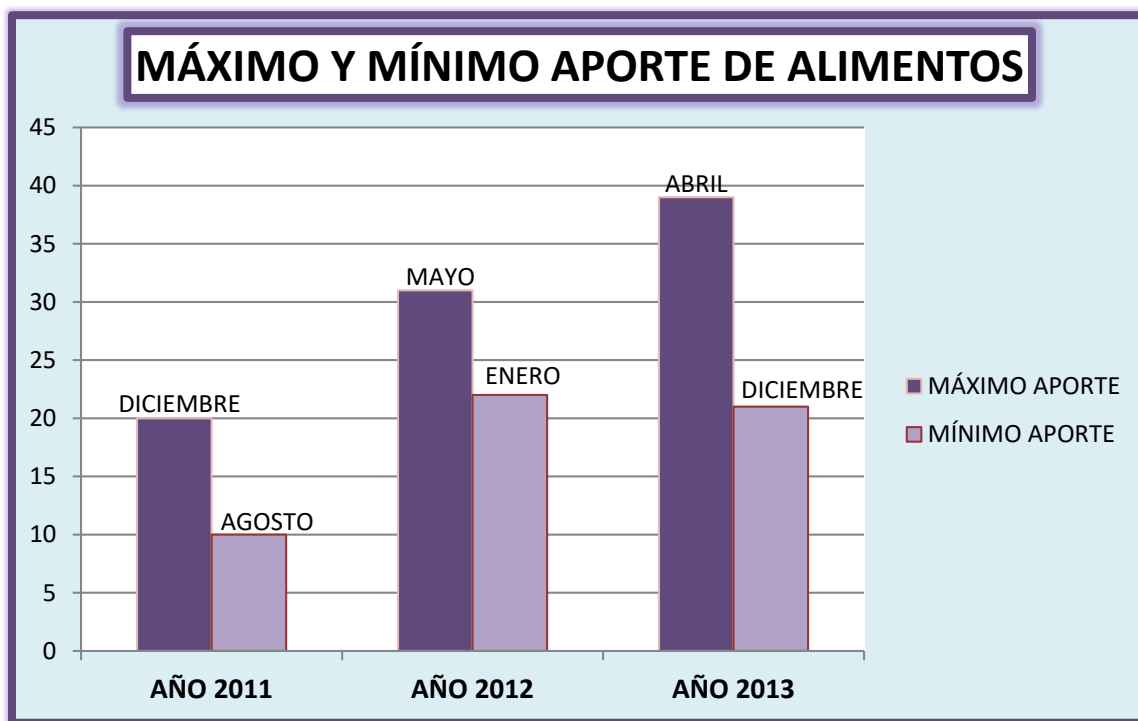
de aportantes, es decir de las 20 actas de conciliación celebradas se tiene que todos los obligados cumplieron con el aporte de la pensión de alimentos; por otro lado, el mínimo aporte se dio en el mes de agosto siendo solo 10 los aportantes, lo que representa la mitad de los obligados. Ahora bien, en el año 2012 el máximo aporte se dio en el mes de mayo con 31 aportantes, siendo que existen 40 actas de conciliación celebradas lo que representa más de la mitad de obligados que cumplieron con la pensión de alimentos, y el mínimo aporte se tiene en el mes de enero con 22 aportantes considerándose que es también más de la mitad de los obligados. En el año 2013 el máximo aporte se dio en el mes de abril con 39 aportantes, siendo que existen 45 actas de conciliación celebradas lo que representa más de la mitad de obligados que cumplieron con la pensión de alimentos, y el mínimo aporte se tiene en el mes de diciembre con 21 aportantes lo que representa menos de la mitad de los obligados. Por tanto, ante la existencia de una variabilidad entre mes a mes, se concluye que los obligados no cumplen al 100% con lo acordado en las actas de conciliación celebradas en la oficina de la DEMUNA.

Ante ello, cabe señalar que, la Conciliación Extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que tiene la finalidad de solucionar conflictos de forma pacífica, mediante acuerdos voluntarios y mutuos que son plasmados en un Acta de Conciliación, y ante su incumplimiento ameritan la exigencia de dichos acuerdos en la instancia correspondiente.

Así detalla, Medina (s.f.), al respecto sobre la Conciliación:

Con la conciliación no solo solucionas tú mismo tus conflictos, con ganancias para ti y para la otra parte, sino ahorras tiempo y dinero que te demandaría un largo y tedioso proceso judicial (la parte vencida paga las costas y costos del proceso judicial), restableces tus relaciones con la otra parte, resguardas tu imagen personal, comercial o familiar, en razón que se desarrolla en un clima de absoluta confidencialidad y la solución es más propensa a cumplirse en relación a una sentencia, porque es creada por ti y por la otra parte. (p. 1)

GRÁFICA N° 07



FUENTE: *Elaboración Propia.*

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 07, podemos apreciar el máximo y mínimo de los aportes que realizaron los obligados, de acuerdo a cada mes y año; es así, que observamos que en el año 2011 en el mes de diciembre, se efectuó el máximo aporte con una cantidad de 20 aportantes, de las 20 actas de conciliación que se llevaron a cabo en la Oficina de la DEMUNA, lo que equivale al 100% del cumplimiento de las actas de conciliación sobre pensión de alimentos; por otro lado, el mínimo aporte se da en el mes de agosto con una cantidad de 10 aportantes, lo que vendría a ser el 50% del total de aportantes. Ahora bien, en el año 2012, el máximo aporte es el mes de mayo, con una cantidad de 31 aportantes, de 40 actas de conciliación celebradas en la Oficina de la DEMUNA, lo que equivale al 77.5% del cumplimiento de las actas de conciliación sobre pensión de alimentos; y el mínimo aporte se da en el mes de enero, con una cantidad de 22 aportantes, siendo considerado el 55% del total de aportantes. En el año 2013, el máximo aporte es en el mes de abril con una cantidad de 39 aportantes, de las 45 actas de conciliación celebradas en la Oficina de la DEMUNA, lo que vendría a ser el 86.6 % del cumplimiento de las actas de conciliación sobre pensión de

alimentos; y el mínimo aporte es en el mes de diciembre con una cantidad de 21 aportantes, lo que vendría el 46.6 % del total de aportantes.

Ante ello, existe una variabilidad del cumplimiento de las actas de conciliación sobre pensión de alimentos celebradas en la Oficina de la DEMUNA, siendo que no cumplen con el 100% de lo acordado y plasmado en el acta de conciliación, caso similar ocurre en las sentencias judiciales sobre alimentos, la diferencia es que a razón de las sentencias se pueden hacer liquidaciones y exigir su cumplimiento; lo que no sucede con las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA, ante su incumplimiento solo pueden ser materia de medio probatorio para el inicio de un proceso judicial de alimentos. Por tanto, es importante y necesario que la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar cuente con la autorización respectiva, para que pueda celebrar actas de conciliación con título de ejecución.

Conforme al informe de la Defensoría del Pueblo (2013):

Precisó que dicho estudio, elaborado con el apoyo de Save the Children, fue realizado entre los meses de setiembre y octubre del año 2012, tras una supervisión a 48 Demuna, ubicadas en 9 regiones del país. Entre los resultados, Ramos comentó que el 85% de las Demunas supervisadas prestan servicios de conciliación y el 68% entrega actas de conciliación sin título de ejecución; lo que no posibilita que dicho documento pueda ser utilizado en un proceso judicial. Ello podría obedecer a que no cuentan con la habilitación establecida en la ley N° 27007. (...) debido a dicha problemática, recomendó a las autoridades municipales de todo el país asignar y ejecutar el presupuesto necesario para que la Demuna cuente con la infraestructura adecuada así como los servicios públicos y materiales básicos para la atención del servicio. Asimismo, solicito a las referidas autoridades ediles, que en su calidad de entidades promotores de la Demuna, realicen los trámites conducentes a lograr que estas puedan expedir actas de conciliación con título de ejecución (...).

2.8. NÚMERO DE BENEFICIARIOS SEGÚN EL MODO DE CONCLUSIÓN REGISTRADOS EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – AYAVIRI

TABLA N° 08

AÑO	SOLICITUD Y OTROS	ACTA DE CONCILIACIÓN	SUB TOTAL
2011	109	35	144
2012	117	53	170
2013	50	57	107
TOTAL	276	145	421

FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N° 08, podemos apreciar la variabilidad del número de beneficiarios y los que pudieron haber sido beneficiados con la pensión alimenticia entre los años 2011 al 2013, registrados en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar; siendo que en el 2011 se tiene un total de 144 entre menores y mayores de edad, en el año 2012 se tiene un total de 170 menores y mayores de edad, y en el año 2013 se tiene un total de 107 menores y mayores de edad. Asimismo, existe un total de 276 menores y mayores de edad, que no pudieron ser beneficiados, porque no se llevó a cabo la celebración de un Acta de Conciliación sobre pensión de alimentos; y existe la cantidad de 145 menores y mayores de edad, que si han sido beneficiados con la celebración de un Acta de Conciliación, en razón de que, se tomaron acuerdos mutuos respecto a la pensión alimenticia. Teniendo así, un total de 421 menores y mayores de edad que son y pudieron beneficiarse con los acuerdos plasmados en el Acta de

Conciliación sobre pensión de alimentos, celebradas en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar.

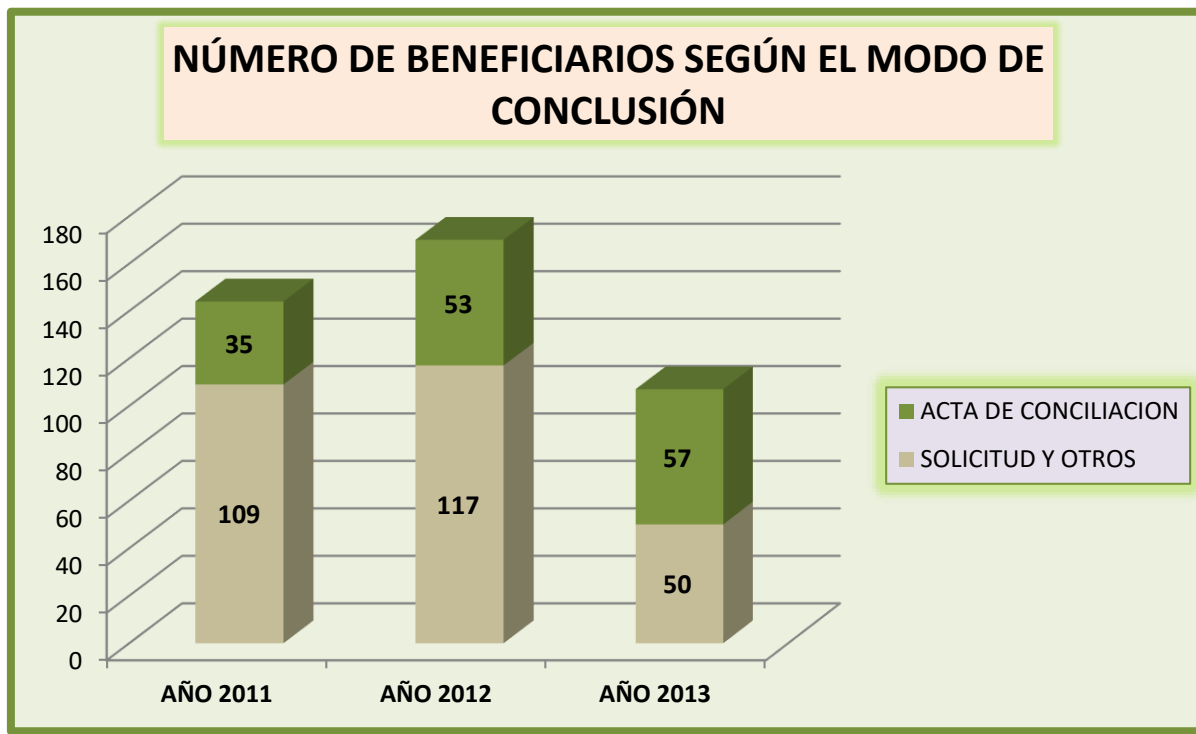
Por otro lado, si la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, contara con la autorización conforme a la facultad otorgada a las Defensorías del Niño y del Adolescente prevista en la Ley N° 27007, habría más concurrencia de personas y las Actas de Conciliación tendrían el valor de Título de Ejecución. Sin embargo, no cuenta con dicha autorización y las actas de conciliación celebradas solo tienen valor probatorio para el inicio del proceso judicial de alimentos. Ante ello, es necesario precisar la gran importancia del derecho alimentario, que se encuentra tipificado y regulado en nuestra Carta Magna, por tanto merece ser respetado y protegido, a través de los instrumentos jurídicos; asimismo, se encuentra previsto en los tratados internacionales que forman parte del derecho nacional, si éstos han sido aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República; y dichos tratados merecen ser respetados y deben ser cumplidos, evitando su vulneración o transgresión.

Es por esta razón que Varsi (2012), es de la opinión que:

La importancia del derecho alimentario es cubrir un estado de necesidad de quien lo solicita por ser un derecho vital (...). No solo se refiere al sustento -no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4-, también comprende habitación, vestido, asistencia médica y, dependiendo de la edad del alimentista. Incluirá la educación y esparcimiento como parte importante de la atención integral del niño y adolescente. (p. 418)

Es así, que al limitar el derecho alimentario, siendo un derecho inherente e indispensable para el alimentista, conlleva al menoscabo de este derecho y afectaría directamente al derecho a la vida, ante ello es necesario contar con los instrumentos jurídicos necesarios para poder evitar esta transgresión, y aplicar el principio del interés superior del niño, a efectos de salvaguardar sus derechos y hacer efectivo el respeto de los mismos.

GRÁFICA N° 08



FUENTE: Elaboración Propia.

INTERPRETACIÓN: En la Gráfica N° 08, podemos apreciar el número de beneficiarios y no beneficiados según el modo de conclusión, es decir los menores y mayores de edad que han sido beneficiados y los que pudieron haber sido beneficiados con el acta de conciliación sobre pensión de alimentos; así observamos que en el año 2011, se tiene un total de 35 menores y mayores de edad beneficiados con el acta de conciliación y una cantidad de 109 los que pudieron ser beneficiados, pero no se llegó a celebrar un acta de conciliación, por diferentes razones como la insistencia de una de las partes y/o de ambas partes, en la mayoría de los casos. En el año 2012, se tiene un total de 53 menores y mayores de edad beneficiados con el acta de conciliación, y una cantidad de 117 los que pudieron ser beneficiados, pero no lo son ya que no se pudo celebrar el acta de conciliación. En el 2013, se tiene un total de 57 menores y mayores beneficiados con el acta de conciliación, y una cantidad de 50 los que pudieron ser beneficiados, y no lo son porque no se celebró el acta de conciliación.

Existiendo una variabilidad de uno y otro año, sin embargo supera la cantidad de los que no son beneficiados con la pensión de alimentos, ya que no se logró celebrar el acta de conciliación donde se plasmarían acuerdos respecto a la pensión de alimentos, a causa de la inasistencia de una y/o ambas partes a la audiencia de conciliación; siendo perjudicial para los menores y mayores de edad que solicitan una pensión de alimentos, con la finalidad de cubrir sus necesidades básicas y tengan un bienestar general, lo que conlleva a concluir que mientras no se cuente con la autorización respectiva, exista menos concurrencia a la oficina de la DEMUNA, ya que dichas actas de conciliación no ameritan tener el valor de una sentencia judicial, y ante el incumplimiento estas puedan ser exigidas ante la instancia correspondiente. Conforme al (Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, 2004), en el artículo 28A establece: “El Ministerio es la Entidad Responsable de otorgar la acreditación oficial para que un Defensor pueda realizar conciliaciones extrajudiciales cuyas actas tengan título de ejecución en las DNA autorizadas para tal efecto, en el marco de la Ley N° 27007 (...)”. Lo que implica que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) son los encargados de capacitar a los Defensores para poder ser conciliadores en las Defensorías del Niño y del Adolescente, contrario sensu cumplen la misma función de un Conciliador Extrajudicial especializado en Familia que está debidamente capacitado, se debería de dar mayor facultad a dichos conciliadores, solo en el sentido de que los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia puedan ejercer la función conciliadora excepcionalmente en las Defensorías del Niño y del Adolescente, al encontrarse capacitados para dicha función conciliadora en temas de familia, para que las Defensorías del Niño y del Adolescente puedan realizar dichas conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, beneficiando a gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos, más aun tratándose de acuerdos voluntarios y mutuos. Sin desmerecer a las capacitaciones dadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, siendo muy indispensables para que los defensores y conciliadores puedan ejercer las funciones encomendadas adecuadamente y de forma eficiente, todo ello en favor del resguardo y defensa de los derechos del niño, niña y adolescente.

SÍNTESIS ENCUESTA FORMULADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – PUNO

Conforme al formulario de preguntas dadas al personal, se obtuvo los datos respecto al conocimiento de la Ley N° 27007, la importancia de la validez de las Actas de Conciliación, las dificultades y limitaciones que afronta la oficina de la DEMUNA, entre otros. De los cuales plasmare las interrogantes y las respuestas que se obtuvieron, siendo que son cuatro (04) personas que laboran en dicha oficina y tienen diferentes funciones dentro de la misma. Lo detallare de la siguiente manera conforme a las interrogantes propuestas y vertidas:

- Para usted es importante el respeto del Derecho Constitucional a los Alimentos en los menores de edad, ¿Por qué?

En forma unánime las respuestas han sido que si es muy importante y fundamental por ser un derecho constitucional que tienen los menores de edad, y que se encuentran tipificadas en nuestra Carta Magna, así como en el Código Civil y en el Código de los Niños y Adolescentes.

- De los casos atendidos en la Oficina de la DEMUNA sobre alimentos cuántos son mensualmente, mencione un aproximado.

Las respuestas dadas fueron entre un aproximado de 10 a 15 casos a más.

- Cuantos casos de incumplimiento de las Actas de Conciliación sobre alimentos celebradas en la DEMUNA se dan mensual y/o anual, mencione un aproximado.

Las respuestas dadas fueron un aproximado de 30 a 40 casos al año no se vienen cumpliendo con lo acordado en las Actas de Conciliación celebradas en la Oficina de la DEMUNA.

- Considera usted que es indispensable y necesario la función que cumple la DEMUNA, ¿Cómo repercute en la sociedad?

Las respuestas fueron que consideran que es indispensable y necesario, porque favorece a las personas que no cuentan con recursos económicos y al efectuarse las Actas de Compromiso y/o Conciliación se dan de manera eficaz ya que se ahorra tiempo.

- Conoce usted referente a la facultad que se les otorga a las Defensorías del Niño y del Adolescente a través de la Ley N° 27007, ¿Qué opinión tiene al respecto?

Por las respuestas dadas se presume que tienen ambiguo conocimiento de la Ley N° 27007, agregando que se debería de tomar mayor importancia e interés respecto a la capacitación de conciliadores, indicando que deben de haber más conciliadores.

-Cuál es su opinión respecto a la validez del Acta de Conciliación celebradas en la DEMUNA actualmente, ¿Son ejecutables?

De las respuestas dadas indican que no son ejecutables las Actas de Conciliación, siendo solo válidas como medio probatorio para el inicio de un proceso judicial; indicando que serían ejecutables si las Actas serían celebradas por un conciliador que tenga registro para serlo e indican que no hay abogados conciliadores en dicha Oficina.

- Considera usted que es importante que las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA tenga el valor de sentencia y puedan ser ejecutadas judicialmente, conforme al artículo 2° de la Ley N° 27007. ¿Por qué?

De las respuestas dadas indican que si es importante que las Actas de Conciliación tengan dicho valor de sentencia, y si así fuese habría más casos en la Oficina, es decir habría más concurrencia de personas.

- En la actualidad cuales son las dificultades y limitaciones que afronta la DEMUNA en el desempeño de sus funciones.

De las respuestas dadas señalan que las dificultades que afronta la Oficina, es la falta de presupuesto, material logístico, servicios informáticos (internet), infraestructura.

*** Si desea agregar algo respecto al tema:** De las respuestas dadas indicaron que a pesar de las limitaciones que afrontan se encuentran a gusto laborando en el área, por el servicio social que brindan en el desempeño de sus funciones y que es importante la existencia de la Oficina de la DEMUNA.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Derecho Alimentario, tiene una connotación constitucional y se encuentra previsto en el Artículo 6°, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado que establece: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”. Es así, que el respeto y protección de este derecho es primordial y vital, y al existir una vulneración o menoscabo de este derecho, acarrea consecuencias como el perjuicio del derecho a la vida y la dignidad humana del alimentista, al verse afectado con la privación del derecho a los alimentos.

SEGUNDA.- Respecto a las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, establece que se debe de cumplir con lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley de Conciliación; asimismo, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, Reglamento de la Ley N° 27007; en el artículo 19° establece: *“El Acta de Conciliación debe contener lo siguiente: (...) 3. Nombres, documento de identidad y número de la credencial del Conciliador de la DNA, otorgada por el Ministerio. (...) 6. Firma y huella digital del Conciliador de la DNA y de las partes (...)”*; en concordancia con el Artículo 28° que señala: *“Los requisitos para ser acreditado como Conciliador de la Defensoría del Niño y el Adolescente son los siguientes: (...) 2.- Ser miembro de la DNA (...)”*. Y en el artículo 28 A dispone: *“El Ministerio es la Entidad Responsable de otorgar la acreditación oficial para que un Defensor pueda realizar conciliaciones extrajudiciales cuyas actas tengan título de ejecución en las DNA autorizadas para tal efecto, en el marco de la Ley N° 27007. (...)”*. Ante ello, considero que dichas formalidades son restrictivas, en el sentido que, se tiene que acreditar ser miembro de la DEMUNA para poder ser capacitado y obtener la acreditación de conciliador, restringiendo a los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia debidamente capacitados, quienes cumplen la misma función conciliadora. Esta restricción ocasiona la vulneración y transgresión del derecho alimentario, en razón de que, dichas Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA carecen de todas las formalidades previstas en la Ley N° 27007 y su Reglamento, por ello no tienen el valor de Título de Ejecución.

TERCERA.- La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, cumple funciones esenciales en el resguardo de los derechos del niño y del adolescente, sin embargo enfrenta dificultades y limitaciones,

como la falta de infraestructura adecuada, falta de material logístico, existen cambios de personal cada cierto tiempo y no están debidamente capacitados para desempeñar sus funciones de forma eficiente y brindar un servicio adecuado a toda la población, y más aún, que no existen conciliadores acreditados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Siendo ésta, una de las causas que vulneran el Derecho Alimentario, en el sentido que dichas falencias ocasiona que no se cumpla con los requisitos para poder obtener la autorización que faculta la Ley N° 27007 a las Defensorías del Niño y del Adolescente. Por otro lado, otra de las causas es que existe una diferenciación entre conciliadores, es decir que para obtener la acreditación como conciliador de una Defensoría del Niño y del Adolescente, se rige a un conducto restrictivo, como el acreditar ser miembro de una Defensoría del Niño y del Adolescente; siendo que cumple la misma función conciliadora que un conciliador extrajudicial con especialización en familia debidamente acreditado.

CUARTA.- Con referente a la Ley N° 27007 y conforme a su Reglamento dado por el Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES, en el artículo 19° referente a los requisitos, establece: “El Acta de Conciliación debe contener lo siguiente: 1. Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. 2. Nombres, documento de identificación y domicilio de las partes. 3. Nombres, documento de identidad y número de la credencial del Conciliador de la DNA, otorgada por el Ministerio. 4. Materias a conciliar y descripción de las controversias. 5. El acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, estableciendo de manera precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, o en su caso la falta de acuerdo o las inasistencia de las partes a la audiencia (...). 6. Firma y huella digital del Conciliador de la DNA y de las partes o sus representantes, de ser el caso. En caso de las personas que no saben firmar, bastará su huella digital. 7. Cláusula de seguimiento. 8. Nombre y firma del abogado que verifica la legalidad de los acuerdos adoptados (...).” Es por ello, que ante el incumplimiento de éstos requisitos, ocasiona la ineficacia del Acta de Conciliación, al no tener el valor de Título de Ejecución, siendo considerado solo como medio probatorio para el inicio del proceso judicial de alimentos.

SUGERENCIAS

PRIMERA.- Al ser el Derecho Alimentario un derecho constitucional, que tiene relevancia jurídica y es indispensable, se debe evitar su vulneración porque ocasiona un perjuicio al alimentista, quien se encuentra en plena etapa de crecimiento y desarrollo; y por tener una relación directa con el derecho a la vida. Por ello, es necesaria la aplicación permanente del principio del interés superior del niño, así como contar con instrumentos jurídicos relacionados al derecho alimentario, que estén acorde a nuestra realidad actual, y que permitan el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes, a quienes se les considera personas vulnerables y requieren del derecho a los alimentos.

SEGUNDA.- Con relación a las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, considero que son muy restrictivas, y por ende no debe existir diferenciación entre conciliadores, más aún porque cumplen la misma función conciliadora, y están debidamente capacitados y acreditados, en ese entender se debe modificar el artículo 2° de la Ley N° 27007, en el sentido que se debe ampliar la facultad para los conciliadores, integrándose excepcionalmente al conciliador extrajudicial con especialización en familia para que pueda ejercer la función conciliadora en una Defensoría del Niño y del Adolescente, con la finalidad de evitar el aplazamiento del goce y disfrute del derecho alimentario, mediante las actas de conciliación sobre pensión de alimentos, celebrados en la DEMUNA. Asimismo, evitar la ineficacia del Acta de Conciliación, por incumplimiento de las formalidades previstas en la Ley N° 27007.

TERCERA.- Respecto a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA, que cumplen funciones de protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, enfrenta diversas dificultades y limitaciones, que deben ser atendidas de forma adecuada, como brindándole una infraestructura idónea, otorgándosele presupuesto que requiere para el desempeño de sus funciones en la promoción de los derechos fundamentales, es decir en la realización de charlas, orientación, difusión y asesoramiento, entre otros; asimismo contar con el desempeño de personas capacitadas y profesionales, que brinden una orientación y asistencia adecuada, de igual forma, considero que se debe de ampliar la orientación y capacitación al personal que labora en las Defensorías del Niño y del Adolescente con la finalidad de tener un conocimiento amplio, respecto a las nuevas normas legales vigentes que se dan en beneficio de los

niños y adolescentes como la Ley N° 27007 y su Reglamento respectivamente. Por otro lado, al no contar con conciliadores debidamente acreditados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se debe ampliar la facultad prevista en la Ley N° 27007, en el sentido que se debe de integrar excepcionalmente al conciliador extrajudicial con especialización en familia, para pueda ejercer la función conciliadora dentro de una Defensoría del Niño y del Adolescente, en razón de que existen cambios de personal en la Oficina de la DEMUNA, y al tener que capacitar al nuevo personal, se requiere de tiempo para la programación de dicha capacitación.

CUARTA.- La Ley N° 27007 y su Reglamento, establecen los requisitos que debe contener un Acta de Conciliación para que pueda tener el Valor de Título de Ejecución, existiendo una restricción, en el sentido que el conciliador que debe ejercer la función conciliadora en una Defensoría del Niño y del Adolescente, debe acreditar ser miembro de ésta, para su capacitación y acreditación; no debiendo existir una diferenciación con el conciliador extrajudicial con especialización en familia, siendo que ambos cumplen la misma función conciliadora. Por otro lado, la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, no cuenta con la autorización que le faculta la Ley N° 27007, por no contar con los requisitos necesarios para el inicio de los trámites correspondientes, más aún que el personal que labora dentro de la misma desconoce de la Ley que faculta para realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, por ende no existe el interés ni iniciativa para reunir los requisitos y obtener la autorización respectiva, lo que beneficiaría a gran parte de la población melgarina, el poder solucionar sus conflictos familiares, a través de acuerdos mutuos y recíprocos que son plasmados en el Acta de Conciliación, que tiene el valor de una sentencia judicial, ahorrando tiempo, dinero y evitándose un desgaste emocional. Por ello, se debe contar con personal idóneo y capacitado para que pueda desempeñar sus funciones de forma eficiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, C. M. (1994). *Derecho a los Alimentos*. Lima, Perú: Bieli.
- Campana, V. M. M. (2003). *Derecho y obligación alimentaria*. Lima, Perú: Jurista Editores.
- Caivano, R. J. (1998). *Mecanismos Alternativos para la Resolución de Conflictos, Negociación, Conciliación y Arbitraje*. Lima, Perú: Moame Drago.
- Chunga, Ch. C. (s.f.). *Derecho de Familia*. Código Civil Comentado (Tomo 3). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Defensoría del Pueblo. (2009). *Compendio de Normas Básicas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes* (Vol. 1). Lima, Perú: Talleres de Impresores Comerciales S.A.C.
- Díaz, H. J. (2013a). *Manual de Conciliación Extrajudicial*. Lima, Perú: RV GROUP.
- Díaz, H. J. (2013b). *Conciliación Familiar*. Lima, Perú: LAM GRAF E.I.R.L.
- Díez-Picazo, L. y Gullón, A. (1983). *Sistema del derecho civil* (Vol. 4). Madrid, España: Tecnos.
- Fernández, S. C., Gutierrez, C. W., Sosa, J. M., Mesía, R. C., Abad, Y. S., Morales, G. J., ... Figallo, A. G. (2005). *La Constitución Comentada*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Ledesma, N. M. (1998). *La Conciliación Intraprocesal*. Lima, Perú.
- Medina, R. R. G. (s.f.). *Guía para Conciliar Conflictos*. Lima, Perú.
- Méndez, C. M. J. (2001). *Derecho de Familia* (Vol. 3). Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores.
- Morán, M. C. (s.f.). *Derecho de Familia*. Código Civil Comentado (Tomo 3). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Palacio, P. G. H. (2004). *Manual de Derecho Civil* (Vol. 1). Lima, Perú: HUALLAGA E.I.R.Ltda.
- Peralta, A. J. R. (2008). *Derecho de Familia en el Código Civil*. Lima, Perú: IDEMSA.
- Rubio, C. M. (1999). *Estudio de la Constitución Política de 1993* (Vol. 2). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sánchez, R. F. (1912). *Estudios de Derecho Civil*. Madrid, España.

Varsi, R. E. (2012). *Tratado de Derecho de Familia* (Vol. 3). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

HEMEROGRAFÍA

Anónimo. (2002). *Material Básico para Defensorías Comunitarias (Instituto de Defensa Legal)*. Lima, Perú: Gráfica Bellido.

Anónimo. (2004). *Manual de Gestión DEMUNA (Acción por los niños)*. Lima, Perú.

Anónimo. (2008). *Guía para la Formación de Defensorías del Niño, Niña y Adolescente*. Lima, Perú.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (28 de noviembre de 2012) Caso 12.361 [Caso Artavia Murillo y Otros "Fecundación in vitro" vs Costa Rica].

Estudio Gálvez Consultores Asociados. (s.f.). *Obligatoriedad del Procedimiento Conciliatorio Extrajudicial ¿Indigestión Procedimental?*. Lima, Perú.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2012). *Compendio sobre Conciliación*. Lima, Perú.

Ormachea, Ch. I. (2000). Manual de Conciliación Procesal y Pre Procesal. *Revista 3 Edición Especial*. 34.

Tribunal Constitucional. (9 de mayo de 2011). Caso 02132 [Principio del Interes Superior del Niño].

Tribunal Constitucional. (2015). *Compendio normativo*. Lima, Perú: JMD S.R.L.

Vilela, C. K. (s.f.). Algunas cuestiones acerca de la Ley de Conciliación Extrajudicial. *Revista ITA IUS ESTO*, 122-124.

INFORMATOGRAFÍA

Código Civil de Chile. (1 de enero de 1857). Recuperado de: http://ipracinder.info/wp-content/uploads/file/Legislacion/Chile/CODIGO_CIVIL_CHILENO.pdf

Defensoría del Pueblo. (23 de Octubre de 2013). *Portal de Noticias*. Recuperado de: <http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=10865>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (20 de noviembre de 1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Recuperado de: <http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Ley N° 603. (19 de noviembre de 2014). Artículo 109. [Título VII]. *Código de las Familias y del Proceso Familiar*. Bolivia. Recuperado de: <https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/leyes/ley-603.pdf>

Ley N° 14.908. (5 de octubre de 1962). *Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones*. Chile. Recuperado de: <http://www.cajbiobio.cl/Docs/Editor/4/Documentos/LEY%2014.908-actualizada.pdf>

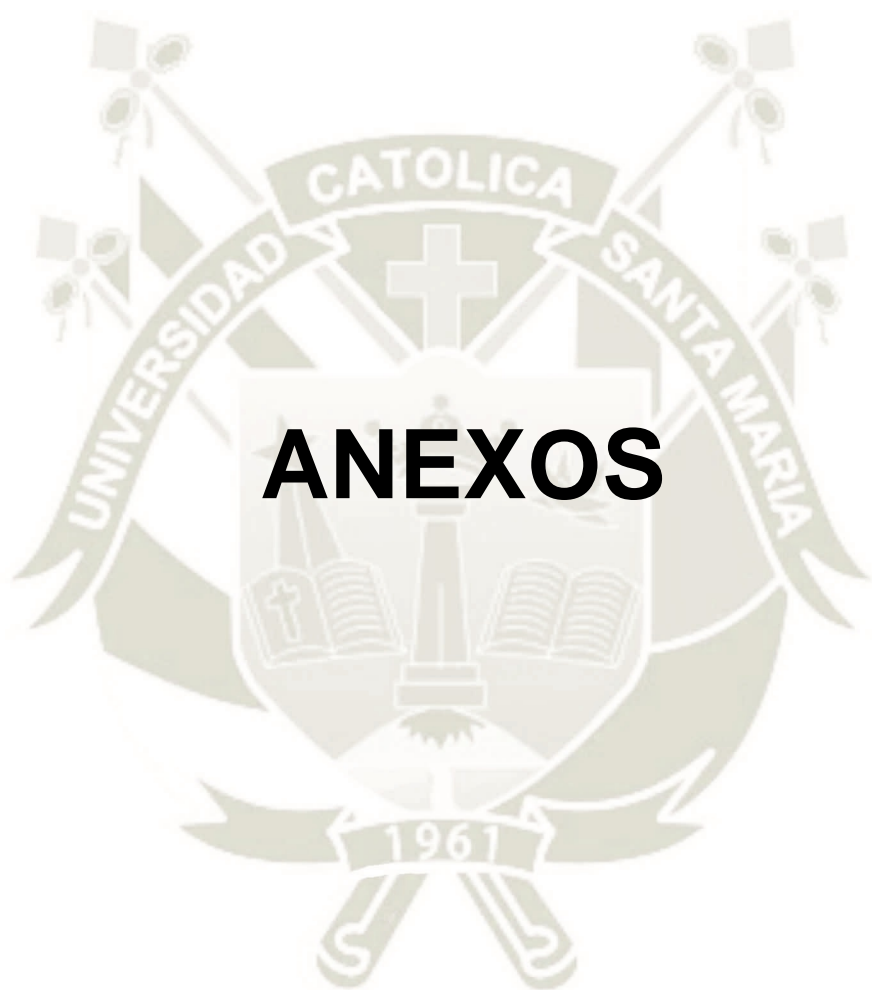
Ley N° 1098. (8 de noviembre de 2006). *Código de la Infancia y la Adolescencia*. Colombia. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2015). *Conciliación Extrajudicial*. Lima, Perú. Recuperado de: <https://www.minjus.gob.pe/conciliacion-extrajudicial/>

Organización de Naciones Unidas (ONU). (10 de diciembre de 1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Recuperado de: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

Organización de Naciones Unidas (ONU). (23 de marzo de 1976). *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*. Recuperado de: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

Organización de los Estados Americanos (OEA). (18 de julio de 1978). *Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica*. Recuperado de: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm



ANEXOS



ANEXO N° 01

PROYECTO DE TESIS

Universidad Católica de Santa María
Escuela de Postgrado
Maestría en Derecho Constitucional



**VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN
DEL ACTA DE CONCILIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007,
DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR – PUNO, AÑO
2011 AL 2013**

Proyecto de Tesis presentado por la Bachiller:

Huisa Mamani, Lourdes Jakelin

Para optar el Grado Académico de:

Maestro en Derecho Constitucional

Asesora:

Dra. Kuong Morales, Shiuli

Arequipa - Perú

2014

I. PREÁMBULO

Por experiencia propia, en el lugar donde realizaba mis prácticas pre-profesionales, una de las actividades que se realizaba eran las consultas gratuitas de toda materia, es allí donde pude observar que habían personas que traían sus Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA, muchos de ellos eran documentos que no contenían todos los requisitos para que en caso de incumplimiento estas sean ejecutadas en el órgano jurisdiccional correspondiente, menos aún tenían la firma de un abogado; asimismo pude observar caso parecido en la DEMUNA de una Municipalidad, donde no contaban con personal idóneo para realizar las audiencias de conciliación, es por ello que los acuerdos plasmados en las Actas de Conciliación no podían ser consideradas como Título de Ejecución; es decir, no tienen carácter de cosa juzgada o valor de sentencia; contrario sensu no tenían la autorización vigente para poder celebrar Actas de Conciliación con Título de Ejecución, es así que se estaría vulnerando el derecho alimentario del menor de edad previsto en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política del Estado, siendo que al efectuarse estas Actas de Conciliación en caso de incumplimiento no podrían ser ejecutados, ello implica recurrir a un Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia o iniciar un proceso judicial de alimentos, donde el acta de conciliación celebrada en la DEMUNA sería insertada solo como medio probatorio, situación que trae como consecuencia que los menores de edad no puedan satisfacer sus necesidades básicas lo que abarca los alimentos, su desarrollo y una vida digna. Ahora bien, la Ley N° 27007, Ley que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución, en el artículo 2° establece las formalidades para la celebración del Acta de Conciliación, sin embargo estas no se cumplen y menos aún se cuenta con personal idóneo y capacitado, y dichas Actas de Conciliación celebradas solo sean consideradas como medio probatorio para el inicio del proceso judicial de alimentos, a pesar de tener dicha facultad que le otorga la mencionada Ley; es por ello, que se debería de prestar mayor atención a las oficinas de la DEMUNA a nivel nacional, porque cumplen una función primordial que es salvaguardar los derechos de niño y del adolescente, más aun donde no existen Centros de Conciliación, con el fin de efectivizar el derecho alimentario y no se tenga que perder más tiempo iniciando un proceso judicial, cuando existen acuerdos de por medio que deben ser cumplidos. Siendo que, el derecho a los alimentos es un derecho constitucional previsto en la Constitución Política del Estado.

II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Vulneración del Derecho Alimentario debido a la inejecución del Acta de Conciliación por incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007, DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar - Puno, año 2011 al 2013.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Campo, Área y Línea de Investigación

Campo : Ciencias Jurídicas

Área : Derecho Constitucional Público

Línea : Derecho Alimentario

1.2.2. Operacionalización de Variables

VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE: ➤ Vulneración del Derecho Alimentario debido a la Inejecución del Acta de Conciliación (Infringir el derecho alimentario siendo un derecho subjetivo de nivel constitucional que tiene una vinculación necesaria a la vida, a la dignidad y a la igualdad, comprende todo aquello para atender a la subsistencia y al bienestar en general).	- Perjuicio del Derecho a la Vida - Concebido en el Ordenamiento Jurídico - Derecho Alimentario - Clasificación del derecho alimentario - Naturaleza Jurídica - Transgresión del Derecho Alimentario - Obligados a la prestación alimentaria - Presupuestos de la obligación alimentaria - Marco Normativo	* Importancia * Definición de Alimentos * Elementos * Características - Vinculo Legal - Necesidad del Alimentista - Posibilidad del Alimentante - Proporcionalidad * Legislación Nacional * Legislación Internacional > En Bolivia > En Chile > En Colombia
VARIABLE DEPENDIENTE: ➤ Incumplimiento de las formalidades previstas en el Artículo 2° de la Ley N° 27007 (Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución; Artículo 2° Valor de las Actas, su incumplimiento produce la ineficacia del Acta de Conciliación y no tener el valor de cosa juzgada).	- Ineficacia del Acta de Conciliación - Conciliación Extrajudicial - Principios - Formalidad - Validez del Acta de Conciliación - Conciliación en materia de familia - Inoperancia de la Facultad otorgada por la Ley N° 27007 - Defensoría Municipal del niño y del Adolescente – DEMUNA - Etapas del Procedimiento de Casos - Requisitos - Intervención de la DEMUNA - Materias Competentes - Marco Normativo	- Acta de Conciliación - Ventajas - Diferencias entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial - Materias conciliables * Formas de Conclusión - Ventajas - Rol del Conciliador * Principios de la DEMUNA * Funciones * Actividades - Materias Conciliables - Materias Vía Compromiso * Legislación * Derechos del niño, niña y adolescente

1.2.3. Interrogantes

1. ¿Cuáles son las consecuencias que se generan al vulnerarse el derecho alimentario previsto en el artículo 6° de la Constitución Política del Estado?
2. ¿Por qué es importante cumplir con las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007 en atención al Derecho Alimentario?
3. ¿Cuáles son las causas que vulneran el derecho alimentario debido a la inejecución del Acta de Conciliación por el incumplimiento del artículo 2° de la Ley N° 27007?

1.2.4. Tipo y Nivel de Investigación

Tipo : Documental.

Nivel : Descriptivo.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Derecho Alimentario se encuentra previsto en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 6° segundo párrafo: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. (...)”, es vital su importancia ya que el menor de edad requiere de un desarrollo adecuado y una vida digna, para ello es indispensable su subsistencia a través del derecho alimentario, es así que, el Código Civil en su artículo 472° establece: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia (...)”; por ello, en protección del menor de edad requiere ejercer este derecho primordial, a efectos de proteger la vida, la salud y la dignidad humana. Actualmente existe la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente en cada institución pública (en la mayoría de los casos en las Municipalidades), que han sido implementadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con la finalidad de brindar un servicio gratuito para proteger, promover, atender y vigilar el cumplimiento estricto de los derechos humanos de los niños y adolescentes, todo ello en bienestar del menor de edad; ahora bien a través de la Ley N° 27007 se les otorgó la facultad de celebrar actas de conciliación con carácter de Título de Ejecución, sin embargo muchas de estas actas no son ejecutables a

razón de que no cumplen con los requisitos establecidos en la mencionada Ley, considerándose solamente como medio probatorio para el inicio de un proceso judicial de alimentos, cuando se debería de ejecutar los acuerdos adoptados y plasmados en el Acta de Conciliación ante el incumplimiento, evitando así el aplazamiento del tiempo, inversión de dinero y un desgaste emocional, ya que es un derecho de necesidad primordial y urgente para la subsistencia y desarrollo del menor de edad.

Mi tema a investigar es fundamentalmente importante, a razón de que es de necesidad urgente y vital para el menor de edad, y por ello se requiere prestar atención a las Oficinas de la DEMUNA en lo que concierne a sus funciones y la facultad otorgada por la Ley N° 27007, todo ello con el fin de que puedan brindar un servicio eficiente en lo que concierne a los derechos de los niños y adolescentes.

Este estudio, es pertinente porque beneficiará a los menores de edad, siendo un sector de la población muy vulnerable y a la vez importante para el desarrollo de la sociedad, es por ello, que los padres deben ser responsables de sus hijos brindándoles la satisfacción de sus necesidades y una vida digna donde puedan desarrollarse y desenvolverse.

Es transcendental, porque ayudará a efectivizar las funciones y facultades de las DEMUNA en bienestar de los menores de edad, más en lugares donde no existen Centros de Conciliación que contribuyen a la solución de conflictos en forma pacífica y rápida, donde ambas partes estén de acuerdo con lo plasmado en el Acta de Conciliación y sean conscientes de que los acuerdos deben ser cumplidos cabalmente.

El derecho alimentario es un tema social, ya que existen menores de edad que no gozan de este derecho primordial, por muchas razones ya sea por abandono del padre, por falta de recursos económicos, por la inconciencia de los padres al procrear hijos por doquier, por padres prematuros o adolescentes, entre otras razones, que no son justificaciones de ninguna manera, en razón de que cada persona es responsable de sus actos y tiene la facultad de decisión, por ello resulta realmente incomprensible como existen padres que simplemente no les interesa el bienestar de sus hijos y se desentienden de la situación; resulta imprescindible restablecer la educación inculcando valores y principios.

2. MARCO TEÓRICO

VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

2.1. PERJUICIO DEL DERECHO A LA VIDA

El derecho alimentario, es un derecho constitucional que está vinculado necesariamente al derecho a la vida, su vulneración contraviene con el derecho inherente y primordial del ser humano que es la vida. Es vital su protección porque comprende la subsistencia de la persona, su desarrollo adecuado y el ejercicio de los demás derechos fundamentales.

El (Tribunal Constitucional, 2015), señala que el Derecho Alimentario se encuentra previsto en el artículo 6° segundo párrafo de la Constitución Política del Estado establece: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. (...)” (p. 18). Siendo el derecho alimentario, un derecho que le corresponde a todo ser humano, como un derecho natural, que tiene origen en las necesidades vitales de la propia naturaleza humana; es por ello, que puede ser considerado como un derecho fundamental, de categoría especial, que forma parte de las instituciones jurídicas del derecho de familia. Por tanto, se analizará y desarrollará los temas importantes que tienen que ver con el derecho alimentario.

2.1.1. EL CONCEBIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Respecto al inicio de la vida humana, siendo considerado desde el momento de la concepción, donde inicia su protección jurídica en el ordenamiento jurídico; es decir, desde el momento de la concepción, se adquieren derechos que deben ser protegidos, ya que estos derechos puedan ser ejercidos de forma plena por el ser humano. Constitucionalmente el (Tribunal Constitucional, 2015), hace mención: “El artículo 2° inciso 1, dispone: Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, (...). El concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece” (p. 13). Asimismo, el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), establece: “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece” (art. 1). Si bien es cierto que, desde la concepción se da inicio a la vida humana, existen diversos criterios jurídicos que convierten este tema controversial y discutible.

Es así que, Fernández et al. (2005), señala:

En relación al momento en que se inicia la vida es preciso mencionar que, a nivel internacional, prevalece el criterio señalado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción. El Pacto de San José dispone que el derecho a la vida deba ser protegido a partir de la concepción. (p. 405)

A la existencia de diversidad de criterios, que amerita un análisis profundizado del tema, es necesario señalar que, particularmente opto por considerar que el inicio de la vida se da a partir de la concepción, consecuentemente, debe darse inicio a su protección legal, considerándose como sujeto de derecho. Es por esta razón, que el derecho a la vida es inherente e imprescindible para el ser humano, y su protección legal es indispensable, por ser considerado el fin supremo de la sociedad y el estado.

2.1.2. DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario, es considerado un derecho Constitucional por su vital importancia, y por beneficiar a los menores de edad, quienes son vulnerables y requieren del ejercicio pleno de este derecho, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. En tal sentido, (Fernández et al., 2005), establece: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (...)” (p. 402). Siendo, el derecho alimentario, un derecho que le corresponde a todo ser humano, como un derecho natural, que tiene origen en las necesidades vitales de la propia naturaleza humana; por ello, es considerado como un derecho fundamental, de categoría especial, que forma parte de las instituciones jurídicas del derecho de familia.

El menor de edad, requiere satisfacer sus necesidades vitales, para que pueda desarrollarse de forma adecuada y tener una vida digna, para que posteriormente contribuya con el desarrollo del país. Las normas legales, deben garantizar la protección del derecho alimentario; a través de sus instrumentos garantistas, que regulen el ejercicio de los derechos inherentes al ser humano, considero que este derecho Constitucional que está referido a los alimentos, se debe priorizar por ser

indispensable y sumamente necesario, su regulación debe estar reflejada a nuestra realidad en todo el ámbito nacional.

2.1.2.1. IMPORTANCIA DEL DERECHO ALIMENTARIO

La importancia del derecho alimentario, radica en cubrir las necesidades básicas de todo ser humano, para su subsistencia por ser un derecho vital; no solo comprende la alimentación en sí, sino que también vivienda, vestido, salud, educación, recreación, entre otros; siendo parte integral del niño y del adolescente. Es así que, (Méndez, 2001) señala: “Que su finalidad es obviamente asistencial y, en sí, extra patrimonial, por encontrarse en juego la conservación de la vida” (p. 451).

Por otro lado, Peralta (2008) señala al respecto:

De acuerdo con nuestra sistemática jurídica civil el contenido de la obligación alimentaria son las prestaciones de dar y comprende todo lo que es indispensable para atender el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, pero si el alimentista fuera menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo. (p. 561)

2.1.2.2. DEFINICIÓN DE ALIMENTOS

La definición de alimentos, es muy compleja y con una diversidad de criterios, los cuales desglosare para poder apreciar que es lo que abarca los alimentos, y a que se encuentra vinculado; es necesario recabar diversos criterios al respecto.

Empezaremos con la opinión de Peralta (2008) quien indica:

La palabra alimentos proviene del latín *alimentum* que a su vez deriva de *alo* que significa simplemente nutrir; empero, no faltan quienes afirman que procede del término *álere*, con la acepción de alimento o cualquier otra sustancia que sirve como nutriente, aun cuando es lo menos probable. En cualquier caso está referido al sustento diario que requiere una persona para vivir. (p. 561)

Los seres humanos necesitamos de alimentos para nuestra subsistencia; el concebido que es sujeto derecho, requiere alimentarse y lo hace a través del cordón umbilical que lo une con la madre, desde este momento se da inicio a la vida humana, que requiere de una subsistencia adecuada hasta el momento de su nacimiento, y posteriormente para su crecimiento y desarrollo vital; considerándose un ser vulnerable que requiere de los alimentos que deben darle sus padres, siendo un derecho primordial y necesario; es por ello su vital importancia, ya que sin los alimentos los seres humanos no podemos vivir.

2.1.2.3. ELEMENTOS DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario, está compuesto por los siguientes elementos:

A. ELEMENTO PERSONAL

- **Alimentista.**- Según Varsi (2012) señala:

Es la persona beneficiada con los alimentos. El titular del derecho alimentario. Llamado también derechohabiente, pretensor, beneficiado, acreedor alimentario, etc. Del artículo 474° del Código, que trata sobre las personas que se deben recíprocamente alimentos, se puede inferir quiénes son las personas beneficiadas. Así tenemos que son: El cónyuge (Art. 474°, inc. 1), Los ascendientes y descendientes (Art. 474°, inc. 2), y Los hermanos (Art. 474°, inc. 3). (p. 439)

- **Alimentante.**- Conforme a lo que señala (Varsi, 2012): “Es la persona obligada al pago de los alimentos. El titular de la obligación alimentaria, del deber jurídico, de la prestación familiar. Llamado alimentante, alimentador, obligado, deudor alimentario” (p. 439).

B. ELEMENTO MATERIAL

Respecto al elemento material, explica Varsi (2012), lo siguiente:

Es la cuota, renta, pago, pensión alimenticia que el alimentante cumple con el alimentista. Se trata de una deuda de valor. Pueden clasificarse en: *Devengadas*; aquellas debidas, atrasadas. *Canceladas*; aquellas pagadas, saldadas. Y *Futuras*; aquellas a devengarse, de cumplimiento mediato. (p. 440)

2.1.2.4. CARACTERÍSTICAS

Con referente a las características de derecho alimentario, que recae en el titular del derecho; y en la Obligación Alimentaria, que recae en el titular del deber jurídico; siendo las siguientes:

A. DERECHO ALIMENTARIO.- Conforme a lo que señala (Peralta, 2008), señala: “El titular de este derecho es el alimentista que puede exigirlo cuando se halle en estado de necesidad” (p. 564).

B. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.- Según (Peralta, 2008), señala: “El titular del deber jurídico de la obligación alimentaria es el alimentante, vale decir, la persona que está obligada a dar la prestación” (p. 565).

2.1.3. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho alimentario tiene la siguiente clasificación:

2.1.3.1. POR SU ORIGEN

Según Varsi (2012), señala que los alimentos, de acuerdo a su origen o causa jurídica, pueden ser:

A. VOLUNTARIOS.- Llamados convencionales; cuando se constituyen como resultado de una declaración de voluntad ínter vivo o mortis causa. (...). Los alimentos voluntarios son expresión de la autonomía privada como fuente de obligaciones.

B. LEGALES.- Los alimentos que derivan directamente de la ley, con independencia de la voluntad, tienen su origen en una disposición legal y no en la celebración de un negocio jurídico. La variedad de situaciones a las que la ley vincula un derecho-deber de alimentos y el hecho de que se trate de situación heterogéneas hace imposible, o cuando menos, complicado hallar elementos comunes para su ordenación.

C. RESARCITORIOS.- Destinados indemnizar a la víctima de un acto ilícito, por ejemplo, al conviviente en caso se produzca la extinción por decisión unilateral. (p. 428-429)

2.1.3.2. POR SU AMPLITUD

Según (Campana, 2003) indica: “Esta clasificación, está hecha en virtud del alcance que tienen los alimentos” (p. 65). Por ello se clasifica de la siguiente manera:

A. NECESARIOS.- Según (Campana, 2003) afirma: “También conocidos como restringidos. Como su nombre lo indica, no es difícil suponer que este tipo de alimentos se refiera a lo estrictamente necesario para vivir, de modo que, quien los deba solo asignará, al acreedor alimentista, lo indispensable para su subsistencia” (p. 66).

B. CONGRUOS.- Conforme a lo que señala Varsi (2012) afirma:

Comprenden lo indispensable para subsistir modestamente, de acuerdo a su posición social. Se fijan conforme al rango, condición de las partes y *modus vivendi*, *necessarium personae*. Cabe precisar que los alimentos congruos son mayores que los necesarios. Se otorgan no solo para que el alimentista pueda subsistir, sino para que lo haga conforme a su posición social. Es la ley la que establecerá quiénes son los alimentistas que pueden demandar alimentos congruos y quiénes pueden demandar alimentos necesarios. Los niños y adolescentes son acreedores de una prestación de alimentos congruos y en ningún caso de alimentos estrictamente necesarios. De ser así se afectaría su interés superior y su derecho al desarrollo integral como derechos humanos específicos. (p. 430)

2.1.3.3. POR SU FORMA

A. TEMPORALES.- Según (Varsi, 2012) afirma: “Solo duran un tiempo. En el caso de la madre, se otorgan a efectos de los gastos del embarazo, esto es, desde la concepción hasta la etapa de posparto, (...) aquellos necesarios para la gestación” (p. 431).

B. PROVISIONALES.- Para Campana (2003) afirma:

Como su nombre lo indica, este tipo de alimentos se otorgan en forma temporal; es decir, admitida la demanda de alimentos, y en tanto no

exista una sentencia judicial definitiva en este proceso que ordene el pago de una cantidad adecuada, el juez asignará una pensión provisional, en razón de la necesidad del recurrente o recurrentes y de la prueba aportada que acredite indubitable relación familiar. (p. 69)

C. DEFINITIVOS.- Para (Varsi, 2012): “Son definitivos cuando dejan de ser provisionales y se conceden en forma fija, concluyente y periódica. Es una clasificación discutible. Pueden variar de acuerdo a la necesidad de quien los pide y las condiciones en que se encuentre el obligado, lo que lleva a establecer que la pensión estará sujeta a revisión permanente a petición del interesado” (p. 431).

2.1.4. NATURALEZA JURÍDICA

Es necesario mencionar dos tesis siendo estas:

a. Tesis Patrimonial.- Según Varsi (2012) señala:

Los alimentos tienen un carácter estrictamente patrimonial, se concretizan en algo material con significado económico, al estar representados por dinero para la adquisición de bienes que permitirán el desarrollo de la persona. (...) Son valorables económicamente y deben ser exigidos a sujetos determinados. Sobre este sustento el derecho a los alimentos se asemeja a los patrimoniales, entre estos, a los obligacionales, no a los derechos personales, no a los reales. (p. 427)

b. Tesis Extra patrimonial.- Según Chunga (s.f.), indica:

En ese sentido se señala que es una institución de carácter especial o sui géneris de contenido patrimonial y finalidad personal conexas a un interés superior familiar, que se presenta con una relación patrimonial de crédito-débito, por lo que existiendo un acreedor puede exigirse al deudor una prestación económica en concepto de alimentos. (p. 226)

2.2. TRANSGRESIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO

El derecho fundamental que tiene todo ser humano, es el derecho a la vida; y para que pueda ser respetado, protegido y ejercido dicho derecho, uno de los presupuestos es el derecho a los alimentos, que es un derecho inherente a la

persona, ya que, a través de ello permite la subsistencia del ser humano y un desarrollo pleno; por tanto se debe evitar su transgresión, especialmente a los menores de edad, que por ser una parte de la población más vulnerable requieren ser protegidos y ameritan una atención mayor.

Ahora bien, por el principio del interés superior del niño, se busca proteger a los menores de edad, garantizando su desarrollo integral. Asimismo, el Tribunal Constitucional (2011), señala respecto al Principio del Interés Superior del Niño, lo siguiente:

10. De este modo, el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente se constituye en aquel valor especial y superior según el cual los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales.

Es así que, al transgredir el derecho a los alimentos, que es un derecho inherente e indispensable para el menor de edad; conlleva al menoscabo de este derecho primordial y, afectaría directamente al derecho a la vida, siendo que los responsables para la subsistencia y atención del menor de edad son los progenitores, a través de la relación paterno filial, es que el menor de edad adquiere dicho derecho. Ante ello, es necesario contar con los instrumentos jurídicos necesarios, para poder evitar esta transgresión; por tanto, es realmente necesaria la atención y la prevalencia de la aplicación del principio del interés superior del niño, a efectos de salvaguardar sus derechos y hacer efectivo el respeto de los mismos.

2.2.1. OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA

La obligación alimentaria tiene su origen dentro de las relaciones familiares, por ello, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Así está considerado en el (Decreto Legislativo N°

295, 1984), establece: “Se deben alimentos recíprocamente: 1. Los cónyuges. 2. Los ascendientes y descendientes. 3. Los hermanos” (art. 474).

2.2.2. PRESUPUESTOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA

La obligación alimentaria se sustenta en los siguientes presupuestos esenciales:

2.2.2.1. Vínculo Legal.- Según (Varsi, 2012) afirma: “Se trata de una relación familiar reconocida por la Ley, cónyuges, convivientes e hijos. Los alimentos derivan de la voluntad o del parentesco” (p. 421).

2.2.2.2. Necesidad del Alimentista.- Como bien afirma (Varsi, 2012): “Esta basado en el requerimiento, en el menester del alimentista de no poder atender su manutención per se. Se traduce en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de edad, anciano, incapaz, persona con discapacidad o falta de trabajo” (p. 421).

2.2.2.3. Posibilidad del Alimentante.- Respecto a este tema, mencionaremos la opinión de Peralta (2008), quien afirma:

Aquel obligado a satisfacer las necesidades debe estar en la aptitud de atender dichos requerimientos. No se permite que quien a sí mismo no puede atenderse ni sufragar sus gastos mal se haría en comprometerlo con terceros. En este caso predomina el derecho a conservar la propia existencia. Es preciso que la persona a quien se le reclama el cumplimiento de la obligación alimentaria esté en condiciones de suministrarlos. Se entiende que el obligado tiene el deber de ayudar a sus allegados o a la persona que tenga derecho dentro de sus posibilidades económicas y sin llegar al sacrificio de su propia existencia (...). (p. 581)

2.2.2.4. Proporcionalidad en su fijación.- Respecto sobre el presupuesto de proporcionalidad en su fijación Varsi (2012), afirma:

Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, de equilibrio y justicia. Debemos partir siempre de la premisa que los alimentos no pueden ser utilizados como medio de participar en el patrimonio del alimentante ni mucho menos de obtener su fortuna. Los alimentos son otorgados por una cuestión *ad necessitatem*. El alimentista es quien

necesita, no quien exige participar –tal cual accionista- en las utilidades o nuevos ingresos del alimentante. “La cuota alimentaria no tiene por finalidad hacer participar al alimentado de la riqueza del alimentante, sino cubrir las necesidades del primero”, *máxime* si las necesidades del alimentista están satisfechas. Los alimentos no se conceden *ad utilitatem*, o *ad voluptatem* sino *ad necessitatem*. (p. 422)

2.3. MARCO NORMATIVO

2.3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL

Según el (Tribunal Constitucional, 2015), señala que, en la Constitución Política del Perú: “Artículo 6°, segundo párrafo, (...) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres (...)” (p. 18). Asimismo, se encuentra regulado en el (Decreto Legislativo N° 295, 1984), dispone: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. (...)” (art. 472).

En concordancia con la (Ley N° 27337, 2000), establece: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto” (art. 92).

2.3.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

El (Tribunal Constitucional, 2015), señala que, en la Constitución Política del Perú: “Artículo 55°; los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” (p. 30).

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 1948), hace mención respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 25°, inciso 1; toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; (...). Inciso 2; la maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

De igual forma, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1989), señala sobre la Convención sobre los Derechos del Niño: “Artículo 3° inciso 2; los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Artículo 6° inciso 1; los Estados Partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y en el inciso 2; los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1978) referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 19°; derechos del Niño, Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Ahora bien, en la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1976), respecto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: “Artículo 24° inciso 1; todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

2.3.2.1. EN BOLIVIA

En el país de Bolivia, la asistencia familiar se regula conforme a la Ley N° 603 (2014), Código de las Familias y del Proceso Familiar; en el Título VII Asistencia Familiar, Capítulo Único Contenido y Extensión, en el artículo 109 establece:

La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se

priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos (...).

2.3.2.2. EN CHILE

En el (Código Civil de Chile, 1857), en el artículo 323, que establece: “Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio (...)”.

Asimismo, en el artículo 332, del Código Civil de Chile (1857), establece:

Los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengarán hasta que cumplan veintiún años, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los veintiocho años; que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o que, por circunstancias calificadas, el juez los considere indispensables para su subsistencia.

2.3.2.3. EN COLOMBIA

En la Ley N° 1098 (2006), Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 24, respecto al Derecho a los Alimentos, establece:

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

2.4. INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007

En la Ley N° 27007 (1998), establece: “Ley faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente, a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, y señala como materias conciliables: Alimentos, tenencia y régimen de visitas”.

El Título de Ejecución, significa que las Actas de Conciliación tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Es decir, que los compromisos establecidos en el Acta, deben ser obligatoriamente cumplidos por las partes. En caso de incumplimiento de los acuerdos del Acta, éste dará lugar a su exigencia ante el Poder Judicial.

2.4.1. INEFICACIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

El Acta de Conciliación, que cumplen con todos los requisitos previstos en la legislación correspondiente, produce efectos jurídicos de una sentencia judicial, debidamente ejecutoriada; es decir, tiene carácter de título de ejecución ante su incumplimiento, por ser un acto voluntario entre las partes y contribuyen a la solución de conflictos de intereses, de manera rápida y económica. El incumplimiento de los requisitos establecidos, conlleva a la ineficacia de la ejecución de los acuerdos plasmados en el Acta de Conciliación; asimismo, sería una pérdida de tiempo y desgaste emocional, el tener que iniciar un proceso judicial de alimentos, adjuntando el Acta de Conciliación como medio probatorio.

2.4.2. CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2015), respecto a la Conciliación Extrajudicial: “La Conciliación Extrajudicial es una manera rápida y económica de resolver los conflictos con la colaboración de un tercero llamado conciliador. A través del diálogo, el conciliador facilita la comunicación entre las partes, lo que permite superar las diferencias y arribar a acuerdos que satisfacen a todos. Luego, se suscribe un Acta de Conciliación”.

Asimismo, Medina (s.f.), señala al respecto:

Con la conciliación no solo solucionas tú mismo tus conflictos, con ganancias para ti y para la otra parte, sino ahorras tiempo y dinero que te demandaría un largo y tedioso proceso judicial (la parte vencida paga las costas y costos

del proceso judicial), restableces tus relaciones con la otra parte, resguardas tu imagen personal, comercial o familiar, en razón que se desarrolla en un clima de absoluta confidencialidad y la solución es más propensa a cumplirse en relación a una sentencia, porque es creada por ti y por la otra parte. (p. 1)

Por tanto, la Conciliación Extrajudicial, es muy beneficioso para quienes asisten a solucionar sus conflictos mediante el diálogo y la comunicación, donde interviene un mediador llamado conciliador, que permite la facilitación de la comunicación, llegándose a un acuerdo, ya sea, total o parcial, donde ambas partes pactan voluntariamente; todo ello, implica el ahorro de tiempo, dinero, y evitándose un desgaste emocional; lo que no sucede en un proceso judicial que demanda tiempo y solvencia económica. Es mucho más beneficioso, tratándose de derechos urgentes como es el de alimentos, que es un derecho fundamental e imprescindible.

2.4.2.1. ACTA DE CONCILIACIÓN

El Acta de Conciliación, es el documento que contiene el acuerdo al que se ha llegado. Está firmada por las partes y el conciliador, que representa la conclusión de un procedimiento conciliatorio. Además, constituye título de ejecución; es decir, en caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. Conforme a lo que señala (Díaz, 2013a) hace mención a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, artículo 16°, establece: “El Acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la Conciliación Extrajudicial (...)” (p. 224).

2.4.2.2. VENTAJAS

Así como señala Díaz (2013a, pág. 68) son los siguientes:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| - Brevedad del proceso | - Informalidad |
| - Flexibilidad | - Confidencialidad |
| - Conservación de Derechos | - Prevalecen los Intereses |
| - Legalidad de los Acuerdos | - Economía |
| - Mínimo desgaste emocional | - Brevedad del proceso |
| - Preservación de relaciones útiles | - Solución dada por las partes. |

2.4.2.3. DIFERENCIAS ENTRE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

Respecto a las diferencias entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial, la diferencia es la flexibilidad y la solución a sus conflictos, que se logran mediante acuerdos mutuos, todo ello en la Conciliación Extrajudicial.

Por tanto, Ormachea (2000), detalla estas diferencias:

- **Nivel de solución:** El proceso se basa en dar solución a las pretensiones o exigencias planteadas en la demanda, contestación de la demanda y la reconvencción. La conciliación apunta a resolver los problemas presentes o no en estos documentos para satisfacer los intereses y necesidades de las partes.
- **Criterio de Solución:** Mientras que el proceso judicial interpreta y aplica primordialmente el derecho para solucionar conflictos, la conciliación es flexible como para aplicar cualquier otro criterio elegido imaginativamente por las partes y el tercero.
- **Atmósfera:** En tanto que el proceso maneja una racionalidad y discurso confrontacional, la conciliación fomenta un clima lo suficientemente cooperativo para solucionar los problemas.
- **Orientación del conflicto:** El proceso enfatiza su labor en la discusión de los hechos pasados. Éstos se encuadran dentro de un supuesto de hecho para obtener una consecuencia jurídica. La conciliación reconoce la importancia de la discusión del pasado pero encamina la discusión hacia situaciones ideales a futuro (soluciones).
- **Control del proceso:** A diferencia del gran control que posee el juez en el proceso, la conciliación plantea una relación horizontal entre el conciliador y las partes. (p. 34)

2.4.2.4. MATERIAS CONCILIABLES

De acuerdo a (Díaz, 2013a), hace mención de la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070: "Artículo 7°; son materia de conciliación las

pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. En materia de familia, son conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición. El conciliador en su actuación deberá aplicar el Principio del Interés Superior del Niño. (...)” (p. 221).

2.4.3. PRINCIPIOS

Según Díaz (2013a), hace mención del Decreto Supremo N° 014-2008-JUS Reglamento de la Ley de Conciliación en el artículo 2°; detalla:

- a) Principio de Equidad
- b) Principio de Veracidad
- c) Principio de Buena Fe
- d) Principio de Confidencialidad
- e) Principio de Imparcialidad
- f) Principio de Neutralidad
- g) Principio de Legalidad
- h) Principio de Celeridad
- i) Principio de Economía

2.4.4. FORMALIDAD

Conforme a lo que señala Díaz (2013a) respecto a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, en el artículo 15° dispone:

Se da por concluido el procedimiento conciliatorio por:

- a) Acuerdo total de las partes.
- b) Acuerdo parcial de las partes.
- c) Falta de acuerdo entre las partes.
- d) Inasistencia de una parte a dos (2) sesiones.
- e) Inasistencia de ambas partes a una (1) sesión.
- f) Decisión debidamente motivada del Conciliador en Audiencia efectiva, por advertir violación a los principios de la Conciliación, por retirarse antes de la conclusión de la Audiencia o por negarse a firmar el Acta de Conciliación (...). (p. 223)

En concordancia con la Ley N° 26872 (1997), en el Artículo 16°, dispone:

El Acta deberá contener lo siguiente:

- a. Número correlativo.
- b. Número de expediente.
- c. Lugar y fecha en la que se suscribe.
- d. Nombres, número del documento oficial de identidad y domicilio de las partes o de sus representantes (...).
- e. Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador.
- f. Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador.
- g. Los hechos expuestos en la solicitud de conciliación, (...).
- h. El Acuerdo Conciliatorio, sea total o parcial, (...).
- i. Firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso.
- j. Huella digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso.
- k. El nombre, registro de colegiatura, firma y huella del Abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo sea este total o parcial.

2.4.5. VALIDEZ DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

En lo señalado por Díaz (2013a), respecto a la Ley N° 26872 modificado por el Decreto Legislativo N° 1070, en el artículo 16° dispone:

La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales a), b), f), j) y k) del presente artículo no enerva la validez del Acta, en cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15. La omisión en el Acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), g), h), e i) del presente artículo, dará lugar a la nulidad documental del Acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16-A. El Acta no deberá contener en ningún caso, enmendaduras, borrones,

raspaduras ni superposiciones entre líneas, bajo sanción de nulidad (...). (p. 224)

En concordancia con el (Decreto Supremo N° 014-2008-JUS, 2008) Reglamento de la Ley de Conciliación, en el artículo 22° establece:

El acta que contiene el acuerdo conciliatorio es un documento privado y puede ser ofrecido como medio de prueba en un proceso judicial. El acuerdo conciliatorio subsiste aunque el documento que lo contiene se declare nulo. El acta que contiene el acuerdo conciliatorio debe precisar los acuerdos ciertos, expresos y exigibles establecidos por las partes. En todos los casos de actas que contengan acuerdos conciliatorios, necesariamente deberá consignarse la declaración expresa del Abogado del centro de conciliación verificando la legalidad del acuerdo. El Acta de Conciliación a que se refiere el artículo 16 de la Ley será redactada en un formato especial que deberá ser aprobado por el MINJUS. El Acta de Conciliación se ejecutará a través del proceso único de ejecución. (p. 241)

2.2.6. CONCILIACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA

Al respecto Díaz (2013b), en el manual de conciliación familiar señala:

La conciliación familiar es un procedimiento de cooperación en el cual un tercero imparcial con el propósito de ayudar a lograr la reorganización de la familia, facilita el diálogo entre sus miembros a efectos de definir y resolver sus conflictos, a través de la toma de decisiones de sus propios protagonistas. En nuestro país la conciliación familiar fue considerada en sus inicios como una materia conciliable obligatoria, es decir, que era necesario agotar la conciliación antes de demandar una pretensión familiar que verse sobre derechos disponibles. Sin embargo, fue modificada dicha disposición y en la actualidad la conciliación en asuntos de familia es considerada una materia facultativa, pues las partes o agentes del conflicto familiar tienen la libertad y facultad de elegir si desean agotar la conciliación antes de demandar judicialmente o de recurrir directamente al proceso judicial. (p. 47)

2.5. INOPERANCIA DE LA FACULTAD OTORGADA POR LA LEY N° 27007

Las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente – DEMUNA, que a nivel nacional funcionan dentro de las Municipalidades, desempeñan una labor muy importante en protección y promoción de los derechos de los niños y adolescentes, la atención que brindan es gratuita, por ello beneficia a una gran parte de la población que no cuenta con recursos económicos.

Ahora bien, a través de la Ley N° 27007, que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente, a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución, lo que permite que las Actas de Conciliación que se celebran en la DEMUNA, tengan valor de sentencia o de cosa juzgada; es decir, los acuerdos voluntarios pactados y plasmados en dicha Acta, deben ser cumplidos a cabalidad por las partes; ya que, en caso de incumplimiento de los acuerdos, se podrá exigir su cumplimiento ante el Poder Judicial.

En muchas Municipalidades a nivel nacional donde funcionan la DEMUNA, no cuenta con la autorización para poder efectuar actas de conciliación con título de ejecución, dicha facultad otorgada por la Ley N° 27007; ello les inhabilita para que las actas emitidas sean consideradas con mérito de título de ejecución, y solamente tienen valor de medio probatorio para impulsar e iniciar un proceso judicial; lo que dificulta el ejercicio pleno del derecho alimentario de los menores de edad, siendo un derecho constitucional que se ve limitado. Situación que se debe tomar en cuenta y prestar mayor atención, más aun en ciudades y lugares donde no cuentan con centros de conciliación autorizados que brinden este servicio; y con dicha facultad otorgada por la Ley N° 27007 y su reglamento, estaría beneficiando a una gran parte de la población y más aún a quienes no cuentan con recursos económicos, y tratándose de los derechos de los niños y adolescentes quienes requieren un desarrollo adecuado y bienestar general.

2.5.1. DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Respecto a la Defensoría del Niño y del Adolescente, en el Material Básico para Defensorías Comunitarias, Anónimo (2002), afirma:

La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio para promover y proteger los derechos que las leyes reconocen a los niños, niñas y

adolescentes. Este servicio está reconocido en el artículo 45° del Código de los Niños y Adolescentes donde además, dice que debe estar inscrito en la Oficina Nacional de Defensorías del MIMDES y que es gratuito. (p. 19)

Por otro lado, en el Manual de Gestión DEMUNA, Anónimo (2004), señala:

La DEMUNA es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo Ente Rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) *–ahora MIMP–*. En general, la DEMUNA es un espacio Municipal para la Protección y Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. (p. 8)

2.5.1.1. PRINCIPIOS

Por otro lado, en el Manual de Gestión DEMUNA, Anónimo (2004), señala respecto a los principios en los que se basa las DEMUNA, para que puedan brindar su servicio, estos son:

- El Interés Superior del Niño y del Adolescente.
- Gratuidad.
- Confidencialidad.
- Carácter orientador y no impositivo.
- No discriminatorio.
- Legalidad. (p. 9)

2.5.1.2. FUNCIONES

Con respecto a las funciones, mencionaremos lo que señala el Material Básico para Defensorías Comunitarias, Anónimo (2002), quien detalla que todas las Defensorías del Niño y del Adolescente tienen iguales funciones (...), siendo las siguientes:

- Intervenir cuando un niño, niña o adolescente sufra algún tipo de violación a sus derechos.
- Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.
- Brindar orientación a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no existan procesos judiciales.

- Velar por el cumplimiento de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Denunciar ante las autoridades las faltas y delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes. (p. 21)

2.5.1.3. ACTIVIDADES DE LA DEMUNA

Las actividades de la DEMUNA según el Manual de Gestión DEMUNA, (Anónimo, 2004), señala: “Se desarrollan en función de los Planes de Trabajo, los cuales a su vez deben ser parte de los Planes de Desarrollo local de los Municipios” (p. 13).

En ese sentido, para la elaboración del Plan de Trabajo, Anónimo (2004), hace la siguiente recomendación:

- Elaborar un diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia en la localidad, identificando los principales problemas y acciones que se desarrollan.
- Hacer un análisis de los principales problemas, recursos y acciones de la niñez y la adolescencia en la localidad.
- Definir las fortalezas y debilidades de la DEMUNA.
- Precisar objetivos para el año de trabajo.
- Establecer líneas de actividades, de protección (atención de casos) y de promoción.
- Definir las metas que se esperan alcanzar.
- Definir las actividades por cada línea.
- Definir el presupuesto por actividad, los responsables y recursos para su ejecución. (p. 14)

2.5.2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CASOS

Las acciones que realiza la Defensoría del Niño y Adolescente, para la atención de un caso involucran varias etapas, siendo éstas detalladas en el Manual de Gestión DEMUNA, es por ello que Anónimo (2004), señala las siguientes:

1°. RECEPCIÓN.- Es la etapa donde el defensor toma conocimiento del caso, sea de manera verbal o escrita. Para ello se abrirá un expediente donde se anexará la ficha de recepción de casos.

2°. CALIFICACIÓN.- Es el momento en el cual el Defensor evalúa el caso recibido y determina la acción a seguir. Para tal efecto se podrían realizar:

- Entrevistas a las niñas, niños y adolescentes, así como a las partes por separado para poder evaluar de manera imparcial la situación presentada.
- Verificación de los hechos expuestos, a través de gestiones, coordinaciones y visitas sociales.
- Evaluaciones, que podrán ser realizadas por profesionales especializados.
- Otras acciones que considere necesarias el Defensor, siempre que no atenten con la integridad de las partes.

3°. EJECUCIÓN.- Como resultado de la calificación el Defensor puede disponer la ejecución de lo siguiente:

a. Derivación.- El defensor dispone el traslado del caso para su atención a otro servicio o institución. Para ello, se deberá coordinar previamente con la institución pertinente. La derivación procede:

- Cuando el caso no le compete a la DEMUNA, por tratarse de una Falta o Delito. Entonces, se debe denunciar inmediatamente a la autoridad competente.
- Cuando la DEMUNA no cuenta con los recursos humanos profesionales o no puede ofrecer la atención especializada requerida por el usuario. Frente a ello, canalizará el caso a otro organismo competente y hará el seguimiento del caso.

b. Intervención.- Cuando la DEMUNA trata directamente el caso. Esto se hará en base al personal, y puede contar con el apoyo de otros recursos disponibles de su propia Municipalidad o en la localidad.

4°. SEGUIMIENTO.- Es el conjunto de acciones que realiza la DEMUNA a fin de:

- Verificar los avances de los casos atendidos.
- Lograr el cumplimiento de las medidas tomadas en favor de las niñas, niños y adolescentes.

- Evaluar el cumplimiento de las Actas de Conciliación. (p. 16-18)

2.5.3. REQUISITOS PARA QUE LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, A PUEDAN REALIZAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES CON TÍTULO DE EJECUCIÓN

Así lo describe (Anónimo, 2004): “La DEMUNA tiene que estar autorizada por el MIMDES *—ahora MIMP—* para que sus actas de conciliación en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas tengan Título de Ejecución; es decir, el mismo valor que una sentencia judicial” (p. 25).

En ese sentido, Anónimo (2004), hace mención de la siguiente documentación:

- Solicitud dirigida a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMDES *(ahora MIMP)* firmada por la máxima autoridad que promueve la Defensoría del Niño y Adolescente, precisando el nombre de ésta; así como el número que le identifica en el Registro de Defensorías del Niño y del Adolescente del MIMDES *(ahora MIMP)*.
- Ficha de Datos proporcionada por la Dirección General de la Niña, Niño y Adolescente del MIMDES *(ahora MIMP)* en la cual se consignará claramente los nombres del Conciliador de la Defensoría del Niño y Adolescente y del abogado encargado de verificar la legalidad de las actas. Dicha ficha tendrá carácter de declaración jurada.
- Copia autenticada de carnet de colegiatura del abogado encargado de verificar la legalidad de las actas y constancia de estar habilitado expedida por el Colegio de Abogados al cual pertenece.
- Declaración Jurada o Carta de Compromiso de la máxima autoridad de la institución promotora, manifestando la intención de apoyar la labor de conciliación en la Defensoría del Niño y del Adolescente; así como la continuidad del servicio.
- Infraestructura e inmobiliario adecuados así como un ambiente privado para las conciliaciones.
- Adecuado sistema de archivo y registro de las actas de conciliación.
- Relación del personal de apoyo que garantice la entrega de las invitaciones a las audiencias de conciliación.
- Horario de atención de mínimo diez horas semanales. (p. 39)

2.5.4. INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Conforme a lo que señala (Anónimo, 2008): “El defensor puede implementar mecanismos de solución como resultado de la calificación” (p. 18). Dichos mecanismos tienen la finalidad de que el defensor pueda intervenir en cada caso que se presente, ante la Defensoría del Niño y Adolescente.

Por ello, Anónimo (2008), menciona los siguientes mecanismos:

- Orientación.
- Derivación.
- Competencia.
- Conciliación Extrajudicial. (p. 18)

2.5.5. MATERIAS COMPETENTES DE LA DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

Respecto a las materias conciliables, que son competentes para la Defensoría del Niño y del Adolescente, podemos señalar Anónimo (2008), afirma que se puede resolver vía conciliación las siguientes materias:

- **ALIMENTOS.-** Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación de la niña, niño y adolescente, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de post parto.
- **TENENCIA.-** Es un derecho de la patria potestad, por el cual uno de los progenitores asume, el padre o la madre asume el cuidado de la niña, niño o adolescente, y vive con el mismo.
- **RÉGIMEN DE VISITAS.-** Es el derecho que tiene el padre o la madre que no vive con su hijo o hija de mantener contacto con el mismo. (p. 19)

2.6. MARCO NORMATIVO

2.6.1. LEGISLACIÓN

Conforme a la Ley N° 27972 (2003), en el artículo 84° establece:

Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: (...) 1.3. Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad local. (...) 2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: (...) 2.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes DEMUNA de acuerdo a la legislación sobre la materia.

Por otro lado, en la (Ley N° 27337, 2000), en el artículo 42° dispone:

La Defensoría del Niño y del Adolescente es un servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito. En concordancia con el artículo 44° señala: La Defensoría estará integrada por profesionales de diversas disciplinas de reconocida solvencia moral, con el apoyo de personas capacitadas para desempeñar las funciones propias del servicio, quienes actuarán como Promotores-Defensores. Las Defensorías que no cuenten con profesionales podrán estar integradas por personas de la comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para el ejercicio de su función.

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.

Gaón Narváez Lorena Alexandra (2012), “El Derecho de Alimentos que tienen los menores frente a la actuación de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el distrito metropolitano de Quito”; concluyendo que si bien es cierto que las reformas al Título V del derecho a alimentos, del Código de la Niñez y Adolescencia han mejorado mucho en el procedimiento para reclamar alimentos en cuanto a la celeridad, inmediación, economía procesal y en también en lo referente al incremento de las prestaciones alimenticias, sin embargo lo que se necesita es enfatizar en la correcta y eficiente difusión, para que los comparecientes conozcan minuciosamente sus beneficios y los favores que brindan las mismas, y así de esta forma lograr una oportuna y eficaz aplicación.

Roque Paredes Ofelia (2010), “Administración Estratégica como principal factor en la mejora continua de la calidad del servicio del Sistema Nacional de Defensoría del Niño y del Adolescente –Caso Sub-Dirección de Defensoría de la DINNA del MIMDES, Lima”; concluyendo que cada institución participante del SNDNA tiene planes, misión y visión propios, que no coordinan entre sí, lo que origina una escasa concertación de los actores sociales y sobre todo no está garantizando el efecto “sombra” del plan sobre los planes de cada uno de ellos. Asimismo el ente rector no dispone de los recursos necesarios y de los canales de reporte en tiempo real del estado de situación de las DNAs, de su servicio y problemas, lo que origina que la SDD-DINNA tome decisiones basadas en aspectos externos y generales, pues no dispone de la información real de cada modelo de DNAs y de la zona geográfica en donde se encuentra ubicada.

Colina Borrero Magda Nelly (2008), “Las Sanciones Previstas en la Ley Orgánica para la protección del Niño y Adolescente ante el incumplimiento de la Obligación Alimentaria, Maracaibo”, concluyendo que las Defensorías del Niño y del Adolescente, son órganos administrativos del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, cuya estructura y funcionamiento pueden brindar el servicio que se señala. Según sus atribuciones, contenidas en el artículo 202 de la Ley que rige la materia, se señala que pueden prestar servicios a los niños y adolescentes y a sus familias con orientación y apoyo interdisciplinario, y muy especialmente, a tenor de lo dispuesto en el literal “f” del referido artículo, para estimular el fortalecimiento de los lazos familiares, a través de procesos no judiciales. Las Defensorías del Niño y

del Adolescente, deben funcionar en todas las parroquias de todos los municipios de cada estado. Por ello, se constituyen en entes altamente comprometidos y vinculados con las vivencias de la comunidad en la que se encuentran enclavadas.

Roa Soto Marcela del Rosario y Serrano Moreno Andrea Catalina (2002), “Inasistencia Alimentaria como fenómeno Jurídico-Social estudio realizado en el Municipio de Chía-Cundinamarca”; concluyendo que la asistencia alimentaria debe ser prioridad en la política de cualquier Estado en el mundo y específicamente el compromiso de los padres, maestros y en general de los adultos que deben proporcionar las condiciones suficientes para el desarrollo de los niños como pieza fundamental de todo País.

4. OBJETIVOS

1. Determinar las consecuencias que se generan al vulnerarse el Derecho Alimentario previsto en el artículo 6° de la Constitución Política del Estado.
2. Identificar la importancia del cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007 en atención al Derecho Alimentario.
3. Determinar las causas que vulneran el Derecho Alimentario debido a la inejecución del Acta de Conciliación por el incumplimiento del artículo 2° de la Ley N° 27007.

5. HIPÓTESIS

DADO QUE, el derecho alimentario es un derecho constitucional, que se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Política del Estado, y a la existencia de Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA que no constituyen título de ejecución debido al incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007.

ES PROBABLE QUE, se esté vulnerando el derecho alimentario que le corresponde al alimentista, debido a las restricciones de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007, respecto al defensor-conciliador.

III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

1.1. PRECISIÓN

Técnica : Observación Documental y Cuestionario.

Instrumento : Ficha de Observación Estructurada y Cédula de preguntas.

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO

VARIABLE	INDICADORES Y SUB INDICADORES	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO
Variable Independiente VULNERACIÓN DEL DERECHO ALIMENTARIO DEBIDO A LA INEJECUCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Perjuicio del Derecho a la Vida - Concebido en el Ordenamiento Jurídico - Derecho Alimentario <ul style="list-style-type: none"> * Importancia * Definición de Alimentos * Elementos * Características 	Técnica: Observación Documental y Cuestionario Instrumento: Ficha de Observación Estructurada y Cédula de Preguntas	1
	<ul style="list-style-type: none"> - Clasificación del Derecho Alimentario - Naturaleza Jurídica - Relación Jurídica - Patrimonialidad o Extra patrimonialidad 		2
	<ul style="list-style-type: none"> - Transgresión del Derecho Alimentario - Obligados a la prestación alimentaria - Presupuestos de la obligación alimentaria * Vínculo Legal * Necesidad del Alimentista * Posibilidad del Alimentante * Proporcionalidad en su fijación 		3
	<ul style="list-style-type: none"> - Marco Normativo * Legislación Nacional * Legislación Internacional 		4
Variable Dependiente INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 27007	<ul style="list-style-type: none"> - Ineficacia del Acta de Conciliación - Conciliación Extrajudicial * Acta de Conciliación * Ventajas * Diferencia entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial * Materias conciliables 	Técnica: Observación Documental y Cuestionario Instrumento: Ficha de Observación Estructurada y Cédula de Preguntas	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Principios - Formalidad * Formas de Conclusión - Validez del Acta de Conciliación - Conciliación en materia de familia 		6
	<ul style="list-style-type: none"> - Inoperancia de la Facultad otorgada por la Ley N° 27007 - DEMUNA * Principios * Funciones * Actividades de la DEMUNA 		7
	<ul style="list-style-type: none"> - Etapas del Procedimiento de casos - Requisitos - Intervención - Materias competentes - Marco Normativo * Legislación 		8

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA			
N° _____			
EXPEDIENTE N°:		AÑO:	
DEMUNA:			
MATERIA:			
- SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: <i>(Quien lo solicita)</i>			
- BENEFICIARÁ A CUANTOS HIJOS:			
- FORMALIDAD DEL ACTA DE CONCILIACIÓN:			
- CONCLUSIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN: <i>(acuerdo total, parcial o falta de acuerdo)</i>			
- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN:			
- AUTORIZACIÓN DE LA DEMUNA:			
OTROS DATOS:			

FORMULARIO DE PREGUNTAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - PUNO

El presente formulario de preguntas es anónimo y tiene por finalidad netamente académica, para conocer la importancia del Derecho Alimentario y la aplicación de la Ley N° 27007 en la DEMUNA y sus dificultades actuales. Gracias por su colaboración.

Datos Generales del Encuestado:

Cargo:..... **Desde que fecha aprox.:**.....

Funciones que desempeña:.....

.....

Preguntas:

1. Para usted es importante el respeto del Derecho Constitucional a los Alimentos en los menores de edad, ¿Por qué?

2. De los casos atendidos en la Oficina de la DEMUNA sobre alimentos cuántos son mensualmente, mencione un aproximado.

3. Cuántos casos de incumplimiento de las Actas de Conciliación sobre alimentos celebrados en la DEMUNA se dan mensual y/o anual, mencione un aproximado.

4. Considera usted que es indispensable y necesario la función que cumple la DEMUNA, ¿Cómo repercute en la sociedad?

5. Conoce usted referente a la facultad que se les otorga a las Defensorías del Niño y del Adolescente a través de la Ley N° 27007, ¿Qué opinión tiene al respecto?

6.Cuál es su opinión respecto a la validez del Acta de Conciliación celebradas en la DEMUNA actualmente, ¿Son ejecutables?

7. Considera usted que es importante que las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA tenga el valor de sentencia y puedan ser ejecutadas judicialmente, conforme al artículo 2° de la Ley N° 27007. ¿Por qué?

8. En la actualidad cuales son las dificultades y limitaciones que afronta la DEMUNA en el desempeño de sus funciones.

Si desea agregar algo respecto al tema:

.....

GRACIAS

1.2. CUADRO DE COHERENCIAS

VARIABLES	INDICADORES Y SUB INDICADORES	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	ÍTEMS DE INSTRUMENTOS
Variable Independiente	<ul style="list-style-type: none"> - Perjuicio del Derecho a la Vida - Concebido en el Ordenamiento Jurídico - Derecho Alimentario * Importancia * Definición de Alimentos * Elementos * Características - Clasificación del derecho Alimentario - Naturaleza Jurídica * Relación Jurídica * Patrimonialidad o Extra patrimonialidad - Transgresión del Derecho Alimentario - Obligados a la prestación alimentaria - Presupuestos de la obligación alimentaria * Vínculo Legal * Necesidad del Alimentista * Posibilidad del Alimentante * Proporcionalidad en su fijación - Marco Normativo * Legislación Nacional * Legislación Internacional 	<p>Técnica:</p> <p>Observación</p> <p>Documental y</p> <p>Cuestionario</p> <p>Instrumento:</p> <p>Ficha de</p> <p>Observación</p> <p>Estructurada y</p> <p>Cédula de Preguntas</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
Variable Dependiente	<ul style="list-style-type: none"> - Ineficacia del Acta de Conciliación - Conciliación Extrajudicial * Acta de Conciliación * Ventajas * Diferencia entre la Conciliación Judicial y Extrajudicial * Materias conciliables - Principios - Formalidad * Formas de Conclusión - Validez del Acta de Conciliación - Conciliación en materia de familia - Inoperancia de la Facultad otorgada por la Ley N° 27007 - DEMUNA * Principios * Funciones * Actividades de la DEMUNA - Etapas del Procedimiento de casos - Requisitos - Intervención - Materias competentes - Marco Normativo * Legislación 	<p>Técnica:</p> <p>Observación</p> <p>Documental y</p> <p>Cuestionario</p> <p>Instrumento:</p> <p>Ficha de</p> <p>Observación</p> <p>Estructurada y</p> <p>Cédula de Preguntas</p>	<p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>

1.3. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS

1.3.1. FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA	
N° _____	
EXPEDIENTE N°:	AÑO:
DEMUNA:	
MATERIA:	
- SOLICITUD DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: <i>(Quien lo solicita)</i>	
- BENEFICIARÁ A CUANTOS HIJOS:	
- FORMALIDAD DEL ACTA DE CONCILIACIÓN:	
- CONCLUSIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN: <i>(acuerdo total, parcial o falta de acuerdo)</i>	
- SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONCILIACIÓN:	
- AUTORIZACIÓN DE LA DEMUNA:	
OTROS DATOS:	

1.3.2. CÉDULA PREGUNTAS

FORMULARIO DE PREGUNTAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - PUNO

El presente formulario de preguntas es anónimo y tiene por finalidad netamente académica, para conocer la importancia del Derecho Alimentario y la aplicación de la Ley N° 27007 en la DEMUNA y sus dificultades actuales. Gracias por su colaboración.

Datos Generales del Encuestado:

Cargo:..... **Desde que fecha aprox.:**.....

Funciones que desempeña:.....

Preguntas:

1. Para usted es importante el respeto del Derecho Constitucional a los Alimentos en los menores de edad, ¿Por qué?
2. De los casos atendidos en la Oficina de la DEMUNA sobre alimentos cuántos son mensualmente, mencione un aproximado.
3. Cuántos casos de incumplimiento de las Actas de Conciliación sobre alimentos celebrados en la DEMUNA se dan mensual y/o anual, mencione un aproximado.
4. Considera usted que es indispensable y necesario la función que cumple la DEMUNA, ¿Cómo repercute en la sociedad?
5. Conoce usted referente a la facultad que se les otorga a las Defensorías del Niño y del Adolescente a través de la Ley N° 27007, ¿Qué opinión tiene al respecto?
- 6.Cuál es su opinión respecto a la validez del Acta de Conciliación celebradas en la DEMUNA actualmente, ¿Son ejecutables?
7. Considera usted que es importante que las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA tenga el valor de sentencia y puedan ser ejecutadas judicialmente, conforme al artículo 2° de la Ley N° 27007. ¿Por qué?
8. En la actualidad cuales son las dificultades y limitaciones que afronta la DEMUNA en el desempeño de sus funciones.

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN

2.1. UBICACIÓN ESPACIAL

El estudio se realizará en el Departamento de Puno, Provincia de Melgar, Distrito de Ayaviri en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar.

2.2. UBICACIÓN TEMPORAL

La presente investigación comprende el periodo 2011 al 2013.

2.3. UNIDADES DE ESTUDIO

Las unidades de estudio están conformadas por un número de 270 Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar – Puno, tomándose el íntegro de los casos del periodo 2011 al 2013. Asimismo se efectuará la cédula de preguntas al personal que labora en la DEMUNA.

UNIVERSO ESTRATIFICADO

UNIVERSO	DOCUMENTACIÓN	N° TOTAL
274	Actas de Conciliación sobre pensión de alimentos Años 2011 al 2013	270
	ENCUESTADOS	N° TOTAL
	Formulario de Preguntas Al personal que labora en la DEMUNA	4
	TOTAL DE DOCUMENTACIÓN Y ENCUESTADOS	274

Fuente: Elaboración Propia extraído de la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar.

2.4. FUENTES

- ❖ Ley N° 26872 (13 de noviembre de 1997). Ley de Conciliación, modificado por el Decreto Legislativo N° 1070.
- ❖ Decreto Supremo N° 014-2008-JUS. (30 de agosto de 2008). Reglamento de la Ley de Conciliación.

- ❖ Ley N° 27007 (3 de diciembre de 1998). Ley que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con Título de Ejecución.
- ❖ Decreto Supremo N° 006-99-PROMUDEH. (20 de mayo de 1999). Reglamento de la Ley que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución - Ley N° 27007.
- ❖ Decreto Supremo N° 007-2004-MIMDES. (20 de noviembre de 2004). Modificación del Reglamento de la Ley que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de Ejecución - Ley N° 27007.
- ❖ Ley N° 27972 (27 de mayo de 2003). Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley N° 27337 (7 de agosto de 2000). Código de los Niños y Adolescentes.
- ❖ Decreto Legislativo N° 295 (24 de julio de 1984). Código Civil.

3. ESTRATEGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.1. ORGANIZACIÓN

La investigadora en coordinación con el encargado o Jefe de la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, con autorización previa del Jefe Inmediato Superior, procederá a efectuar la recolección documental de Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA y efectuar la encuesta.

3.2. RECURSOS

RECURSOS HUMANOS	INVERSIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Investigadora - Asesor de la Investigación - Alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar - Jefe o Encargado de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar. - Desplazamiento a la DEMUNA y otros 	<ul style="list-style-type: none"> * Inversión de tiempo. * S/. 2 000.00 * Solicitud de permiso para la recolección de datos. * Coordinación. * S/. 1 000.00

RECURSOS MATERIALES	INVERSIÓN
- Computadora e insumos	S/. 400.00
- Impresión en general	S/. 500.00
- Servicio de copiadora	S/. 300.00
- Servicio de Transporte	S/. 400.00
- Internet	S/. 250.00
- Libros de Derecho y otros	S/. 850.00
- Útiles de escritorio	S/. 100.00
- Gastos de empastados e impresiones	S/. 600.00
- Otros gastos	S/. 400.00

RECURSOS FINANCIEROS	INVERSIÓN
- Recursos Humanos	S/. 3000.00
- Recursos Materiales	S/. 3800.00
Teniendo un total aproximado	S/. 6800.00

3.3. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

El instrumento que se utilizará es la ficha de observación estructurada, lo que permitirá la revisión de las Actas de Conciliación sobre pensión de alimentos celebradas en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar – Puno, con el fin de verificar la cantidad de casos atendidos, la cantidad de beneficiarios, el cumplimiento de las Actas de Conciliación y el cumplimiento del Artículo 2° de la Ley N° 27007; asimismo, se probará la cédula de preguntas aplicada al personal que labora en la Oficina de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Melgar, que indicará el conocimiento de la Ley N° 27007, la importancia de la validez del Acta de Conciliación, así como las dificultades y limitaciones que afronta actualmente la Oficina de la DEMUNA.

3.4. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS

Una vez recolectado los datos, estos se sistematizarán estadísticamente para el análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y sugerencias; mediante cuadros estadísticos (tablas y gráficas) y la síntesis de la encuesta aplicada.

IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO

TIEMPO ACTIVIDADES	Julio 2014	Agosto 2014	Setiembre 2014	Octubre 2014	Noviembre 2014	Diciembre 2014
1. Recolección de Datos	X	X				
2. Estructuración de Resultados			X	X		
3. Informe Final					X	X

V. BIBLIOGRAFÍA

Campana, V. M. M. (2003). *Derecho y obligación alimentaria*. Lima, Perú: Jurista Editores.

Chunga, Ch. C. (s.f.). *Derecho de Familia*. Código Civil Comentado (Tomo 3). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Díaz, H. J. (2013a). *Manual de Conciliación Extrajudicial*. Lima, Perú: RV GROUP.

Díaz, H. J. (2013b). *Conciliación Familiar*. Lima, Perú: LAM GRAF E.I.R.L.

Fernández, S. C., Gutierrez, C. W., Sosa, J. M., Mesía, R. C., Abad, Y. S., Morales, G. J., ... Figallo, A. G. (2005). *La Constitución Comentada*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Medina, R. R. G. (s.f.). *Guía para Conciliar Conflictos*. Lima, Perú.

Méndez, C. M. J. (2001). *Derecho de familia* (Vol. 3). Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores.

Peralta, A. J. R. (2008). *Derecho de Familia en el Código Civil*. Lima, Perú: IDEMSA.

Varsi, R. E. (2012). *Tratado de Derecho de Familia* (Vol. 3). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

HEMEROGRAFÍA

Anónimo. (2002). *Material Básico para Defensorías Comunitarias (Instituto de Defensa Legal)*. Lima, Perú: Gráfica Bellido.

Anónimo. (2004). *Manual de Gestión DEMUNA (Acción por los niños)*. Lima, Perú.

Anónimo. (2008). *Guía para la Formación de Defensorías del Niño, Niña y Adolescente*. Lima, Perú.

Ormachea, Ch. I. (2000). Manual de conciliación procesal y pre procesal. *Revista 3 Edición Especial*. 34.

Tribunal Constitucional. (9 de mayo de 2011). Caso 02132 [Principio del Interes Superior del Niño].

Tribunal Constitucional. (2015). *Compendio Normativo*. Lima, Perú: JMD S.R.L.

INFORMATOGRAFÍA

Código Civil de Chile. (1 de enero de 1857). Recuperado de: http://ipra-cinder.info/wp-content/uploads/file/Legislacion/Chile/CODIGO_CIVIL_CHILENO.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (20 de noviembre de 1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Recuperado de: <http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Ley N° 603. (19 de noviembre de 2014). Artículo 109. [Título VII]. Código de las Familias y del Proceso Familiar. Bolivia. Recuperado de: <https://www.migracion.gob.bo/upload/marcoLegal/leyes/ley-603.pdf>

Ley N° 1098. (8 de noviembre de 2006). Código de la Infancia y la Adolescencia. Colombia. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2015). *Conciliación Extrajudicial*. Lima, Perú. Recuperado de: <https://www.minjus.gob.pe/conciliacion-extrajudicial/>

Organización de Naciones Unidas (ONU). (10 de diciembre de 1948). *Declaración universal de los derechos humanos*. Recuperado de: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

Organización de los Estados Americanos (OEA). (18 de julio de 1978). *Convención americana sobre derechos humanos o pacto de san José de Costa Rica*. Recuperado de: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

Organización de Naciones Unidas (ONU). (23 de marzo de 1976). *Pacto internacional de los derechos civiles y políticos*. Recuperado de: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

ANEXO N° 2 - MATRÍZ DE RESULTADOS RESPECTO A LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN Y ENCUESTA, DEMUNA-MPM-A

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<i>FIN:</i> Determinar e identificar las causas que generan la vulneración del Derecho Alimentario debido a la inejecución de las Actas de Conciliación celebradas en la DEMUNA, por incumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 2° de la Ley N° 27007.	Modificar la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, referente a las formalidades que establece el artículo 2° de la mencionada Ley y su Reglamento.	Mediante la Técnica de la Observación documental y el cuestionario, se acceden a los datos que permiten identificar las causas que generan la vulneración del derecho alimentario, debido a la inejecución de las actas de conciliación que no cumplen con las formalidades previstas en la Ley N° 27007.	Prestar mayor atención a las Defensorías del Niño y del Adolescente, mediante supervisiones y capacitaciones para que puedan brindar un servicio adecuado. Resguardar el derecho alimentario mediante su protección y respeto, siendo que es indispensable para la subsistencia y el bienestar general de los alimentistas.
<i>PROPÓSITO:</i> Reducir la vulneración del Derecho Alimentario, mediante la ejecución de las actas de conciliación celebradas en las DEMUNA ante el incumplimiento del mismo, con la modificación de la Ley N° 27007.	Al lograr la modificación del artículo 2° de la Ley N° 27007, que permite que los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia, puedan ejercer la función conciliadora excepcionalmente en la DEMUNA, y al cumplir con las formalidades previstas en dicha Ley, las actas de conciliación tengan el valor de una sentencia judicial.	Se utiliza la Técnica de la observación documental, el instrumento de la ficha de observación estructurada para recabar la información de las actas de conciliación celebradas en la DEMUNA; y el cuestionario con la cédula de preguntas, que es aplicada al personal que laboran en la DEMUNA quienes brindan información de la labor que cumplen, las dificultades y limitaciones que afrontan.	Con la modificación del artículo 2° de la Ley N° 27007, se reduce la vulneración del derecho alimentario, ya que permite que las actas de conciliación que cumplen con las formalidades previstas en la ley antes mencionada; puedan ser ejecutables; y los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia puedan ejercer la función conciliadora en las DNA.
<i>COMPONENTES:</i> 1. El derecho alimentario es un derecho constitucional e inherente al ser humano, reconocido y protegido en nuestra Carta Magna; se origina en la relación paterno-filial, que conlleva a la existencia de un derecho y un deber, en beneficio de los alimentistas. 2. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que a través de acuerdos mutuos y voluntarios plasmados en un Acta de Conciliación, ponen fin a los	1. El derecho alimentario por tener una connotación constitucional, es de vital importancia su protección y resguardo, ya que permite la subsistencia del alimentista mientras se encuentre en estado de vulnerabilidad, y posteriormente pueda valerse por sí mismo. 2. Con la conciliación extrajudicial se logra la solución de conflictos de forma pacífica, donde los acuerdos dados entre las partes obedecen	Los cuadros estadísticos que están compuestos por tablas y gráficas, permiten determinar que la concurrencia a la DEMUNA es variable de un año con otro y el cumplimiento de las actas de conciliación celebradas (aportes de los obligados) de igual forma es variable; por tanto si dichas actas de conciliación tendría la validez de una sentencia judicial, la concurrencia aumentaría y el cumplimiento sería más consecutivo.	A la existencia de una variabilidad de la concurrencia a la DEMUNA, el cumplimiento de las Actas de Conciliación y los beneficiados con los acuerdos plasmados en las Actas de Conciliación celebrados en la DEMUNA, amerita que no debe existir diferencia entre el defensor conciliador con el conciliador extrajudicial con especialización en familia, para efectos de ejercer la función conciliadora, siendo que

<p>conflictos de intereses, evitándose un desgaste emocional, ahorrando tiempo y dinero; siendo el conciliador un facilitador de la comunicación entre las partes.</p> <p>3. La Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, es decir que las actas de conciliación celebradas en la DEMUNA tengan el valor de una sentencia judicial y su incumplimiento conlleva a su exigencia en la instancia correspondiente.</p>	<p>exclusivamente a su propia voluntad; asimismo se restaura la comunicación entre las partes, y el procedimiento conciliatorio es breve.</p> <p>3. La Ley N° 27007 permite que las Defensorías del Niño y del Adolescente puedan celebrar actas de conciliación que tienen el valor de una sentencia judicial, que conlleva al ahorro de tiempo, dinero y evita el desgaste emocional que ocasiona el inicio de un proceso judicial.</p>	<p>Respecto a la encuesta aplicada al personal que labora en la DEMUNA, se puede observar que existe un desconocimiento de la Ley N° 27007, pero conocen de la importancia del derecho alimentario.</p> <p>Con relación a los beneficiados que en la mayoría de los casos son los menores de edad, contarían con un respaldo ante el incumplimiento de dichas actas de conciliación, si éstos tuvieran el valor de cosa juzgada, que permita su exigencia ante la instancia correspondiente.</p>	<p>ambos se encuentran capacitados, todo ello, en razón de que existe cambios de personal en cada gestión municipal, y para poder ser acreditado como conciliador de una Defensoría del Niño y del Adolescente, debe ser miembro de la misma.</p>
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>1. Conocer la vital importancia del derecho alimentario y cómo influye de forma beneficiosa su protección y resguardo, siendo que permite la subsistencia del ser humano, por ello se encuentra previsto en el artículo 6° segundo párrafo de la Constitución Política del Estado; y no solo comprende alimentación en sí, sino que también vestido, vivienda, educación, recreación, salud, entre otros.</p> <p>2. Impulsar la función conciliadora en la DEMUNA, ya que las actas de conciliación que cumplen con las formalidades que establece la Ley N° 27007, tendrán el valor de sentencia judicial; en beneficio de las personas de bajos recursos económicos que recurren a la DEMUNA con el fin de orientación y asistencia para el resguardo de los derechos del niño y adolescente según sus facultades.</p> <p>3. Lograr la modificación de la Ley N° 27007, que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, integrando excepcionalmente al conciliador extrajudicial especializado en familia, para que pueda ejercer la función conciliadora en la DEMUNA.</p>	<p>1. Impulsar a las Defensorías del Niño y del Adolescente a nivel nacional para que puedan obtener la autorización que les faculta la Ley N° 27007 y puedan realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución y los acuerdos plasmados en las actas de conciliación sean ejecutables en las instancias correspondientes.</p> <p>2. Promover la conciliación extrajudicial como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, para que las personas tengan información adecuada y accedan a solucionar sus conflictos mediante la conciliación extrajudicial, resultando beneficioso para poner fin a sus conflictos mediante acuerdos mutuos que tengan la validez de cosa juzgada.</p> <p>3. Obtener la modificación de la Ley N° 27007 respecto a las formalidades, integrando excepcionalmente a los conciliadores extrajudiciales con especialización en familia, para que puedan ejercer la función conciliadora en las Defensorías del Niño y del Adolescente, por encontrarse debidamente capacitados para ello.</p>	<p>Al impulsar a las Defensorías del Niño y del Adolescente que puedan tener la autorización de poder realizar las conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, resultando beneficioso al ahorrar dinero, tiempo y evitar el desgaste emocional que se invierte en el inicio de un proceso judicial.</p> <p>Al promover la conciliación extrajudicial, se logra una cultura de paz, donde las partes puedan solucionar sus conflictos a través de la comunicación y mediante un tercero que es el conciliador quien facilita la comunicación entre las partes, lográndose acuerdos mutuos y voluntarios que son plasmados en un Acta de Conciliación, que tiene el valor de Título de Ejecución.</p> <p>Al modificar la Ley N° 27007 que faculta a las Defensorías del Niño y del Adolescente realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución, se reduciría la vulneración del derecho alimentario, mediante la celebración de actas de conciliación que tengan el valor de sentencia judicial.</p>	<p>Integrar al conciliador extrajudicial con especialización en familia, para que pueda ejercer excepcionalmente la función conciliadora en la Defensoría del Niño y del Adolescente, siendo que se encuentra debidamente capacitado y acreditado, ante los cambios de personal que se dan cada cierto tiempo en una Municipalidad, y se tenga que esperar a la programación de una nueva capacitación para ser acreditado como conciliador de una Defensoría del Niño y del Adolescente; y así la DEMUNA pueda tener la autorización respectiva para que puedan acceder a la facultad que les otorga la Ley N° 27007.</p>

LEY N° 27007

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FACULTA A LAS DEFENSORIAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE A REALIZAR CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES CON TITULO DE EJECUCION

Artículo 1°.- De las facultades.

1.1. Las Defensorías del Niño y el Adolescente debidamente autorizadas, podrán realizar conciliaciones extrajudiciales sobre las materias contempladas en el Artículo 48°, literales c) y d) del Código de los Niños y Adolescentes y en la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-97-JUS, en temas que versen sobre derechos disponibles, con carácter de gratuidad y acorde con las formalidades establecidas en la Ley N° 26872. Las Actas derivadas de estas conciliaciones constituyen título de ejecución.

1.2. El Fiscal Provincial de Familia realizará conciliaciones en materia de violencia familiar de conformidad con el Capítulo Segundo del Título Segundo del Texto Unico Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260.

Artículo 2°.- Valor de las Actas.

Las Defensorías del Niño y el Adolescente, a las que se refiere el Artículo 1° de la presente ley, realizan acciones de conciliación sin el requisito de convertirse en Centros de Conciliación, y las Actas suscritas ante ellas constituyen título de ejecución, para lo cual, debe cumplir con lo establecido en el Artículo 16° de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, entendiéndose que el inciso 7) está referido al nombre y firma del abogado de la Defensoría del Niño y el Adolescente, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados.

Artículo 3°.- Carácter obligatorio.

La Conciliación Extrajudicial es un requisito de procedibilidad previo a los procesos que señala el Artículo 1° de la presente ley y de conformidad con el Artículo 6° de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación.

Artículo 4°.- De la Autorización, Supervisión y Capacitación.

El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, PROMUDEH, velará por la adecuada capacitación de los responsables de las Defensorías del Niño y el Adolescente contempladas en el Artículo 1° de la presente ley, en coordinación con el Ministerio de Justicia. El PROMUDEH, autorizará, supervisará y llevará el Registro del funcionamiento de las Defensorías, que tengan las facultades señaladas en la ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- De la modificatoria.

Modifícase el Artículo 30° de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 006-97/JUS, en los términos siguientes:

"Artículo 30°.- Las Defensorías del Niño y el Adolescente debidamente autorizadas podrán, en ejercicio de sus atribuciones, llevar adelante audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos originados por violencia familiar previsto por la presente ley; y los casos de alimentos, colocación provisional y reconocimiento voluntario de filiación, señalados en los literales c) y d) del Artículo 48° del Código de los Niños y Adolescentes, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias.

Las Actas derivadas de estas conciliaciones constituyen título de ejecución."

Segunda.- De la vigencia de la ley.

La obligatoriedad a que se refiere el Artículo 3° de la presente ley, rige en el mismo término que señala la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación.

Tercera.- De la reglamentación.

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por el titular del sector, reglamentará la presente ley, en un plazo que no excederá de los 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

VICTOR JOY WAY ROJAS

Presidente del Congreso de la República

RICARDO MARCENARO FRERS

Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA

Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

ALFREDO QUISPE CORREA

Ministro de Justicia